



**El Gobierno de la Alianza, el Sindicalismo Argentino
y los repertorios de protesta laboral
(1999-2001)**

Tesis de Maestría en Ciencia Política y Sociología

María de la Paz Colonna

Director de Tesis: Dr. Arturo Fernández

Mayo 2016

Índice

Introducción y Planteamiento Teórico-Methodológico	3
Capítulo 1: Antecedentes del Objeto de Estudio: Los años 90 en la Argentina: Transformación y complejización del sindicalismo argentino	20
1.1 Cambios en el mundo del trabajo a nivel global	
1.2 La Argentina frente a los cambios	
1.3 La década del 90 y el cambio neoliberal	
1.4 Menem, el cambio estructural y el sindicalismo	
Capítulo 2: El Gobierno de la Alianza y la proyección política del sindicalismo.....	45
2.1 La llegada de la Alianza al Poder: Definiendo estrategias hacia la unidad de la CGT	
2.2 La Reforma Laboral y la ruptura sindical	
2.3 El Frente Sindical y la Crisis Política de la Alianza	
2.4 Del Blindaje a la Ley de Déficit Cero: Acción y reacción sindical	
2.5 De las elecciones legislativas a la renuncia de De la Rúa	
Capítulo 3: Conflictividad y protesta laboral, desde la Asunción De la Rúa hasta diciembre de 2001.....	67
3.1 De Corrientes a la Crisis en el Senado	
3.2 De la búsqueda de alcanzar un pacto social al aumento de la confrontación	
3.3 De Cavallo al Paro General del 13 de diciembre de 2001	
3.4 De la protesta laboral a la conflictividad social	
Capítulo 4: Análisis de Datos	92
4.1 Las protestas laborales	
4.2 Los "Repertorios Tradicionales" y los "Repertorios Novedosos"	
4.2.1 La CGT Oficial	
4.2.2 La CGT Disidente	
4.2.3 La CTA	
4.3 Las demandas y los repertorios de la protesta laboral	
Capítulo 5: Conclusiones	103
5.1 El gobierno de la Alianza, el sindicalismo y la Crisis del 2001	
5.2 Cambios en los repertorios de la protesta laboral durante el Gobierno de la Alianza	
Bibliografía	109

Resumen

El objetivo de esta tesis es explorar el fenómeno del sindicalismo argentino en el contexto de decadencia y crisis del modelo neoliberal, para ello se describe el rol de las Organizaciones Sindicales durante el Gobierno de la Alianza y la Crisis del 2001 mediante el análisis de los cambios que se registran a nivel de los repertorios de la protesta laboral. La guía para realizar estas indagaciones es la hipótesis de que, en el período de análisis, la movilización social ya no era articulada de manera central a través de los canales tradicionales de mediación sindical y que las Centrales Sindicales tendieron a incorporar nuevos repertorios de protesta laboral que son tributarios de los procesos de movilización encarnados por los Nuevos Movimientos Sociales.

Introducción

Planteamiento teórico-metodológico

El propósito general de esta investigación es explorar el fenómeno del sindicalismo argentino en el contexto de decadencia y crisis del modelo neoliberal. Durante los años 90, el modelo económico ortodoxo instalado por Carlos Menem tuvo importantes consecuencias sobre el mundo del trabajo y el campo sindical tradicionalmente peronista. Los cambios que se produjeron a partir de la imposición de nuevas formas de gestión y organización del trabajo (contrataciones precarias e inestables, tercerización de servicios, cuestionamiento de las formas de negociación colectiva, con su reemplazo por los acuerdos individuales y por empresa, sumados a los aumentos por productividad) repercutieron profundamente en las formas de acción y representación sindical. Este proceso fue acompañado por el decrecimiento de la conflictividad laboral, producto del impacto de la flexibilización laboral y la amenaza disciplinadora del desempleo (Svampa, 2007).

En 1999 asumió la presidencia Fernando de la Rúa, como candidato de la coalición de gobierno llamada Alianza, que, si bien logró recoger las demandas de los ciudadanos que bregaban por mayor transparencia política, no presentaba un modelo de desarrollo alternativo al vigente. El nuevo gobierno debió enfrentar una recesión que tenía raíces profundas en las políticas neoliberales implementadas en la década anterior (Pereyra, 2008). Al poco tiempo de asumir, el gobierno comenzó a dar muestras de su incapacidad para ofrecer alternativas reales a la crisis inminente y sus políticas económicas de ajuste, reducción de salarios y controles sobre los depósitos bancarios, abonaron las condiciones para que se produjera un nuevo impulso para la movilización social. A medida que se agravaba la crisis económica y social aumentaba la importancia de las protestas (Pereyra, 2008; Godio, 2002; Gordillo, 2010).

Esas acciones de protesta presentaban características sumamente novedosas, ya que tenían la particularidad de que no eran canalizadas a través de los mecanismos institucionalizados de las organizaciones obreras, tal como había sido predominantemente

hasta ese momento. Comenzaron a cobrar protagonismo nuevos actores, cuyas acciones no estaban estrictamente relacionadas con el mundo sindical y terminaron cumpliendo un rol determinante en el desenlace de la crisis que culminó con la renuncia del presidente de la Rúa (Gordillo, 2010).

Al pasar revista a las principales líneas de investigación que buscaron dilucidar los sentidos de lo ocurrido en el gobierno de la Alianza, y la crisis del 2001, se evidencia que una buena parte de los estudios tendieron a centrarse en los llamados Movimientos Sociales y a destacar la dimensión de la novedad. El concepto de movimientos sociales supone formas de movilización social que desafían el marco de acción establecido por la “política convencional”, es decir, que se desarrollan fuera de los espacios de acción política y social institucionalizados en las democracias liberales, como la participación en partidos políticos o en el proceso electoral (Manzano, 2004). Al analizar los sucesos del 2001 en clave de nuevos movimientos sociales, muchos de los trabajos académicos se focalizaron en la protesta social, que no es más que una forma particular de acción colectiva. Esto llevó a que diversos análisis dejaran en un segundo plano a los actores históricamente ligados a los procesos de organización y acción colectiva como el sindicalismo (Merklen, 2005). Gran parte de estas líneas interpretativas buscaban contraponer el fenómeno de los movimientos sociales con la lógica de movilización propia de las organizaciones sindicales, soslayando en el análisis que la configuración de los sujetos colectivos solo puede ser entendida como resultante de una multiplicidad de afiliaciones y de vínculos complejos (Merklen, 2005).

Dada la centralidad que históricamente tuvo el sindicalismo como articulador de las demandas colectivas, no es casual que, luego de las primeras interpretaciones centradas en los nuevos movimientos sociales, los analistas comenzaran a posar su mirada en este actor. Muchos de los trabajos buscaron destacar ciertas transformaciones en el movimiento obrero y se instaló el debate en torno a la idea de “revitalización sindical”. El término, aunque tiene matices en cuanto a su aplicación por distintos autores y contextos, hace referencia al proceso que se generó en torno al 2003 como consecuencia de las transformaciones que operaron a partir de la crisis de la etapa neoliberal, y que se caracterizó por un sindicalismo

que comienza a fortalecerse y a desplegar nuevas estrategias para consolidar dicha transformación. Este modelo era la contracara del modelo sindical propio de la década del 90, que era descripto como un sindicalismo desarticulado, debilitado y replegado (Etchemendy y Collier, 2007; Lenguita, 2011; Trajtemberg, Senén González y Medwid, 2010; Palomino, 2005).

Entre estos dos modelos sindicales (el debilitado de la década del 90 y el revitalizado a partir del 2003) existió un punto de inflexión, que fue precisamente la etapa que comprende el gobierno de Fernando de la Rúa y la crisis del 2001. Estos procesos son los que motivan el interés en investigar la problemática del sindicalismo argentino en un momento de quiebre, como la crisis del 2001, y llevan a preguntarnos sobre su rol en ese período y los cambios que operaron en él como consecuencia del contexto.

Las Ciencias Sociales han procurado ofrecer diferentes marcos interpretativos para los fenómenos del sindicalismo y de los movimientos sociales, entendiéndolos como categorías analíticas diferentes. En líneas generales, los trabajos provenientes de la Ciencia Política proponen perspectivas teóricas que explican al sindicalismo como un actor institucional, cuyo principal rol es la intermediación de intereses en relación con el Estado, el Sistema Político y el Empresariado. Este tipo de enfoques priorizan el análisis de la acción colectiva sindical, en función de su inscripción de clase, dentro del sistema de la sociedad industrial capitalista. En la vereda contraria y sobre todo desde la Sociología, los Movimientos Sociales suelen ser analizados desde la perspectiva de la novedad y de su contraste con las prácticas propias de los sindicatos y de los partidos políticos. Estas perspectivas teóricas buscan enfatizar el hecho de que los movimientos sociales son actores externos a las instituciones y autónomos respecto del Estado. En síntesis, las teorías que explican el sindicalismo priorizan enfoques “desde arriba”, mientras que las teorías que explican los movimientos sociales priorizan los enfoques “desde abajo” (Ferrero, 2005). Esta investigación parte del supuesto que es posible y necesario superar los compartimentos rígidos que procuran explicar los procesos de acción colectiva sindical y de

los movimientos sociales, articulando enfoques y categorías teóricas que suelen ser presentadas como contradictorias.

Para poder dar cuenta de la pregunta-guía que motiva esta investigación se han establecido los siguientes objetivos:

Objetivo general:

- Describir el rol de las organizaciones sindicales durante el gobierno de de la Rúa y su proyección durante la crisis del 2001.

Objetivos específicos:

- Describir los cambios a nivel de los repertorios de la protesta laboral convocada y organizada por las centrales sindicales en el período comprendido entre la asunción del presidente de la Rúa en el año 1999 hasta su renuncia en diciembre de 2001.

- Comparar los repertorios específicos de cada una de las centrales sindicales con los “repertorios tradicionales” de la protesta laboral del sindicalismo argentino.

- Identificar a las centrales sindicales más proclives a adoptar nuevos repertorios de protesta laboral y las centrales sindicales en las que prevalecen los repertorios tradicionales.

- Determinar la existencia de repertorios de protesta laboral propios de cada una de las centrales sindicales.

Se parte de una serie de supuestos que operan como hipótesis generales y específicas.

Hipótesis general:

- Durante el gobierno de de la Rúa se produjo un proceso de exacerbación de la movilización social cuya novedad era el hecho de que su convocatoria no era articulada a través de los patrones históricos y tradicionales de mediación sindical.

Hipótesis específicas:

- En el contexto del gobierno de de la Rúa y de la crisis del 2001 las centrales sindicales incorporaron nuevos repertorios de protesta laboral que son tributarios de los procesos de movilización encarnados por los nuevos movimientos sociales.

- Las centrales sindicales tendieron a incorporar repertorios que no solo incluyen a sectores sindicalizados sino a todos aquellos que planteaban un cuestionamiento al modelo económico vigente.
- Los cambios en los repertorios de la protesta laboral fueron más profundos en las centrales sindicales no oficiales (CTA y CGT Disidente), mientras que la CGT Oficial reproduce en mayor medida los repertorios asociados a las formas tradicionales.

La metodología que se utilizará en esta investigación es de tipo cualitativo. Esta elección radica en el hecho de que el problema de investigación busca dar cuenta de los cambios operados en actores colectivos, sus contextos e interacciones desde una perspectiva holística. Se utilizará para ello un diseño flexible basado en la Teoría Fundamentada en los Datos, ya que permite captar aspectos relevantes de la realidad que puedan ir surgiendo en el desarrollo de la investigación. En tal sentido los contextos conceptuales serán concebidos como guías para el desarrollo de la investigación permitiendo, al mismo tiempo, un continuo diálogo con la realidad. El objetivo es llevar adelante un procedimiento de análisis que contribuya a generar conceptos y desarrollar teorías a partir del material empírico (Jones, Manzelli y Pecheny, 2007). La ventaja de la Teoría Fundamentada es que aporta una forma de hacer análisis cualitativo que resulta sumamente útil cuando el objetivo de estudio es hacer comparaciones teóricas con rigurosidad empírica, pero al mismo tiempo dar cuenta de la diversidad que pueden proveer los datos que se obtienen a lo largo del proceso de investigación (Jones, Manzelli y Pecheny, 2007; Sautu, 2005; Mendizabal, 2006).

Las unidades de análisis serán las centrales sindicales. Esta decisión radica en el hecho de que el movimiento obrero argentino se ha organizado históricamente en una estructura centralizada y jerarquizada cuyo punto de referencia ha sido la Central de Trabajadores (Torre, 1989; Doyon, 2009). El rol protagónico que las centrales obreras han tenido en la historia argentina se explica, en gran parte, por la configuración de un marco institucional que, en sus orígenes, les permitió potenciar sus capacidades organizativas. Dicho marco legal lo proveyó el decreto 23.582 sancionado en octubre de 1945. Los

principales elementos de esta legislación eran los siguientes: consagración de la libertad sindical, monopolio de la representación, el establecimiento de la rama de actividades como unidad de encuadramiento y estructura sindical centralizada. Esto implicaba el diseño de una pirámide institucional en cuya base se encontraban las ramas locales, luego las federaciones nacionales, hasta llegar a la cúspide con la central única: la Confederación General del Trabajo (Doyon, 2009, Contartese y Criado, 2003). Esta estructura normativa tenía por objetivo “colocar la organización de los intereses sociales bajo la supervisión del estado” (Doyon, 2009: 272). Es importante señalar que la libertad sindical establecida en la legislación era relativa, ya que en la práctica los funcionarios del Estado eran los habilitados a conceder la personería gremial permitiendo cierto margen de discrecionalidad a favor de las organizaciones con más afiliados o bien más cercanas al gobierno (Doyon, 2009). Una particularidad del movimiento obrero argentino es que su fuerza identitaria no se remite solo a su experiencia de clase, sino también, y fundamentalmente, a su inscripción política, es decir, su adhesión al peronismo (Doyon, 1984).

Siendo las unidades de análisis las centrales sindicales se trabajará en torno a dos actores principales:

- Confederación General del Trabajo (CGT Oficial), liderada por Rodolfo Daer y CGT Disidente, liderada por Hugo Moyano, cuyo núcleo de conducción estaba sostenido por el MTA (Movimiento de Trabajadores Argentinos).

- Central de Trabajadores Argentinos (CTA) liderada por Víctor de Gennaro.

Para describir el rol de las centrales sindicales en el período de análisis se pondrá la mirada sobre una forma específica de acción de este actor: las protestas laborales. Para ello se tomará el análisis de Farinetti (1999) en el cual se define a la protesta como una forma de manifestación colectiva de carácter público, directo y discontinuo que expresa un desacuerdo y reclama soluciones frente a un cierto estado de cosas. En tal sentido, una protesta es de carácter público toda vez que hace visible ante la población civil y/o las autoridades políticas un reclamo o una situación percibida como un problema social por los protagonistas. Se entiende aquí por protestas laborales aquellas cuyo reclamo, demanda o

reivindicación se refieren a problemas vinculados al trabajo: el salario, las condiciones laborales, las fuentes de trabajo y el marco regulatorio (Farinetti, 1999). Esta investigación busca poner el acento sobre un elemento particular de la protesta laboral, el de los repertorios. Se utilizará para ello el concepto de “repertorios de acción colectiva”, propuesto por el sociólogo norteamericano Charles Tilly. Un repertorio de protesta es el conjunto de medios de los que dispone un grupo particular para realizar reclamos, el cual no se explica solo en términos instrumentales, como el medio más adecuado para alcanzar el fin deseado en una determinada circunstancia, sino, al mismo tiempo, en términos de aprendizaje (Tilly, 1978). Por ejemplo, los obreros utilizan generalmente la huelga como medio de protesta, pero no lo hacen porque este sea siempre el medio más eficaz para conseguir sus propósitos, sino porque es la herramienta que han incorporado en su proceso de aprendizaje en el ámbito laboral.

Los repertorios de protesta laboral son una forma de expresión de las capacidades de organización y acción colectiva de los actores sindicales. Estas prácticas se orientan a generar lazos de solidaridad, cohesión, identificación y vínculos de pertenencia a un colectivo desde el cual llevar adelante acciones frente a otros actores sociales (Gómez, 2009).

Tilly (2000) sostiene que la acción colectiva ocurre en el marco de interacciones entre grupos y personas y operan dentro de límites impuestos por las instituciones y las prácticas existentes. Dado que el proceso que se inicia a partir de 1999 generó importantes transformaciones de tipo institucional, producto de la crisis que impactó sobre el gobierno de de la Rúa, es esperable que los repertorios de protesta laboral busquen adaptarse a las nuevas circunstancias. En tal sentido, en la presente investigación se partirá de la base de que los procesos de movilización del actor sindical deben enmarcarse dentro del panorama más complejo que implica su relación con el Estado, los Partidos Políticos, las Organizaciones Empresarias y los Movimientos Sociales. Se buscará analizar cómo se adaptan y transforman las organizaciones sindicales en un contexto de cambios que se da tanto a nivel estructural, en el mundo del trabajo, como a nivel de la coyuntura política,

económica e institucional. Para ello se buscará dar cuenta del rol político de las centrales sindicales en un contexto de crisis institucional. Se parte del supuesto de que desde los años 90 y especialmente a partir de la crisis del 2001, las estrategias y comportamiento del sindicalismo se han ido transformando en su relación con el Estado, los partidos políticos y el peronismo.

Con el fin de comparar los repertorios específicos de las tres centrales sindicales con los “repertorios tradicionales” de la protesta laboral del sindicalismo argentino se realizará una modelización de los repertorios de protesta laboral que llamaremos “tradicionales” y los repertorios de protesta laboral que aparezcan como “novedosos”.¹

Los repertorios de protestas laborales que llamaremos tradicionales están estrechamente ligados a la estructura político-institucional que se constituye a partir de la llegada de Perón a la presidencia en la década del 40. A partir de ese momento, la conformación de las identidades del movimiento obrero argentino no podrán deslindarse de su vínculo con el peronismo. Tanto la expansión de los sectores laborales en Argentina como su incorporación a la política se dieron en ese marco, lo que provocó que todas las relaciones entre los grupos sociales se vieran, súbitamente, redefinidas (Halperin Donghi, 1994). Después de 1945, las protestas laborales llevaron la impronta de una identidad política de los trabajadores hegemonizada por el peronismo, que incentivaba la activación de los sectores populares mientras buscaba canalizar dicha participación a través de mecanismos institucionales controlados por el propio Estado, dando, de esta forma, un rol central a las organizaciones obreras (Doyon, 2009).

Desde ese momento, el devenir de este actor fue atravesando diferentes etapas que estuvieron fuertemente ligadas a la coyuntura política, social y económica del país. Con la proscripción del peronismo, en la etapa cívico-militar (1955-1976), el sindicalismo asume el rol político que el partido deja vacante y comienza una etapa donde se profundiza su

¹ La construcción de los “modelos” de repertorios de protesta laboral del sindicalismo argentino se realizó en base a los trabajos de Auyero (2002), Farinetti (1999), Viguera (2009), Schuster (2006), Palomino (2005), Fernández (1985) y Torre (1989).

capacidad de presión política, en detrimento de las reivindicaciones meramente laborales (Torre, 1989). La etapa autoritaria, con su concomitante política de apertura económica y desindustrialización, marcará el ritmo de la desmovilización sindical producto de la represión sistemática y de la prohibición legal (Fernández, 1985).

Según Farinetti (1999) las principales características de los repertorios tradicionales son el alto grado de institucionalización de las protestas y la inscripción de las luchas por ventajas económicas dentro del discurso peronista. Esto quiere decir que los reclamos por los derechos de la clase trabajadora encuentran su justificación en el papel orgánico de las organizaciones sindicales en la sociedad y el Estado asignado por el discurso peronista. En ese contexto la huelga cobra un papel central. Es evidente que la huelga no es algo específico del caso argentino, sino el instrumento por excelencia de la lucha obrera. Sin embargo, al tratarse de un movimiento obrero centralizado, la huelga tiende a ser, también, centralizada y su convocatoria tendiente a revestir un carácter esencialmente jerárquico. Las movilizaciones, marchas y concentraciones en la vía pública, han sido el otro medio de expresión de los reclamos vinculados a los problemas del trabajo. Estas también han reflejado, en líneas históricas generales, la centralización de la estructura sindical y la prevalencia de los sindicatos como actores "naturales" de las luchas laborales (Farinetti, 1999).

Otra característica de los repertorios tradicionales es el alto grado de institucionalización de la protesta laboral. Esto ocurre porque, desde su etapa de expansión en la década del 40, el sindicalismo argentino ha contado con el monopolio de la representación de los trabajadores en el campo de las luchas por sus intereses, constituyendo, por tanto, el actor principal de la protesta laboral. De acuerdo con la forma institucional que ha canalizado el reclamo obrero, los sindicatos han actuado como correas de transmisión entre el Estado y los trabajadores (Farinetti, 1999).

Además del alto grado de institucionalización de la protesta y la inscripción política peronista, entre los repertorios tradicionales, se destacan los siguientes elementos: al tener alta capacidad organizativa, el sindicalismo argentino contaba, por un lado, con altos niveles

de cohesión interna y, por el otro, con altos niveles de independencia frente a los actores empresarios. En la misma dirección, a través de sus diferentes acciones de lucha, el sindicalismo demostró tener una importante capacidad de intervención en el proceso de trabajo y de perturbación del orden productivo, mediante las amenazas a la rentabilidad del capital y su posibilidad de imponer la “voluntad sindical” en la fábrica (Gómez, 2009).

Los repertorios de las protestas laborales tradicionales se caracterizan por su flexibilidad y por su permeabilidad a los cambios institucionales. En tal sentido, es evidente que a partir de la década del 60 y del 70 dichos repertorios sufrirán modificaciones como consecuencia de los gobiernos autoritarios que, en diferentes grados, buscaron neutralizar todo tipo de expresión de la protesta laboral (Fernández, 1985). El Golpe de Estado producido en Argentina el 24 de marzo de 1976 ha marcado un antes y un después en muchos aspectos de la vida política, social y económica del país. En ese contexto, la historia de la protesta obrera no es una excepción. La dictadura militar, al generar un proyecto basado en la represión y en la desarticulación del modelo Estado-Céntrico, no solo alteró las bases fundamentales de la relación Estado-Sociedad, sino que transformó muchos aspectos de la vida cotidiana de los ciudadanos, generando consecuencias sobre sus formas de acción colectiva (García Delgado, 1994). El fin del gobierno militar abrirá una nueva etapa, caracterizada por la revitalización de todas las formas de participación política, acalladas en el período anterior, y que permanecían en estado de latencia (Calderón y Jelin, 1987). En 1983, el peronismo perdió en las urnas frente al radicalismo. Esta fue la primera novedad que presentó la nueva Democracia: el peronismo podía no lograr la mayoría del electorado y asumir el rol de oposición política en el marco del nuevo sistema institucional. Para recomponerse de la derrota electoral, el peronismo, en la oposición política, comenzó a fortalecerse desde el núcleo que le ofrecía mayor capacidad organizativa: el sindicalismo. Apelando al lenguaje reivindicativo de siempre y a los repertorios tradicionales, el sindicalismo puso en práctica sus típicas acciones de protesta: huelgas generales o sectoriales para reclamar mejoras salariales y actualizar la identidad peronista de los trabajadores. La liturgia peronista sumada a las destrezas de las organizaciones sindicales

para perseguir sus objetivos recubrieron las numerosas medidas de fuerza que tuvo que afrontar la Democracia de aquellos años (Farinetti, 1999).

La década del 90 estará signada por la vuelta del peronismo al poder. Las elecciones presidenciales de mayo de 1989 dieron el triunfo al candidato del Partido Justicialista Carlos Menem, a quien Alfonsín entregó el mando varios meses antes de la fecha prevista para el recambio. A partir del Plan de Convertibilidad, instrumentado en 1991 por el ministro de Economía Domingo Cavallo, se sucedieron una serie de medidas de carácter neoliberal tales como: privatizaciones, apertura comercial externa, desregulación de los mercados y ajuste fiscal, las cuales lograron consolidar por varios años una situación de inédita estabilidad económica (García Delgado, 1995). En ese contexto las protestas laborales encarnadas por la CGT fueron de carácter moderado, mostrando una cierta aquiescencia con el gobierno y limitándose a negociar ciertos aspectos específicos de las reformas laborales y sindicales llevadas adelante por menemismo (Etchemendy y Palermo, 1998). Para entonces, la CGT fue erigiéndose como un poderoso bloque representado por los voceros de la lealtad al gobierno, quienes esgrimieron estrategias de adaptación al nuevo contexto que se presentaba. En paralelo, se constituyó el MTA (Movimiento de Trabajadores Argentinos), un ala disidente de la CGT Oficial, encabezado por el sindicato de los Camioneros y la Unión Tranviario Automotor (UTA). Allí se nuclearon los que, cada tanto, hacían escuchar su voz, y pugnaban por revivir el modelo sindical asociado a una política sustitutiva de importaciones y un Estado proteccionista. Por último, emergió un grupo que se presentó como una alternativa a las viejas estructuras asociadas a la CGT. Este grupo, nucleado en la CTA (Central de los Trabajadores Argentinos), aglutinará básicamente a los sectores estatales, sobre todo los docentes estatales (CTERA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) (Svampa, 2013). Estos son los actores sindicales que durante el gobierno de de la Rúa comenzarán a verse afectados por los cambios que se producen en todos los niveles de la vida social.

Se presentan a continuación los Modelos de "repertorios tradicionales" y de "repertorios novedosos":

- A) Repertorios tradicionales de la protesta laboral
 - A.1 Huelgas generales organizadas a través del aparato sindical
 - A.2 Movilizaciones y manifestaciones masivas en espacios públicos con alto contenido simbólico como forma de demostración de fuerza
 - A.3 Agitación en los lugares de trabajo con ocupación o copamiento
 - A.4 Sabotajes
 - A.5 Quita de colaboración en el ámbito de trabajo que obstaculiza el normal funcionamiento de la producción o la prestación del servicio
 - A.6 Trabajo a desgano
 - A.7 Volanteadas con denuncias
- B) Repertorios novedosos de protesta laboral
 - B.1 Estallidos o puebladas con tomas y ataques a edificios públicos (Casas de Gobierno Provinciales, Legislaturas, Sedes de Gobiernos Municipales, Tribunales).
 - B.2 Barricadas y cortes de rutas nacionales y provinciales
 - B.3 Convocatoria a las acciones multisectoriales y/o plurisociales que no solo implican la participación de organizaciones de carácter estrictamente laboral sino que apelan, además, a organizaciones sociales, de derechos humanos, empresariales y partidos políticos
 - B.4 Acampes
 - B.5 Acciones para impedir el normal funcionamiento de las Instituciones (irrupciones en actos oficiales, impedimento de sesiones legislativas, etc.)
 - B.5 Ollas populares y huelgas de hambre
 - B.6 Caminatas que recorren diferentes puntos geográficos del país
 - B.7 Recolección de firmas para presentar petitorios a las autoridades
 - B.8 Asambleas populares
 - B.9 Cacerolazos
 - B.10 Organización de cortes de luz de manera simultánea por un conjunto masivo de personas, como forma de expresión de rechazo o descontento

B.11 Muestra artística o performance destinada a captar la atención de los medios de comunicación y/o con el fin de crear conciencia sobre una determinada situación

B.12 Cadena humana o "abrazo" a edificios o lugares públicos.

En el caso de los repertorios novedosos la construcción del modelo se fue nutriendo a partir de los datos obtenidos del análisis empírico.

Dado que la mirada estará puesta en el funcionamiento de las Centrales Sindicales se tomará como universo de análisis las acciones de protesta laboral organizadas por cada Central Sindical desde el 10 de diciembre de 1999 hasta el 20 de diciembre de 2001 dando cuenta de los repertorios utilizados en cada caso.

Como fuente de datos se utilizarán los principales diarios nacionales. Se sostiene que los diarios son una fuente muy fértil de información y resultan sumamente útiles para la investigación científica, especialmente en las ciencias sociales. Específicamente en el campo la acción colectiva, los movimientos sociales y la protesta, los periódicos proveen una gran masa de información que permite localizar, registrar y analizar eventos en los que individuos y grupos expresan un desafío frente a otros grupos o frente a las autoridades. La ventaja que ofrecen estas publicaciones es que recopilan información de manera continuada, a diferencia de otras fuentes en las cuales la información puede aparecer dispersa en el espacio y en el tiempo. En el campo de la protesta social y de la acción colectiva existe una vasta tradición de investigaciones sustentadas en la explotación sistemática de datos de la prensa, bien como único recurso, bien en combinación con otras fuentes secundarias² (Río, 2008).

² En dicho campo, las primeras investigaciones basadas en el análisis de diarios se centraron en las causas y pautas de las oleadas de disturbios raciales norteamericanos de la década del 60. (Lieberson y Silverman, 1965; Spilerman, 1970), pero también estudios como los de Tilly, 1997; Shorter y Tilly, 1985; Tarrow, 1988, hicieron importantes aportes utilizando como fuente la prensa. En la Argentina han sido centrales los trabajos del GEPSAC (Grupo de estudio sobre protesta social y acción colectiva del Instituto Gino Germani) coordinado por Federico Schuster.

En cada etapa de la investigación se buscó utilizar las fuentes de tal manera que ofrecieran las mayores ventajas a los fines de cada objetivo. Para describir el rol del sindicalismo en el período 1999-2001 se recurrió a la recopilación documental de fuentes secundarias. Se utilizaron los diarios *Clarín*, *La Nación*, *Buenos Aires Económico*, *La Prensa* y *Página/12*. Además se realizó la revisión de bibliografía académica sobre el tema y el período de análisis. En ambos casos el procedimiento constó en la lectura detallada de las fuentes y el análisis crítico y comparado.

Para realizar la construcción del mapa de las protestas laborales y los repertorios utilizadas en cada una de ellas se utilizaron los diarios *Clarín* y *La Nación* como fuentes. Esta decisión se sustenta en la necesidad de realizar una recopilación exhaustiva que considerara todas y cada una de las protestas realizadas en el período de análisis. Se consideró que las mejores fuentes para estos objetivos eran los dos principales diarios nacionales. Se utilizó, además, como fuente alternativa, los trabajos del Observatorio Social de América Latina (OSAL) de CLACSO, institución que realiza una cronología de la protesta en diversos países latinoamericanos.

Al tratarse de un período de análisis relativamente corto es posible trabajar con el universo sin necesidad de aplicar ninguna técnica de muestreo. Se realizó un mapeo de las protestas laborales convocadas por las centrales sindicales entre 1999 y 2001 teniendo en cuenta los siguientes criterios de selección:

a. Que la protesta haya sido convocada al menos por una de las Centrales. Esto implica que una protesta puede haber sido convocada por más de una de las Centrales o bien haber sido convocada por una de ellas y contado con la adhesión de las otras. No se considerarán, en este caso, las acciones convocadas por otras organizaciones a las cuales alguna de las Centrales haya adherido.

b. Que la protesta presente al menos un repertorio claramente identificable. Esto implica que cada protesta puede presentar uno o múltiples repertorios. De la misma manera una protesta puede implicar diversos repertorios de acuerdo con la Central que los haya propuesto. Por ejemplo, puede ocurrir que la CGT Oficial convoque para un mismo día a un

paro de 24 hs sin movilización y la CGT disidente lo convoque con movilización y por 48 hs. No se considerarán como repertorios de protesta laboral aquellas acciones de grupos que actúen por fuera de los mecanismos propuestos por las Centrales. Por ejemplo, si una Central convoca a un paro sin movilización y un grupo de trabajadores de algún sindicato u organización impide por la fuerza la circulación de un colectivo, solo se considerará como repertorio el paro sin movilización. Aunque esta decisión deja fuera de análisis acciones verdaderamente relevantes, no podrían ser incluidos dentro de la definición de repertorios, ya que ningún actor institucionalizado como las Centrales Sindicales podría aceptar públicamente como medio de protesta acciones de esta naturaleza, incluso a sabiendas de la existencia de este tipo de prácticas, largamente aprendidas. El análisis de estas acciones podría ser abordado en futuras investigaciones.

Los resultados de esta investigación serán presentados en diferentes capítulos. En el primer capítulo se realizará un análisis de los antecedentes del objeto de estudio. Allí se describirán los procesos de transformación que operaron en el mundo del trabajo a partir del cambio de paradigma que implicó la globalización, a partir del cambio tecnológico y cómo esos cambios operaron sobre la Argentina. Además, se desarrollarán las transformaciones que se produjeron en la década del 90 a partir de modelo neoliberal y sus consecuencias sobre el sindicalismo argentino.

En el segundo capítulo se describirá el rol del sindicalismo en el gobierno de la Alianza a partir de material bibliográfico y de la recopilación de información de prensa de los principales diarios nacionales. Se buscará dar cuenta del rol político de las organizaciones sindicales y su relación con los otros actores relevantes, tales como el gobierno, el peronismo, las organizaciones empresarias, etc.

En el tercer capítulo se trabajará sobre la conflictividad y la protesta laboral en el período comprendido entre la llegada de la Alianza al poder y la renuncia de de la Rúa, a partir de un relevamiento bibliográfico y de prensa. Se describirán, en detalle, las protestas laborales llevadas a cabo por las centrales sindicales y los repertorios utilizados en cada una de ellas con la intención de poner en evidencia las particularidades de cada uno de los

actores. Se privilegiará aquí una lógica analítica más que cronológica, con un claro acento comparativo.

En el cuarto capítulo se presentarán los resultados del análisis empírico luego de la construcción de un mapa de protesta laboral y de los repertorios utilizados en cada caso. A partir de esa información y teniendo en cuenta los modelos construidos de repertorios "tradicionales" y "novedosos", se procederá a clasificar cada una de las protestas y sus respectivos repertorios. Luego se realizará el análisis de los datos que arrojen las protestas de cada Central, así como también la comparación entre cada una de ellas. Finalmente se presentarán las conclusiones.

Capítulo 1
Antecedentes del Objeto de Estudio:
Los años 90 en la Argentina:
Transformación y complejización del sindicalismo argentino

En Argentina, la década del 90 ha estado históricamente asociada a un proceso de pérdida de protagonismo de las organizaciones sindicales, producto de las transformaciones económicas propias de la implantación de políticas neoliberales durante los gobiernos del presidente Carlos Menem (1989-1999). Es vasta la bibliografía en la que se ha trabajado sobre la idea de “crisis del sindicalismo” durante esos años, realizando importantes aportes para su comprensión. A partir de estas premisas surgen algunas preguntas acerca de cómo se ha transformado y complejizado el sindicalismo argentino en el contexto de la apertura neoliberal y cuáles han sido las estrategias de adaptación que ha desplegado para subsistir en dicho contexto. De esta manera se podrán abordar mejor los cambios que se producen en la etapa post convertibilidad.

Es un lugar común señalar que durante los 90 el sindicalismo argentino pierde centralidad. Sin embargo, esto no impide que comiencen a configurarse nuevas formas de expresión dentro de las organizaciones obreras que, tal vez, no hubieran podido desenvolverse en los entornos más tradicionales. Cabe preguntarse, entonces, cuáles fueron esas formas novedosas de organización que surgen en ese contexto desfavorable y cómo se articularon con las estructuras tradicionales de representación sindical, así como también con el peronismo.

Para poder dar cuenta de estas preguntas se analizará, en primer término, cuáles fueron los cambios estructurales que tuvieron efecto sobre el sindicalismo argentino y cómo impactaron sobre las organizaciones sindicales tradicionales. Luego, se analizará la emergencia de dos organizaciones claves como la CTA y el MTA, considerando aquellas características que ponen en evidencia que, a pesar del repliegue del movimiento obrero en la década del 90, existió un espacio que permitió la emergencia de organizaciones sindicales de carácter sumamente novedoso, abonando un panorama del mundo sindical

mucho más diverso y complejo. Se trabajará sobre la novedad en función de las siguientes variables: estructura organizativa, relación con el peronismo, capacidad de movilización y repertorios de protesta.

1.1 Cambios en el mundo del trabajo a nivel global

A partir de 1980 el sistema global asistió a un proceso de cambio estructural que se caracterizó por el desarrollo vertiginoso de nuevas tecnologías, especialmente en el campo de las telecomunicaciones y la biotecnología. La profundidad de este proceso posee tal magnitud que no pocos expertos lo han caracterizado como una verdadera transformación, en tal sentido estaríamos transitando no una época de cambios sino un cambio de épocas (Spyropoulos, 1991). Este proceso se aceleró a partir de la crisis del sistema mundial que emergió en 1974, derivada de la pérdida de la tasa de ganancia del Capital y de una disminución de la productividad del Trabajo (Fernández, 1998). El impacto de esta “Revolución Tecnológica” pronto se hizo sentir en todos los aspectos de la vida social. En este sentido, el campo laboral no fue una excepción. Las nuevas tecnologías impactaron sobre la organización de la producción generando nuevos procesos de gestión y organización del trabajo. Es cierto que, desde sus orígenes, las transformaciones tecnológicas y económicas que facilitaron el desarrollo del capitalismo impactaron sobre la naturaleza del trabajo (Fernández, 1997). Sin embargo, podemos afirmar que los cambios producidos hacia fines del siglo XX han tenido un impacto sobre el mundo del trabajo con una intensidad diferente.

El proceso de cambio tecnológico aparece fuertemente asociado a la mundialización de las actividades económicas. La llamada “globalización” es un fenómeno que se caracteriza por el hecho de que las actividades económicas nodales trabajan como una unidad, en tiempo real, a nivel planetario y a través de una red de interconexiones (Castells, 1997). Esto trae aparejado la expansión de las empresas multinacionales, que en la década del 90 han desarrollado una influencia creciente. Estas empresas influyen fuertemente sobre el modelo de crecimiento económico mundial, pero sobre todo influyen en los países

menos desarrollados. Por sus características específicas las empresas multinacionales han planteado nuevos desafíos a las organizaciones sindicales que están asociados con tres elementos. El primero tiene que ver con una dualidad de los centros de decisiones, ya que, si por un lado las decisiones más importantes de la empresa (inversión, financiamiento, etc.) se toman de manera centralizada, por el otro, existe una desconcentración de poder para todo lo que se refiere a derecho laboral. El segundo elemento tiene que ver con la flexibilidad de las operaciones económicas, por ejemplo la posibilidad de trasladar una planta, lo cual le da a la empresa una capacidad para amenazar a los trabajadores cuando toman posiciones críticas. El tercer elemento se relaciona con la libertad que las estructuras jurídicas ofrecen a la movilidad del capital, favoreciendo poca transparencia a la hora de determinar la solvencia de la empresa, sobre todo cuando existe una controversia entre esta y el sindicato (Spyropoulos, 1991).

Como todo proceso de cambio, la globalización y la transnacionalización de la economía han tenido sobre la vida cotidiana, la comunidad local, la región y las naciones consecuencias positivas y negativas. Lo que caracteriza al fenómeno es su complejidad, ya que, si por un lado las nuevas tecnologías informatizadas han posibilitado y difundido sofisticadas y eficaces formas de gestión de los sistemas y revolucionado la logística en la economía, no hay dudas de que, directa o indirectamente, han contribuido en buena medida a un crecimiento desmesurado del desempleo y el subempleo (Bisio y Mendizábal, 2003). La tradicional relación salarial ha dado paso a la proliferación de formas de contratación más flexibles, como por ejemplo el autoempleo, el subempleo, o el empleo informal. La magnitud de la crisis es tal que Robert Castel (1999: 136) ha hablado de la “conmoción de la sociedad salarial”. Los síntomas de esta crisis se observan en el número creciente de personas que resultan excluidas del empleo asalariado, la seguridad social y la estabilidad. Esto lleva a menor inclusión y mayor fragmentación social, que traen aparejados una pérdida de confianza en las Instituciones, erosionando la calidad de la Democracia. Las organizaciones sindicales no son, por supuesto, ajenas a la crisis institucional. Por el contrario, comienza a ponerse en cuestión su capacidad para representar los intereses de

un colectivo que se desdibuja y pierde paulatinamente su identidad. Las transformaciones acontecidas en el mundo del trabajo generaron un modelo laboral que tiende a la transitoriedad y la alta rotación, donde la condición laboral del trabajador aparece individualizada y despolitizada. El trabajador es más un proveedor de servicios con obligaciones y no tanto un sujeto que trabaja y que posee derechos. Esta situación desvincula a los trabajadores de sus marcos reguladores de referencia en las relaciones laborales y, a su vez, dificulta las posibilidades de organización alternativa como forma de modificar la situación de precariedad (Barattini, 2009).

Además de la expansión de las empresas trasnacionales, la globalización viene acompañada de procesos de integración regional, que impactan sobre el rol de los sindicatos y su capacidad para representar los intereses de los trabajadores. Históricamente era el Estado el centro de los intercambios internacionales, tanto los gubernamentales como los obrero-patronales. Esto ha cambiado y el Estado ha cedido terreno a favor de los bloques regionales y los organismos supranacionales (Spyropoulos, 1991). En síntesis, el doble proceso de internacionalización de las empresas e integración presentó para los sindicatos un gran desafío de adaptación en un contexto en el cual los cambios tecnológicos modificaron, a su vez, los procesos de producción y organización del trabajo.

Arturo Fernández (1998) ha señalado que los efectos de este proceso de cambio tecnológico y la consecuente ofensiva del capital sobre el trabajo pueden resumirse en tres elementos. Primero, la creciente pérdida del sentido internacionalista del movimiento obrero y su consiguiente fragmentación política e ideológica. Segundo, la desvinculación progresiva entre la acción sindical y la de los partidos políticos obreristas. Tercero, el predominio de las posturas obreras reformistas en la mayoría de los países capitalistas y el retroceso de actitudes anticapitalistas y rupturistas.

1.2 La Argentina frente a los cambios

Los procesos que hemos descripto impactaron sobre todos los países, pero lo hicieron de manera particular sobre aquellas naciones que, como la Argentina, no tenían los niveles de desarrollo y producción que poseían aquellas que ocuparon el epicentro del cambio. Las organizaciones sindicales de todo el mundo debieron enfrentarse a situaciones tales como el aumento de la competitividad en economías abiertas, la introducción de nuevas tecnologías, la reorganización del trabajo o la descentralización de los acuerdos colectivos, aunque estas situaciones no tuvieron el mismo significado en todos los casos (Novick, 2001). En los países menos desarrollados los cambios se produjeron en contextos con bajos niveles de crecimiento económico, endeudamiento, pérdida de capacidades productivas y bajos niveles de competitividad. Como agravante también poseían Estados incapaces de proteger con seguro de desempleo al conjunto de los trabajadores que quedaban excluidos del sistema (Bisio y Mendizábal, 2003).

Para la Argentina, la década del 80 significó el inicio de un doble proceso que tuvo fuertes consecuencias sobre las estructuras políticas, sociales y económicas del país. Por un lado, se inicia el camino hacia la democratización, luego del gobierno autoritario, autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) y por el otro, se inicia un proceso de desestructuración del Estado Interventor que había estado vigente en el país desde la década del 30. Los procesos mencionados tuvieron consecuencias importantes sobre el mercado laboral y sobre la orientación de la política laboral de los diferentes gobiernos, así como también en las formas de acción colectiva de los agentes sectoriales. Los cambios políticos y económicos operados desde la década del 70, profundizados en los 90, modificaron la base social sobre la cual se asentaba el poder sindical afectando sus vínculos tradicionales con el Estado y el sistema político (Palomino, 2005).

Veremos a continuación de qué manera estos procesos de cambio impactaron en la Argentina y el modo en que se articulaba la intermediación de los intereses entre capital y trabajo. Según García Delgado (1994) la Argentina experimentó a partir de la década del 70 un proceso de ruptura del modelo de mediación que había estado vigente desde la década

del 40. Ese modelo, que el autor llama “neocorporativismo imperfecto” se caracterizaba por integrar al mismo tiempo dos principios de representación: el político (territorial, ciudadano, basado en los partidos) y el funcional (de representación corporativa). Este esquema operó en el contexto de un ciclo cívico-militar y se caracterizó por una alta efectividad de las corporaciones para introducir sus demandas en el Estado. Por tal motivo, García Delgado hace referencia a este corporativismo como imperfecto. Se trató de un sistema basado en organismos intermediarios que prácticamente monopolizaban la relación entre los ciudadanos y el Estado. Por el lado del polo trabajo existía un sindicalismo altamente organizado, institucionalizado y centralizado en la CGT y por el lado del capital existía un empresariado representado de forma más dispersa por organismos como la Unión Industrial Argentina, la Confederación General Empresaria, la Sociedad Rural, etcétera.

Después de 1975 la crisis estructural del sistema capitalista mundial se manifestó en el país a través de diversos factores: por el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, por la desindustrialización y la distribución regresiva del ingreso y por el aumento de la deuda externa y el predominio de la burguesía asociada a los intereses del poder financiero mundial (Fernández, 1998). Con el golpe militar de 1976 el esquema de intermediación de intereses de la etapa anterior comienza a transformarse. El Proceso de Reorganización Nacional apuntó a dismantelar las bases materiales del Estado Interventor con el argumento de que era el requisito para superar la crisis y el déficit de una economía poco competitiva y un empresariado demasiado acostumbrado a la protección estatal. Por lo tanto comenzaron a abandonarse las políticas que, desde los años 40, privilegiaban el pleno empleo, la demanda del mercado interno como factor de crecimiento y el papel del Estado como regulador del salario y garante del bienestar de las personas, mediante diferentes formas de prestaciones sociales (Suriano, 2005). De esta manera, el gobierno militar buscó eliminar las bases materiales y organizativas del sindicalismo y apuntó a que el movimiento obrero perdiera el protagonismo político que había acumulado en las últimas décadas. Para los altos mandos militares, y los sectores civiles asociados a ellos, la salida para resolver la crisis debía hacerse mediante la apertura de la economía, pero esto requería

necesariamente el disciplinamiento del sector trabajador y el empresariado asociado al mercado interno. Para lograr este objetivo el gobierno se valió de la doble herramienta de la represión y la política económica.

Todo este proceso comenzó a poner en evidencia las diferencias al interior del sindicalismo. Es importante identificar estas tendencias a priori, para poder analizar cómo se irán articulando en cada una de las etapas siguientes. Nos basaremos en el trabajo que Arturo Fernández ha desarrollado a lo largo de sus investigaciones e identificaremos las siguientes tendencias dentro del sindicalismo argentino:

a) El participacionismo: consideraba como tarea fundamental defender los intereses profesionales y frente a gobiernos adversos, tratar de negociar la supervivencia organizativa gremial y el mejoramiento de los sectores obreros a través de una cierta integración al esquema político de turno.

b) El sector negociador: sostiene que los sindicatos deben adherir al peronismo y tiene como objetivo principal el propio desarrollo y fortalecimiento, para lo cual combinarán distintas dosis de negociación y lucha directa (“golpear primero para negociar después”).

c) El confrontacionismo: se trata de una línea que privilegia la confrontación y la lucha contra los gobiernos que se muestran hostiles al sindicalismo peronista.

d) El ala clasista: conformada por peronistas de izquierda y clasistas, consideraba necesario fortalecer la autonomía sindical frente al estado, combatiendo el modelo de vinculación generado por la tradición peronista.

Es importante señalar que lo anterior es un esbozo de las características más generales de cada tendencia. En la práctica las posiciones devienen cambiantes y fluctúan con sus propios matices. Como señala Fernández (1998): “No es raro encontrar sindicatos o sindicalistas a mitad de camino entre dos tendencias-actitudes a las cuales adhirieron o adhieren parcialmente por espacios de tiempo cambiantes”. Es por eso que el ejercicio más interesante no es de tipo clasificatorio, sino al contrario, la riqueza estará en comprender el devenir y los procesos de cambio y adaptación a lo largo del tiempo.

En los últimos años del gobierno militar se apreciaba que el esquema sindical inaugurado en 1945 iba camino a debilitarse. Pero con la derrota electoral del peronismo, en las primeras elecciones democráticas pos-dictadura, quedó claro que esa crisis podía profundizarse todavía más. Las elecciones de octubre del 83 encontraron al sindicalismo fuertemente debilitado como consecuencia de la política económica del Proceso. Pero además, era un sindicalismo atravesado por profundas divisiones internas, producto de la divergencia de posiciones que cada grupo había adoptado respecto al gobierno militar. En ese contexto la dirigencia sindical se encontraba altamente burocratizada y era fuertemente cuestionada por su incapacidad para defender el salario y el empleo en momentos en que estos habían retrocedido significativamente (Fernández, 2010).

El sindicalismo tuvo un rol central en la recomposición del peronismo en el inicio de la transición democrática y, por tal motivo, no fue ajeno a su derrota en las elecciones que llevaron a Alfonsín y al radicalismo a la presidencia (Palomino, 2005). De hecho, los candidatos peronistas para esas elecciones fueron definidos por la conducción de la CGT³ (Fernández, 2010).

Al asumir la presidencia, Alfonsín se propuso darle centralidad al tema del régimen político y a los derechos humanos, partiendo del supuesto de que las crisis cíclicas anteriores habían sido producto de la falta de una cultura política verdaderamente democrática. De acuerdo con este diagnóstico la cultura propia de los gobiernos nacional-populares promovían de manera desmedida las demandas de la sociedad frente al Estado generando amenazas para la Democracia. En tal sentido fue que Alfonsín buscó disminuir el peso de las corporaciones en el Estado, especialmente de los sindicatos, de las FFAA y también de la Iglesia. El objetivo era enfatizar sobre la institucionalidad y las reglas del juego democrático para establecer una democracia liberal y pluralista. La UCR adoptó un

³ En 1983, Lorenzo Miguel, exponente del ala negociadora, logró imponer la candidatura presidencial de Ítalo Luder. Sin embargo, no tuvo la capacidad de implementar una campaña electoral eficiente que neutralizara la creciente convocatoria de Alfonsín a través de su discurso cargado de carisma y de contenido democrático. En contraste, aparecía la figura de Luder, incapaz de ofrecer atractivos para el electorado como bien lo hacía su oponente.

discurso que hacía aparecer al peronismo y, sobre todo al sindicalismo, como lo antiguo y lo no-democrático, de esta manera tendió a cuestionar cualquier tipo de reivindicación social como “corporativa” y desestabilizadora (García Delgado, 1994).

A pesar de la derrota del 83 y la embestida del gobierno de Alfonsín, los sindicatos desempeñaron un rol protagónico en el sistema político del primer gobierno democrático. Según Palomino (2005) el sindicalismo terminó operando en la práctica como un sustituto del Partido Justicialista claramente debilitado, asumiendo el rol de oposición y estableciendo alianza con diversos sectores (empresarios, fuerzas sociales y políticas). Todo esto contribuyó a la recomposición del PJ y permitió a los dirigentes sindicales desarrollar estrategias para influir en la agenda política. Básicamente, estas estrategias apuntaban a la recuperación de las instituciones y de la legislación laboral, fuertemente afectadas por la dictadura.

Al comenzar el gobierno de Alfonsín la CGT se encontraba dividida pero, con el fin de preservar la organización y hacer frente a un gobierno hostil, se reunificó en 1984 (CGT Brasil y CGT Azopardo) ante el intento oficial de reestructurar las organizaciones internas de los sindicatos a través del proyecto conocido como Ley Mucci.⁴

No cabe duda de que con el gobierno democrático se inició una nueva etapa de la reorganización y restructuración de las bases del poder sindical. Las normas y disposiciones establecidas por el régimen militar fueron derogadas y la vida interna de los sindicatos comenzó su consolidación institucional. Por un lado, se retomó el marco normativo previo a la dictadura y se llamó a elecciones gremiales a fines de 1984 y, por el otro, se normalizó la CGT y se promulgó la ley de Asociaciones Sindicales. Esto no quita que, durante el

⁴ El proyecto, propuesto por el ministro de Trabajo Antonio Mucci, y enviado al Congreso en diciembre de 1983, estableció el voto secreto, directo y obligatorio de los trabajadores, la participación de las minorías en la dirección de los gremios, la limitación de la reelección y la fiscalización de los comicios por el Estado. La iniciativa oficial fue asumida por el campo sindical como una amenaza a los pilares del poder de los dirigentes. Fue en ese contexto en el cual se produce la unificación de la CGT-Brasil de Ubaldini y la CGT-Azopardo, entidad formada por el sector dialoguista durante el gobierno militar y liderada por Jorge Triaca. Para esta nueva central unificada se estableció una conducción conjunta de cuatro secretarios generales: Ubaldini, Triaca, Borda y Baldasini. El proyecto de ley fue detenido en una cerrada votación en la Cámara de Senadores en marzo de 1984, luego de su aprobación en Diputados.

gobierno radical, la relación entre los sindicatos y Alfonsín haya sido mayoritariamente de conflicto. Los cuestionamientos que se le planteaban estaban sustancialmente orientados contra la política económica y la negociación de la deuda externa, así como la demanda continua de aumentos salariales, traducidos en numerosos paros generales y huelgas sectoriales (Orlansky, 1997).

Los sectores confrontacionista y negociador marcaron un frente de oposición a la política económica del gobierno. Bajo el liderazgo de Saúl Ubaldini encararon una fuerte embestida, incluido un ciclo de movilización, que puso a Alfonsín en una situación muy difícil. Entre 1984 y 1989 la CGT convocó a 13 paros generales. El gobierno, por su parte, buscó estratégicamente cooptar a un grupo significativo del sindicalismo peronista. Así fue que el sector participacionista logró en 1987 que uno de los principales dirigentes del sindicato de Luz y Fuerza fuera convocado para ocupar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El gobierno nacional pretendía así cerrar uno de los tantos frentes de conflicto abiertos por aquel entonces: levantamientos militares, reaparición de la inflación, deuda externa, presión empresarial. Luego de la derrota radical, en las elecciones parlamentarias de ese año, los representantes sindicales se alejaron del gobierno. De todos modos, quedaron preparadas y acordadas las leyes de negociación colectiva, de asociaciones sindicales y de obras sociales, que fueron aprobadas por el Congreso entre 1987 y 1988.

A partir del triunfo justicialista, en las elecciones parlamentarias de 1987, el peronismo se presentó nuevamente como una verdadera alternativa de gobierno. Previamente a la victoria en las urnas, se había iniciado dentro del partido un proceso de cambio. A partir de 1985 surgió una línea interna, "La Renovación", que trataba de tomar distancia de los grupos que a su criterio habían sido los responsables de la derrota del 83. Entre ellos se encontraban figuras del sindicalismo como Lorenzo Miguel y Herminio Iglesias. La nueva línea interna, que tenía como principales referentes a Antonio Cafiero y Carlos Menem, comenzó a ganar espacios, al mismo tiempo que se producía un declive del peso político del sector sindical.

En vistas a las elecciones presidenciales, que debían celebrarse en 1989, el Partido Justicialista realizó en 1988 elecciones internas para designar a su candidato, del cual resultó electo el riojano Carlos Menem. Por su parte el radicalismo lanzó la fórmula Angeloz-Casella, que terminó siendo derrotada en las elecciones de julio, cuando la fórmula Menem-Duhalde obtuvo el triunfo con el 47% de los votos. Se producía, entonces, la alternancia en un contexto de democratización recientemente iniciado y llegaba a la presidencia un candidato del Partido Justicialista.

Antes de analizar la relación entre el nuevo gobierno peronista y el sindicalismo es necesario hacer algunas reflexiones acerca del contexto internacional y económico en el cual se insertan las presidencias menemistas.

1.3 La década del 90 y el cambio neoliberal

A comienzos de la última década del siglo XX una serie de fórmulas económicas promovidas por el gobierno estadounidense y las instituciones internacionales de crédito, conocidas como el Consenso de Washington, fueron adoptadas por los países latinoamericanos. Esto hizo que la década del 90 significara para estos países un cambio profundo en la relación Estado-Sociedad, es decir, un “Cambio Estructural”. No solo se produjo una transformación a nivel del régimen político y de las instituciones, sino que impactó directamente en la relación del Estado con diversos actores de la sociedad, a tal punto que terminó modificando distintos aspectos de la vida cotidiana de los individuos (García Delgado, 1994).

En este contexto se impone un nuevo patrón de desarrollo que evidencia el declive del anterior esquema basado en el Estado como principal agente económico y orientado al desarrollo hacia adentro. Los nuevos tiempos estarán signados por la racionalización económica, el “achicamiento” del Estado, la mayor integración de las economías regionales, una nueva forma de inserción internacional, así como también por el predominio de la inversión privada y la lógica de mercado. Estos nuevos patrones de desarrollo tuvieron como experiencias precursoras las realizadas por los gobiernos autoritarios, pero fue recién

con el impacto de la Crisis de la deuda Externa cuando la región experimentó en su conjunto un verdadero giro hacia estas reformas neoliberales (Torre, 1997). Los gobiernos de la región implementaron políticas de ajuste para lograr que las economías nacionales se adaptaran a las nuevas condiciones de la economía mundial que, como ya hemos señalado, se caracterizaba por un proceso de cambio tecnológico que demandaba más flexibilidad dentro de las empresas, una mayor descentralización de la producción, así como también por la existencia de mercados mundiales más competitivos e inestables.

Es importante precisar el peso que tuvieron los factores externos y los factores internos en este proceso. Si la Crisis de la Deuda y luego la influencia de Estados Unidos llegaron a tener el impacto que tuvieron en América Latina fue porque estas economías eran profundamente vulnerables a las perturbaciones externas y dependientes de los países centrales. Si bien es cierto que los cambios en el sistema internacional condicionaron fuertemente a los países latinoamericanos, también es cierto que las elites políticas de cada país tuvieron un rol muy importante.

Veremos a continuación de qué manera se produce la instalación en la agenda política del gobierno de Menem las reformas de corte neoliberal y cómo opera esto a nivel de la relación con los principales actores políticos, económicos y sociales, especialmente los sindicatos.

1.4 Menem, el cambio estructural y el sindicalismo

La llegada de Menem a la presidencia se produjo en un contexto de hiperinflación, que derivó en caos social y en la salida anticipada de Alfonsín. En los meses finales de su presidencia las variables económicas entraron en una espiral de descontrol, al mismo tiempo que los acreedores externos y el establishment empresarial local le retiraban su apoyo al plan económico oficial. En simultáneo, la situación social se hacía cada vez más conflictiva y se manifestaba en saqueos a comercios, puebladas y violencia en las calles. Luego de asumir la presidencia, Menem debió hacer frente a una nueva oleada inflacionaria que se extendió durante los primeros meses de gestión y que dejó una enseñanza clave: las

recetas tradicionales de ajuste heterodoxo no serían eficientes para equilibrar la economía. Fernández (2010) sostiene que justamente fueron estas presiones inflacionarias del bloque económico dominante las que forzaron el viraje de Menem hacia una política económica neoliberal en 1990. A pesar de que muchos de sus votantes esperaban el “salariazó” y la “Revolución Productiva”, tal como había sido pregonado durante la campaña, Menem emprendió el rumbo contrario. Con el fin de ganar la confianza del mundo empresarial realizó una alianza estratégica con los grandes grupos económicos, grupos con los cuales el peronismo había antagonizado históricamente.

El objetivo de este trabajo no es realizar un análisis de las políticas económicas de Menem, sin embargo es necesario hacer una descripción general de las transformaciones producidas en la economía y en el mercado de trabajo para poder comprender mejor cómo impactan en los sindicatos. Se parte de la base de que el deterioro de las condiciones económicas (nivel de empleo, salario, etc.) afectan directamente a las organizaciones sindicales, pero que por sí solas no pueden explicar el rol que este actor asume en un determinado contexto político. Se asume que las transformaciones socioeconómicas solo impactan en un determinado actor en la medida en que este se encuentra inmerso en una red de identidades, intereses y recursos que determinan sus formas de acción. En base a lo anterior se realizará un análisis del sindicalismo poniendo el acento en la dimensión política.

Durante los primeros meses de gobierno, los diferentes ministros de economía de Menem (Miguel Ángel Roig, Néstor Rapanelli y Erman González) trataron de controlar la inflación con impuestos de emergencia, reducción del gasto público, ajustes en la tasa de cambio y políticas de ingresos negociadas con los empresarios (Gerchunoff y Torre, 1996). Estos planes fracasaron y prepararon el escenario para la llegada de Domingo Cavallo al Ministerio de Economía. En marzo de 1991 Menem lanzó el Plan de Convertibilidad que, con el objetivo de lograr una mayor autonomía de la economía sobre la política, estableció la paridad cambiaria respecto del dólar, así como también la prohibición al Banco Central de emitir sin respaldo. Este Plan iba de la mano de una reforma estructural de la economía, así como también de un reordenamiento de la deuda interna y externa reduciendo la

discrecionalidad en la toma de decisiones de política económica. De esta forma, Menem lograba algo largamente deseado: el control de la inflación y la estabilidad económica.

De la mano del Plan de Convertibilidad vino la Reforma del Estado, que apuntaba a la reestructuración del aparato productivo y administrativo, con la idea de afirmar la supremacía del Mercado por sobre el Estado. La idea de eficacia apareció como leitmotiv de esta reforma basada en privilegiar lo que era rentable y la búsqueda del equilibrio fiscal. Las principales políticas que se implementaron fueron las privatizaciones de las empresas públicas, la liberalización comercial, la reforma tributaria, la descentralización del Estado, la reforma de la Administración Pública, la reducción del gasto público y el endeudamiento externo (García Delgado, 1994). Es necesario subrayar que el gobierno que lleva adelante esta estrategia centrada en la inversión privada, la apertura externa y la lógica de mercado, es el gobierno del partido, el peronismo, que estuvo históricamente sostenido por los sectores más fuertemente identificados con el modelo mercado-internista y estado-céntrico (Etchemendy y Palermo, 1998). Como se ha señalado en otro apartado, Argentina no fue el único país latinoamericano que inició un programa de estabilización monetaria y de reforma estructural de la economía, la particularidad es que dicho proceso fue llevado adelante por el partido que había contado con el sindicalismo como su columna vertebral (Murillo, 1997). El proceso de reformas neoliberales encaradas por Menem, como principal referente del peronismo, se convirtió en una verdadera amenaza para los intereses del sindicalismo, pues afectó no solo sus bases materiales, sino también su alianza histórica con el partido. Se volverá sobre este punto más adelante.

En relación con la política laboral, el Gobierno implementó una serie de medidas que impactaron fuertemente en el mercado de trabajo y en consecuencia sobre los sindicatos. Se describirán brevemente las principales políticas en esta materia para luego indagar más detalladamente sobre sus causas políticas y sus consecuencias sobre el movimiento obrero organizado.

A través de un conjunto de iniciativas de reforma, el gobierno procuró adecuar el mercado de trabajo al proceso general de reformas de mercado. Se trató de generar

proyectos que apuntaban directa o indirectamente a bajar lo que desde el gobierno y sectores de negocios denominaban “costo laboral” (Etchemendy y Palermo, 1998). En 1991 se sancionó la Ley de empleo (24013) que introdujo nuevas modalidades de contratación (contratación temporaria, por aprendizaje, etc.), desarticuladas de los sistemas de salud, de seguridad previsional y de indemnización por despido. De esta forma se puso fin a la estabilidad laboral de muchos trabajadores. En el marco de la Ley de Reforma del Estado, se produjo el proceso privatizador más acelerado de todo el continente, que trajo como consecuencia el Decreto 1803, de 1992, a través del cual se establecía la regulación y prohibición de las huelgas en los servicios públicos. Este había sido uno de los requisitos que las empresas y las entidades internacionales (FMI y Banco Mundial) habían puesto como condición para la privatización de las empresas estatales (Palomino, 2005). Otras de las medidas tomadas en materia laboral fueron el Decreto de desregulación, que incentivó la descentralización de la negociación colectiva y la reforma de las obras sociales, el Decreto 470, que implementó el aumento por productividad, la Ley 24.467 de 1994, de flexibilidad laboral y los Decretos de 1996, que eliminaron las asignaciones familiares a partir de un determinado tope salarial (Martucelli y Svampa, 1997). A su vez se sancionó una Ley de Accidentes de Trabajo, que impuso topes indemnizatorios en los accidentes en el espacio laboral, y una Ley de reforma de la Seguridad Laboral, que pasó a ser gestionada por un sistema de Aseguradoras privadas. Es importante señalar que si bien es el gobierno el que lleva adelante este proyecto de gran envergadura, debió hacerlo a través de una constante negociación de los apoyos y neutralizando continuamente las resistencias (Torre y Gerchunoff, 1999). Las consecuencias de estas reformas no fueron unívocas. Muchas de ellas afectaron directamente a los sindicatos, ya que erosionaron las condiciones del mercado laboral, especialmente en lo relativo al nivel de empleo. A su vez el sindicalismo tuvo la capacidad de obstaculizar ciertos aspectos de las reformas, específicamente aquellos que atentaban contra la estructura sindical y la autoridad de los sindicatos con personería gremial, así como también logró demorar la reforma que más afectaba sus

intereses económicos, es decir, la cuestión de las Obras Sociales. Todo este proceso estuvo marcado por una lógica de división al interior del sindicalismo.

Desde un primer momento, cuando se produjo el “giro neoliberal” del presidente Menem, la CGT sufrió una división, que si bien era una más dentro de la historia de fragmentaciones que la Central había experimentado, nunca había ocurrido en el marco de un gobierno justicialista. Fue así que la CGT se dividió en una CGT Oficial (CGT San Martín) y una CGT opositora (CGT Azopardo) y un grupo de sindicatos independientes.

En la CGT-San Martín se reunían la FAECYS, gastronómicos, UPCN, el sindicato de la carne, UOCRA, plásticos, telefónicos, textiles, sanidad, ferroviarios, del caucho, y demás organizaciones sindicales (Senén González y Bosoer, 1999). Esta Central “Oficialista” desarrolló una clara estrategia de acercamiento con el menemismo y apoyó las iniciativas de reforma a cambio de ciertos beneficios políticos que incluían cargos dentro del gobierno (Murillo, 1997). A pesar de que un sector del sindicalismo obtuvo ciertas prerrogativas, el balance de la década menemista da como resultado una pérdida creciente de su influencia sobre el Estado y sobre el Partido Justicialista que abarcó a todo el sindicalismo (Fernández, 2010). Basta mencionar como ejemplo el hecho de que fue en la presidencia de Menem cuando la Cartera de Trabajo dejó de tener a un sindicalista como Ministro.

Cabe preguntarse, entonces, ¿por qué si las reformas económicas de Menem afectaron tan severamente el rol y el poder del sindicalismo algunos sectores dentro de este estuvieron dispuestos a brindarle su apoyo? De hecho, la resistencia de la CGT fue menos vigorosa en el gobierno de Menem que la que se desplegó durante la Dictadura o el gobierno de Alfonsín, cuyas políticas económicas tuvieron menos impacto que las llevadas adelante en los 90 (Fernández, 2010). Algunos de los factores que pueden ayudarnos a responder a esta pregunta se desarrollan a continuación.

A diferencia de lo que había ocurrido durante el Proceso o la presidencia radical, existía entre Menem y la mayoría de los sindicalistas una identidad política común en torno a la tradición peronista (Fernández, 2010). Ya en 1988, en la etapa final de la campaña electoral que llevaría a Menem a la presidencia, todos los sectores del sindicalismo

peronista se subordinaron, unos con más resistencia que otros, a la estrategia partidaria. Esto demuestra la importancia de la dinámica del sistema político en la vida sindical e indica lo relevante de analizar la dimensión política para la comprensión de las estrategias implementadas por el sindicalismo. Además del “factor partidario” otro elemento que ayuda a entender el apoyo sindical (al menos de una parte) a las reformas Menemistas es la variable económica. La hiperinflación y el conflicto social de la etapa 1989-1990 abonaron la creencia de que para alcanzar una solución a las crisis cíclicas que vivía el país había que recurrir a nuevas herramientas (Fernández 1998, 2010). En esas circunstancias, Menem logrará una marcada reducción de las huelgas y movilizaciones (Senén González y Bosoer, 1999) y un firme apoyo de una porción del sindicalismo.

Para entender el respaldo del ala sindical a las políticas de reforma de mercado de Menem debemos tener en cuenta, más allá del logro de la estabilización monetaria, la función clave que ejercerá el otorgamiento de “incentivos selectivos” (Murillo, 1997). Para compensar los efectos negativos del achicamiento del Estado, de la flexibilización laboral y del desempleo sobre la afiliación a los sindicatos, el Gobierno les brindó a los gremialistas afines un conjunto de beneficios selectivos. Este proceso, conocido como “mercantilización sindical”, implicaba para ciertos sindicatos la posibilidad de convertirse en proveedores de bienes y servicios a una importante masa de consumidores. Como señala Murillo (1997: 432): “Ejemplos de la mercantilización sindical incluyen, entre otras, la compra de firmas privatizadas, la creación de administradoras de fondos de pensión y jubilación, la reorganización de sus obras sociales y la administración de las acciones de los trabajadores por una comisión cobrada de los dividendos”.⁵ La reforma que introdujeron las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión) marcó una nueva forma de relación entre los sindicatos y sus bases, ya no a través de la lógica tradicional de representante-representado, sino bajo una lógica de clientes. Palomino (2005) se refiere a este fenómeno como “business union” o sindicalismo de negocios, es decir, la masa de afiliados sindicales

⁵ Fuente citada por Murillo (1997) *El Cronista Comercial*, 26/10/ 93:6, *Página 12*, "Cash", 20/3/94 y 8/5/94.

es abordada como una población cautiva, a través del vínculo de representación para la venta de servicios. La misma lógica operó en torno a la desregulación de las obras sociales, ya que las reformas tenían como objetivo estimular la competencia para captar más afiliados.

Marcelo Gómez (2009) incorpora una dimensión novedosa sobre el rol del sindicalismo participacionista en la primera etapa del menemismo, al afirmar que, en realidad, las ideas de reestructuración económica dentro del peronismo no fueron sorpresivas desviaciones ideológicas de Menem, sino que ya habían sido elaboradas previamente con notable claridad dentro de un sector del sindicalismo. No se trataría solo de un alineamiento oportunista, en vistas a obtener beneficios corporativos, sino que existía en estos sectores una voluntad explícita de redefinir su rol. Lo que buscaban era liderar el proceso de modernización económica y social y en el triunfo de Menem encontraron la oportunidad de llevar adelante este proyecto. Pero la experiencia no alcanzará los objetivos propuestos y luego de una primera etapa, en la cual el sector participacionista tiene cierta injerencia en la agenda política, el gobierno buscará profundizar sus compromisos con el sector empresario y financiero. Removidos Triaca y Barrionuevo, termina el predominio de la estrategia participacionista y la dirigencia sindical ya no puede verse como integrando “el nuevo bloque en el poder”.

El comportamiento sindical no ha sido uniforme: ha variado dentro de una amplia gama que va desde la conversión a organizaciones que se concentran en la actividad empresarial, por una parte, hasta sus formas más opuestas, centradas en la acentuación del perfil combativo en la representación de los intereses de sus bases. Se analizará a continuación el rol de aquellas corrientes que conformaron la oposición sindical a la política neoliberal. Se ha dicho que la ruptura de la unidad sindical se produjo desde el inicio del gobierno de Menem, siendo la primera vez que un gobierno peronista no podía garantizar la unidad. Según Fernández (1998) diversos gestos de Menem pusieron en evidencia su deliberada voluntad de dividir a la CGT. “Desde la campaña electoral, se observó que

Menem compartía con algunos renovadores cierta desconfianza hacia el sindicalismo y pretendía atribuirle un rol subordinado al Estado y/o a su persona” (Fernández, 1998:150).

En la CGT-Azopardo⁶ de Saúl Ubaldini confluyeron los principales sectores que se oponían al gobierno. Fue esta facción sindical la que organizó, en marzo de 1990, la primera protesta masiva en contra del proceso de privatizaciones y de achicamiento del Estado. El enfrentamiento de Ubaldini con la política menemista se expresó también en la arena electoral. En las elecciones a gobernador de la provincia de Buenos Aires de 1991, Ubaldini se presentó como candidato, acompañado por Hugo Moyano y Héctor Recalde como candidatos a diputados nacionales. La estrategia consistía en presentar a dirigentes sindicales, como candidatos de las listas opositoras, tratando de desligar al peronismo de una supuesta traición a los valores del partido llevada adelante por el oficialismo (Palomino, 2005). El líder sindical fue derrotado en las urnas por Eduardo Duhalde, denotando que el Gobierno contaba con un fuerte apoyo electoral.

La heterogeneidad al interior del sindicalismo opositor pronto se hizo evidente, y fue la constitución de la CTA una de sus principales puntos de inflexión. Si bien la Central de Trabajadores Argentinos se constituye formalmente en 1996 su origen se remonta a principios de la década del 90, siendo la Declaración de Burzaco (1991) y la Jornada Fundacional del Congreso de los Trabajadores Argentinos (1992) sus momentos fundacionales. Su fuerza principal estaba en sindicatos del sector público como CTERA (Docentes) y ATE (Empleados públicos) (Ferrero, 2005).

Este nuevo segmento sindical se configuró en torno de aquellos grupos que habían sido los más afectados por el nuevo modelo económico, los llamado “perdedores”. Lo que caracterizó a este nucleamiento fue su diversidad, ya que en él confluyeron peronistas disidentes, social cristianos progresistas, social demócratas críticos e independientes de diversas posturas de izquierdas (Fernández, 1998). Por su fuerte oposición al modelo socio-económico propuesto por el menemismo y por su cuestionamiento a las prácticas

⁶ Se encontraban, entre otros, el sindicato de la alimentación, el de camioneros, CETERA, ATE, UOM, UTA, cerveceros, marítimos, UTPBA, La Fraternidad y judiciales (Fernández, 1998 y Senén González y Bosoer, 1999).

tradicionales del sindicalismo, este grupo combinó elementos de las tendencias confrontacionista y combativa. Desde un primer momento buscaron configurar una central sindical paralela a la CGT no subordinada al Estado. La aparición en la escena pública de la CTA supuso, en principio, defender las fuentes y condiciones de trabajo frente a las privatizaciones en marcha, como también intentar frenar el decidido impulso de modificación de distintas agencias burocráticas estatales que incluía, entre otros aspectos, reducir la planta estable de empleados y dejar en manos privadas el control de distintas áreas que, hasta entonces, habían sido administradas por el Estado (Armellino, 2004).

En los orígenes de la CTA tuvo un rol muy importante la “marcha federal” organizada por la Central en 1992. En esa ocasión se produjo la movilización de distintos sectores sociales, provenientes de diferentes partes del país, que confluyeron en Capital Federal para manifestarse contra la política económica del gobierno. La marcha federal, como un repertorio novedoso de acción colectiva, puso en evidencia que podía existir capacidad de movilización sin el acuerdo de los principales sindicatos de la CGT. En 1997 la CTA logró el objetivo original de convertirse en una Central independiente, cuando obtuvo la personería jurídica, aunque sin la capacidad de disputarle el monopolio de la personería gremial a la CGT, como organización de tercer grado (Pereyra, 2008).

La CTA no solo buscó presentarse como alternativa al sindicalismo tradicional, sino también como un proyecto de sindicalismo autónomo respecto del Partido Justicialista. Paradójicamente fue en el marco de un gobierno justicialista que se crearon las condiciones necesarias para la emergencia de un sindicalismo que se presentaba como alternativa e interpelaba a las estructuras gremiales tradicionales. Los factores que contribuyeron a este proceso son, en parte, coyunturales y en parte tienen que ver con cuestiones más estructurales. Es cierto que el menemismo, con su giro neoliberal, generó espacios para la disidencia y las tensiones internas, pero esto no quita que desde hacía algún tiempo se habían comenzado a oír las voces que bregaban por mecanismos más participativos y democratizadores al interior del sindicalismo. La CTA fue quien se planteó como objetivo la democratización de la actividad sindical y buscó llevarlo adelante a través de mecanismos

como la posibilidad de afiliación individual o el voto directo de los representantes. Esto la colocaba en las antípodas de la estructura corporativa y verticalista de la CGT (Pereyra, 2008).

Otra novedad introducida por la CTA fue sumar a las organizaciones sindicales, como ATE o CTERA, seccionales de gremios industriales disidentes de sus direcciones nacionales, sindicatos de primer grado pertenecientes a federaciones, organizaciones sociales no sindicales (como por ejemplo jubilados), agrupaciones de desocupados y hasta representantes de ONG y organizaciones de Derechos Humanos. La novedad radica en que se combinan las típicas formas de representación sindical de trabajadores, con formas de representación surgidas de los movimientos sociales. Esto pone en evidencia que durante la década del 90 emerge en Argentina un nuevo tipo de organización, de base sindical, que busca expandir el colectivo de intereses a representar. Esto produjo una ampliación de los interlocutores sociales con los que se relaciona la organización que requirió una transformación en la base de la acción del sindicalismo. En síntesis, en un contexto adverso para las organizaciones laborales, desafiando hábitos y prácticas sindicales tradicionales, el surgimiento de la CTA se presenta como un sindicalismo de nuevo tipo (Ferrero, 2005). La CTA, como expresión de una forma de acción colectiva que excede el marco de las relaciones laborales, puede ser asimilada con lo que Kim Moody⁷ definió como “sindicalismo de movimiento social”. La CTA concibe a la “clase trabajadora” con un criterio ampliado, lo que le permite la representación del heterogéneo mundo del trabajo (Ferrero y Gurrera, 2007). Esta forma sindical se caracterizó por reivindicar y promover derechos que van más allá de los intereses corporativos de los sindicatos. La estrategia movimientista de la CTA buscó transformar los reclamos sectoriales en demandas de derechos universales. El objetivo era nacionalizar los conflictos, utilizando repertorios novedosos como la ya mencionada marcha federal, la carpa docente o las movilizaciones por el caso Cabezas.⁸ Al

⁷ Para profundizar sobre este concepto véase Ferrero, Juan Pablo y Gurrera, María Silvana (2007).

⁸ El fotógrafo José Luis Cabezas fue hallado muerto en enero de 1997, luego de haberse publicado una foto de Alfredo Yabrán, empresario que había mantenido su identidad en reserva por mucho

incorporar reclamos ciudadanos de derechos universales (libre expresión, educación, justicia, etc.) la CTA buscó obtener mayor legitimidad y consenso, presentándose como la contracara de los reclamos meramente sectoriales típicos de las organizaciones sindicales tradicionales (Pereyra, 2008).

Por su parte, la CGT dejó atrás su división, cuando en 1992 un Congreso Extraordinario de Unidad Sindical eligió una conducción unificada. Los conflictos internos entre las diferentes facciones no se hicieron esperar, precipitando el surgimiento de corrientes que cuestionaban fuertemente a la dirigencia y comenzaron a desplegar su capacidad de movilización, como serán el Movimiento de Trabajadores Argentino (MTA) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

El MTA se constituyó en 1994 con un grupo de organizaciones gremiales que decidieron oponerse a la CGT debido al claro apoyo que esta brindaba a los procesos de reforma menemista. Los principales gremios que conformaron el MTA eran la Unión de Tranviarios Automotores (UTA) y Camioneros. Además la integraban algunos gremios, con cierta influencia dentro del movimiento sindical, como Molineros, Papeleros, Imprenta, etc., sumados a gremios que tenían cierta llegada a la opinión pública, o bien arraigo intelectual, como los sindicatos de Televisión, Periodismo, Publicidad, Docentes Privados y Músicos; y ciertos gremios de carácter profesional o técnico como Azafatas, Capitanes y Oficiales de ultramar, Farmacia, Judiciales, Dragado y Balizamiento, Visitadores Médicos, etc. (Fernández, 1997). Sus máximos referentes eran Hugo Moyano (Camioneros) y Juan Manuel Palacios (UTA)

Al momento de su constitución, los gremios agrupados en el MTA no buscaban formar una central sindical paralela, sino ir ocupando espacios al interior de la CGT hasta alcanzar su conducción y transformarla. Estos gremios defendían la idea de un modelo sindical asociado a un estado interventor y a un modelo económico sustitutivo de importaciones propio de la tradición peronista. El sindicalismo propiciado por el MTA

tiempo. Las movilizaciones se produjeron para pedir justicia por la muerte del fotógrafo ante el temor de que el crimen quedara impune, debido a que Yabrán era una persona cercana al poder.

cuestionaba fuertemente al “sindicalismo empresario” que encarnaba la CGT, pero como su objetivo era mantener la unidad, optaron por participar tanto de las acciones de lucha planteadas por la CGT como por la CTA. Mientras algunos dirigentes ocupaban cargos en la CGT el movimiento conformaba una mesa de enlace con la CTA.

Es importante destacar que, mientras la dirigencia nacional de los sindicatos atravesó un fuerte proceso de debilitamiento y fragmentación, en el nivel local la militancia sindical tuvo, por el contrario, un rol verdaderamente protagónico. Esto fue debido a que las consecuencias de las políticas neoliberales impactaron de manera diferente en la cúpula sindical y en las bases y además esas transformaciones tuvieron consecuencias disímiles en las diferentes regiones del país. Fue precisamente allí donde comenzaron a surgir liderazgos sindicales de nuevo tipo, más ligados a la izquierda (Pereyra, 2008).

La reducción del gasto público requerido por el plan de Convertibilidad se hizo sentir con fuerza en las provincias y municipios del país, donde fueron los sindicatos de empleados públicos los que lideraron la confrontación con el nuevo modelo económico. Las protestas no se limitaron a las típicas formas de reclamo gremial (paro o manifestaciones) sino que estuvieron marcadas, además, por violentos enfrentamientos con la policía y con un fuerte cuestionamiento a la dirigencia política (Pereyra, 2008). Los nuevos repertorios de protesta incluyen denuncias de corrupción, destrozos a edificios públicos y de residencias privadas, poniendo en evidencia la impotencia de la clase política para neutralizar estas acciones. Conocidos como “Estallidos Sociales”⁹ estas protestas marcaron la emergencia de nuevas formas de articulación de las demandas de los sectores populares que se producen por fuera de los canales sindicales tradicionales, que habían estado monopolizados por un sindicalismo de corte justicialista.

En este contexto es que se produce la emergencia de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la cual nucleaba a dirigentes sindicales de izquierda, bajo el liderazgo del jujeño Carlos “el Perro” Santillán. La CCC contó con el apoyo del Partido Comunista

⁹ Las movilizaciones más importantes se produjeron en Santiago del Estero, en 1993, Cutral-Co y Plaza Huinul, en 1996, Tartagal y General Mosconi, en 1997, y Corrientes, en el año 1999.

Revolucionarios (PCR), desprendimiento maoísta del PC que, desde la transición democrática, se encontraba trabajando en su vinculación con las bases sindicales. En la década del 90 se observa una ampliación de su influencia, especialmente en algunos sindicatos de empleados públicos, y también en algunas fábricas (Pereyra, 2008). Se potenciaba así un sindicalismo de izquierda que capitalizaba la profundización de la brecha entre las bases y la dirigencia.

La presencia de miembros de la CCC en las movilizaciones sociales, en los foros e instancias de articulación de la actividad sindical y la notoriedad pública alcanzada por algunos dirigentes, acelerada por los medios de comunicación, posibilitaron al movimiento una importante notoriedad pública. Lo que diferencia a la CCC de otras corrientes sindicales es su filiación no peronista y su articulación con corrientes afines en América Latina, particularmente con los Zapatistas mexicanos. Pero además, a diferencia de otras organizaciones sindicales, la CCC ha buscado ejercer una representación más amplia e incluir a todos aquellos que han quedado excluidos del mercado de trabajo, como es el caso de los desocupados (Palomino, 2005).

A modo de conclusión podemos afirmar que las reformas neoliberales implementadas por Menem generaron respuestas y estrategias diferentes al interior del sindicalismo y sin dudas contribuyeron a su fragmentación y división. El cambio del modelo productivo minó las bases sociales de las organizaciones sindicales y generó nuevas lógicas de organización en los sectores populares que, por primera vez en mucho tiempo, no estaban ligadas a los ámbitos de trabajo. Las formas de expresión sindical clásicas (huelgas, defensa de derechos laborales, negociación colectiva, etc.) se fueron debilitando y los sindicatos debieron reorientar sus formas de intervención y sus mecanismos para obtener recursos. Un sector del sindicalismo privilegió la estrategia adaptativa para preservar ciertos intereses corporativos, mientras que el otro sector se propuso impugnar la política gubernamental, dando origen a un sindicalismo disidente dispuesto a romper con la CGT. Dentro de este espacio opositor surgieron dos organizaciones: la primera, cuyo objetivo fue constituir una Central paralela para conformar un modelo sindical totalmente

nuevo, (la CTA) y la segunda, un agrupamiento denominado MTA, más coyuntural, pero que buscaba diferenciarse de las lógicas sindicales tradicionales.

A diferencia de la CGT, que adoptó una estrategia desmovilizadora frente al gobierno de Menem, los sindicatos agrupados en la CTA y el MTA tomaron la estrategia opuesta, con el objetivo de obtener visibilidad pública. Ambas organizaciones buscaron, además, diferenciarse de la CGT a partir del tipo de relación mantenida con distintos actores sociales y políticos. Constituyeron nuevas alianzas sociales y políticas, realizaron protestas cuyos reclamos y formas de expresarlo eran novedosos, y participaron en escenarios de conflicto social surgidos de las transformaciones dadas, en un contexto de movilización creciente y diversa (Armellino, 2004).

Afirmar que durante la década del 90 el sindicalismo argentino pierde poder y entra en crisis es describir solo una parte del proceso, porque en el contexto del repliegue de ciertas formas de sindicalismo emergen formas alternativas con rasgos diferenciados. El mundo sindical se hace en esta etapa más complejo y más diverso, presentando nuevos desafíos tanto para la dirigencia, las bases y la clase política.

Capítulo 2: El Gobierno de la Alianza y la proyección política del sindicalismo

Los estallidos sociales¹⁰ ocurridos en Argentina en el mes de diciembre de 2001 fueron el punto más álgido de un proceso de crisis integral que el país atravesaba desde mediados de la década del 90. A partir de la Crisis del Tequila comenzó a evidenciarse la imposibilidad de mantener el esquema que había permitido la estabilidad macroeconómica y el crecimiento del PBI, a partir de la implementación de reformas estructurales basadas en la desregulación, la apertura comercial y las privatizaciones (Castellani y Gaggero, 2011). Al finalizar el segundo mandato de Menem el país atravesaba una profunda crisis en su modelo de acumulación, que presentaba un importante desafío para el futuro gobierno. En ese contexto se produjo la elección de 1999 que llevó a la fórmula de La Alianza, formada, entre otros, por Fernando de la Rúa, como candidato presidencial, y Carlos “Chacho” Álvarez como vicepresidente.

2.1 La llegada de la Alianza al Poder: definiendo estrategias hacia la unidad de la CGT

La coalición entre la UCR y el FREPASO, denominada formalmente como “Alianza por el trabajo, la justicia y la educación”, llegó al poder después de 10 años de gobiernos menemistas, presentándose como la única alternativa viable contra un estilo de gobierno que solía caracterizarse como la “mala política”. En su discurso de campaña, la Alianza, buscó ofrecer la imagen de la transparencia que venía a dejar atrás la corrupción y la frivolidad en la política. Sin embargo, desde el inicio de la gestión, la necesidad de afrontar una crisis económica de magnitudes crecientes fue alejando al flamante gobierno de sus

¹⁰ Se entiende por “estallido social” a los procesos de protesta que movilizan una participación que, por su caudal e intensidad, alcanzan un pico de expresión con diferentes grados de violencia que atenta contra el orden social y político. Los estallidos se caracterizan por albergar protagonistas de índole y objetivos heterogéneos, que confluyen en un momento episódico que luego cesa, y que no suele dar paso a formas de acción colectiva organizadas, a la vez que perduran en el tiempo.

promesas de políticas de centro izquierda y lo acercó cada vez más hacia medidas neoliberales y a la precipitación de su caída. Dikenstein y Gené (2014) sostienen que, desde sus orígenes, la Alianza se constituyó como un conjunto heterogéneo de elencos políticos que atravesaron a lo largo del gobierno momentos de conflicto y tensión internas que funcionaron como condición de posibilidad para su implosión en el año 2001.

Se buscará analizar aquí la configuración de relaciones entre la Alianza, entendida en la complejidad de su configuración interna, con los otros actores que contribuyen a explicar el proceso que lleva al colapso del 2001. Se trabajará en dos niveles, el político y el económico, para analizar, en el próximo capítulo, la cuestión de la movilización y la protesta laboral. Se parte de la base de que los procesos económicos son determinantes, pero no excluyentes, para entender la crisis del 2001. Por lo tanto se pondrá la mirada sobre la relación de la Alianza con el sindicalismo y el Partido Justicialista (en adelante PJ) para comprender cómo se configuró el complejo entramado que concluyó con la renuncia del presidente de la Rúa en un contexto de crisis económica y exacerbación de la movilización popular.

Luego de asumir, el nuevo Presidente debió enfrentar diversos desafíos representados en, por un lado, la conformación de su Gabinete y, por el otro, la relación con el PJ y el sindicalismo.

Ante la falta de normas pre-establecidas para la conformación ministerial, rápidamente comenzaron a manifestarse las tensiones por el reparto de cargos entre los diferentes grupos de la Alianza. Conformado el gabinete quedó en evidencia la asimetría a favor del ala radical en detrimento de los sectores frepasistas. Al mismo tiempo, predominó dentro de las líneas radicales el sector más afín al delaruisismo (Dikenstein y Gené 2014).

Para el PJ el triunfo de de la Rúa en las elecciones de 1999 significó un importante desafío de adaptación. Cargando con el peso de la derrota y de las fracturas internas que esta dejó, los líderes del PJ debieron resignarse a cumplir y a potenciar dos funciones: por un lado la acción parlamentaria y por el otro la conducción de las provincias en las cuales el PJ había resultado victorioso. Si en un primer momento parecía que el incómodo lugar de

oposición iba a relegar a un segundo plano al PJ, pronto quedó en evidencia la importancia que tendría para las políticas de la Alianza el apoyo parlamentario de los peronistas. Leyes como la de Presupuesto, de Reforma Impositiva y de Reforma Laboral obligaron al gobierno a buscar acuerdos y negociar arduamente para lograr su aprobación. Dado que el peronismo estaba atravesando una etapa de recomposición de su liderazgo, los alineamientos de muchos senadores y diputados estaban pendientes de definición, esta situación presentó un desafío incluso mayor para el gobierno a la hora de negociar.

Para el sindicalismo la contienda por la presidencia había puesto en evidencia, una vez más, las profundas diferencias internas que desde la etapa menemista se venían profundizando. Mientras los sectores disidentes de la CGT, liderados por la UOCRA y el MTA, se encolumnaron detrás del candidato Eduardo Duhalde, el sector fiel a la conducción oficialista de Daer siguió firme en su postura menemista. Hasta las elecciones de octubre, la división de los grupos fue reflejo de la interna del propio justicialismo, pero una vez asumida la derrota comenzaron a sonar las voces de la unidad. Las señales de acercamiento comenzaron a observarse cuando, por ejemplo, la CGT ofreció al MTA uno de los cuatro lugares que le correspondían al sindicalismo en el directorio del organismo que, a partir del año 2000, manejaría el dinero de las obras sociales¹¹ (BAE, 4/11/1999).

Es importante señalar que una vez electo de la Rúa comenzó a manifestarse en el imaginario popular el fantasma de los 13 paros realizados durante el gobierno de Alfonsín. Lo lógico simplificado que sobrevolaba en la prensa y se reproducía en la calle era que el sindicalismo era propenso a ponerse en pie de guerra cuando se trataba de un gobierno no peronista. La comparación entre Alfonsín y de la Rúa aparecía como inevitable. Sin embargo, y a pesar de que en muchos casos la retórica del sindicalismo estaba cargada de lenguaje combativo, especialmente frente a los posibles ajustes que ensombrecían el

¹¹ El 25 de octubre de 1999, pocos días antes de finalizar su mandato, el presidente Carlos Menem y todos sus ministros firmaron el decreto que devolvía a los sindicatos de la CGT el control de los 360 millones de pesos anuales que recaudaba el Fondo Solidario de Redistribución de las Obras Sociales. En rigor, el Decreto establecía que, en el Organismo, los sindicatos tendrían asignados cuatro representantes, el estado tres y el empresariado uno.

panorama económico, la prioridad del sindicalismo en los meses previos a la llegada de de la Rúa a la Casa Rosada era el consenso. Se confiaba en la importancia de conformar un frente unificado que actuara de interlocutor con el nuevo Presidente. Para ello era necesario resolver el tema de la unidad, al menos al interior de la CGT.

Entre los temas más importantes que se instalaron en la agenda del sindicalismo para ese momento apareció el de la designación del futuro Ministro de Trabajo. Comenzó a sonar el nombre de Jorge Sappia (más afín a los sindicatos), pero se terminó imponiendo Alberto Flamarique para la Cartera de Trabajo. La designación no cayó del todo bien en la filas del movimiento obrero, ya que consideraban que, siendo Flamarique un hombre ligado al Frepaso, tendría más tendencia a acercarse a la CTA. Si bien las credenciales que el nuevo Ministro podía presentar en temas laborales no conformaban a muchos en la CGT, la elección de un hombre de su perfil puede ser interpretada como un gesto del Presidente, teniendo en cuenta su decisión de nombrar en carteras no específicas a economistas, tal es el caso de Rodríguez Giavarini en Relaciones Exteriores, López Murphy en Defensa y, el más controvertido, Jorge Llach en Educación (Dikenstein y Gené 2014).

Durante el primer mes de gestión el Presidente y su Ministro de Trabajo enviaron numerosas señales hacia todos los sectores que componían el espectro sindical. Mientras de la Rúa recibía a Daer y Moyano, Flamarique visitaba la sede de la CTA. En esa oportunidad, y ante la presión de los medios de prensa, sostuvo: "Estamos reconociendo una realidad, no es más que eso" y con esa frase le dio pié a Victor de Gennaro para afirmar: "Nos alegra que se reconozca que en el país hay dos centrales sindicales" (*Diario Popular*, 27/11/1999).

2.2 La Reforma Laboral y la ruptura sindical

El tiempo de los gestos dio paso a la toma de decisiones y la etapa de las visitas y las frases de unidad fue sucedida por la etapa de los desencuentros. El 14 de diciembre Flamarique anunció que el Gobierno estaba comenzando a trabajar sobre los aspectos de una Reforma Laboral. Este proyecto era una de las prioridades originales del modelo

económico de reforma estructural que el Gobierno entendía que se necesitaba implementar. En tal sentido, no había sorprendido la designación de José Luis Machinea al frente de la cartera de Economía, quien buscó llevar adelante una estrategia para obtener rápidamente respaldo financiero. Para ello debía mostrar claras señales de la voluntad del gobierno en avanzar en las reformas pendientes y en profundizar el ajuste fiscal. Desde temprano quedó en evidencia que, a pesar de su fuerte discurso opositor contra el menemismo, las concepciones económicas de ese modelo tendrían un lugar privilegiado en el Gobierno de la Alianza.

Ante la dificultad para generar recursos propios, con una economía en franco retroceso y un déficit fiscal creciente, el ministro Machinea puso en marcha un plan que se sostenía en la repetida receta de ajuste y endeudamiento. En diciembre de 1999 anunció un recorte de gastos del Estado nacional, por \$1.400 millones, junto a un aumento y extensión del impuesto a las ganancias y al consumo. El recorte recaía sobre el PAMI (la obra social de los jubilados), las jubilaciones mayores a \$3.100, los subsidios para desocupados y los regímenes de promoción industrial de algunas provincias, mientras que el aumento de impuestos afectaba a los trabajadores asalariados y autónomos (Salvia 2011).

La Ley de Reforma Laboral y las consecuencias que derivaron de su sanción pueden ser entendidas como un punto determinante para el Gobierno de la Alianza. Esto se debe a diversos factores. Por un lado, la Ley Laboral traía consigo un profundo simbolismo, ya que era considerada como el paso de política neoliberal que ni el propio menemismo estuvo dispuesto a dar. Además, la negociación de la Ley en el Congreso, obligó a sincerar las posiciones de los sectores del peronismo, al mismo tiempo que puso en el centro de la escena a los actores sindicales, que debieron renovar sus estrategias ante un nuevo interlocutor gubernamental, no peronista. Y, como si esto fuera poco, la Ley de Reforma Laboral fue la que precipitó la primera crisis política del gobierno, que hirió profundamente a la Alianza, al poner en jaque su credibilidad y su transparencia.

La iniciativa del Gobierno en materia laboral buscaba introducir una serie de reformas con el fin de desregular el mercado de trabajo y debilitar a los sindicatos más

poderosos. Tres fueron los temas centrales de la propuesta: la extensión del período de prueba de tres a seis meses, con posibilidad de extenderlos a un año, la finalización de la “ultraactividad”, es decir, que dejara de regir la renovación automática de los convenios, como ocurría desde 1975 y, por último, una iniciativa para lograr la descentralización, que implicaba favorecer la firma de Convenios por empresa, rama o región por sobre los convenios nacionales.

La pregunta que aparece inevitablemente es: ¿hasta qué punto la reforma laboral implicaba para el sindicalismo un cambio sustancial en la estructura legal, que, históricamente, había contribuido a consolidar su poder? Como señala Palomino (2005) la nueva Ley no alternaba, en esencia, el modelo sindical basado en el monopolio de la representación por rama, la injerencia estatal a través de la personería gremial y el predominio de los dirigentes nacionales en la negociación colectiva. Entonces: ¿por qué tanto el sindicalismo como el Gobierno se empeñaron en una disputa de esta naturaleza? En realidad, se trataba de una pulseada en la cual los dos actores se habían propuesto torcerle el brazo a su contrincante en una puja por medir sus fuerzas. A priori se puede concluir que ni unos ni otros cumplieron su objetivo de salir fortalecidos de la situación. Cabe aclarar que los motivos fueron diferentes para cada caso.

El sindicalismo entendió que, ante un PJ con liderazgos dispersos, la lucha contra la Reforma era la oportunidad para constituirse en el único actor capaz de amalgamar a la oposición. Pero los resultados no fueron los esperados, ya que esta puja terminó poniendo en evidencia la propia incapacidad para mantener la unidad.

Para el Gobierno, el Proyecto de Reforma Laboral formaba parte de la estrategia de acuerdos pactados con el FMI con el objetivo de seguir recibiendo el financiamiento externo que el gobierno tanto necesitaba. El inicio de la gestión brindaba una buena oportunidad para lograr la aprobación de la ley, ya que, en ese momento, la imagen de los sindicatos era muy cuestionada a nivel de la ciudadanía. Pero la iniciativa también presentaba sus riesgos.

El “fantasma” de la Ley Mucci¹² todavía no había desaparecido y el gobierno no estaba dispuesto a pagar el costo político que podía implicar que el PJ no brindara su apoyo en el Congreso para aprobar la Ley. Las dificultades que desde antes de asumir había tenido el gobierno para lograr la aprobación de la Ley de Presupuesto 2000 y del paquete impositivo eran un indicio de que resultaba indispensable una estrategia de negociación eficiente tanto con el PJ como con la CGT.

Para los primeros meses del año 2000 el frente de batalla con los sindicatos comenzaba a abrirse. Uno y múltiple, en el sindicalismo, cada sector buscaba desplegar su estrategia en vista a sus propios objetivos. Si al principio predominaba un clima de unión ante la adversidad, a la larga la realidad demostró, una vez más, las fisuras entre los sectores negociadores y confrontacionistas. El líder de la CGT, Rodolfo Daer, utilizó un discurso de cuestionamiento al proyecto pero, al mismo tiempo, una abierta voluntad de sentarse a discutir los términos de la reforma. Alternaba mensajes de confrontación y conciliación hacia el gobierno, combinado con señales hacia el interior del movimiento para alinear las fidelidades. El MTA se mostró siempre más propenso a utilizar la movilización como método de presión contra la sanción de la Ley.¹³ La CTA, por su parte, se mostró desde un primer momento en oposición a la reforma, pero su confrontación aparece matizada por el hecho de que, desde el gobierno, se buscaba utilizarla como carta de negociación. El recurso era solapar una amenaza de legalizar a la Central alternativa si los líderes de la CGT no cedían en su postura combativa. Además, el Gobierno, utilizó como herramienta de presión la iniciativa de bloquear los fondos que habían sido destinados para auxiliar a las obras sociales sindicales.

En síntesis, si bien por principio, los gremios tradicionales de la CGT (“los gordos”) estaban en contra de la ley, pragmáticamente estaban dispuestos a negociar su apoyo a cambio de garantías por parte del gobierno para el financiamiento de las obras sociales. Por

¹² La Ley Mucci fue un proyecto de ley de reforma sindical que impulsó el gobierno de Alfonsín, al poco tiempo de haber asumido su mandato, que no logró su aprobación en el Congreso.

¹³ Véase la entrevistas del diario *Clarín* a Hugo Moyano del 6/2/2000 “Movilizaré la CGT al Congreso contra la reforma laboral” y la entrevista del diario *Clarín* del 18/3/2000 titulada “Si el Gobierno nos ignora, tendrá que oír a la gente en la Plaza”.

el contrario, Moyano y los sindicatos del MTA se oponían férreamente a la ley y no estaban dispuestos a negociar con el Gobierno. Posición que reforzaban demostrando su capacidad de movilización y con su abierta vocación de convertir a Moyano en el sucesor de Daer. Finalmente, el sector tradicional alcanzó un acuerdo con el Gobierno para la sanción de la Ley a cambio de sacrificar “la cabeza” de Moyano, es decir, a cambio de quitarle su apoyo para la conducción de la CGT (Rauss, 2014). La media sanción en Diputados de la Ley de Reforma Laboral precipitó para el mes de marzo de 2000 la división de la CGT.

Si originalmente el objetivo del MTA era ir ganando espacio desde el interior de la CGT,¹⁴ la disputa por la Reforma Laboral generó un cambio de estrategia. Como se ha señalado en el capítulo anterior, la adopción de posturas confrontacionistas le había permitido al MTA realizar fuertes críticas respecto de las políticas neoliberales del menemismo, pero sin salirse abiertamente de la estructura de la CGT. Así fue que el sector de Moyano logró acumular poder a partir de operar en un espectro con amplio margen de maniobra, al alternar negociación con confrontación (Fernández Milmanda, 2008). A diferencia de lo que ocurría con la cúpula de la CGT, al representar a una línea disidente, los riesgos de represalias del Gobierno eran menores (por ejemplo que le quitara la personería gremial). Esta posibilidad hacía que las conducciones más institucionalizadas buscaran privilegiar la negociación desde arriba antes que la movilización desde abajo. La CGT, en su carácter de actor político relevante, siempre fue proclive a preservar sus intereses institucionales, relegando aspectos de su rol de defensa de los intereses obreros. Ese fue el elemento que recogió el MTA, primero desde el interior y luego desde la vereda opuesta, aunque siempre dejando espacio para cuando fuera necesario unir fuerzas. Para analizar en profundidad esta ruptura es necesario incorporar dos elementos al análisis, por un lado la relación sindicalismo-PJ y, por el otro, la relación representante-representado (Cúpula-Bases Sindicales). Siguiendo el análisis de Fernández Milmanda (2008) podemos afirmar que la estrategia del MTA de presionar desde adentro le permitió, durante el

¹⁴ La famosa estrategia de “presión desde dentro” que señala Fernández en su obra clásica de 1997 *Flexibilización laboral y crisis del sindicalismo*, Buenos Aires, Espacio Editorial.

menemismo, conciliar las tensiones en relación con el PJ y con las bases. Mientras se mantuvo dentro de la CGT, el MTA conservó su poder de negociación con el peronismo y, en simultáneo, logró diferenciarse de la cúpula presentándose ante las bases como el verdadero representante de sus intereses. Cuando asume el gobierno de la Alianza estas condiciones se modifican, precipitándose el quiebre y la conformación de una central alternativa. Para Fernández Milmanda (2008) la ruptura del MTA se puede explicar a partir de su decisión de “privilegiar su capacidad de representar a las bases obreras por sobre la de negociar con el Estado”. Es importante señalar el rol que jugaron los factores económicos. Con el fin del ciclo expansivo de la economía se pusieron de manifiesto las consecuencias negativas que las reformas neoliberales habían producido sobre la clase trabajadora. Y como el gobierno de la Alianza se empeñaba en proponer proyectos, que profundizaban esa dirección, al MTA se le reducían sus alternativas si quería seguir contando con el apoyo de las bases. Ante la decisión de la CGT de mantener su posición negociadora con el Gobierno, el MTA entendió que era el momento de aprovechar la oportunidad y conformar una CGT Disidente. Además, el hecho de tratarse de un gobierno no peronista amortiguaba el costo de pasar a la oposición.

El objetivo de la Alianza era limitar el poder corporativo del sindicalismo para aumentar su capacidad de maniobra, pero como la iniciativa de Reforma Laboral terminó enfrentándola con todas las tendencias sindicales, se vio obligada a negociar en el Senado con el PJ (Fernández, 2002). No dispuestos a cargar con el costo político que significaba trabar una iniciativa para generar empleos, los senadores del PJ se mostraron dispuestos a abandonar las posturas críticas hacia la Ley. Había llegado el momento de dejar atrás sus diferencias, por lo que comenzaron a alinear sus posiciones en pos de una estrategia más pragmática. Para fines de marzo, el bloque oficial lograba acordar algunas modificaciones a la ley con sus pares opositores y así se acercaba a su aprobación. Mientras tanto, Moyano, ya establecido como líder de la CGT Disidente, redoblaba sus críticas e iniciaba el camino que lo llevaría a desmarcarse del peronismo. Se presentó en la Comisión de Trabajo del Senado y acusó al ministro de Trabajo, Alberto Flamarique de jactarse de "tener una

Banelco" para lograr el voto de los legisladores del PJ, y señaló que un funcionario del Ministerio del Interior le había ofrecido dinero para la obra social de su gremio (camioneros), a cambio de que dejara sin efecto el paro con movilización que se estaba organizando (*La Nación*, 30/3/2000). Este era solo el puntapié inicial de una serie de denuncias que estallarían con toda su fuerza a partir del mes de julio, instalándose como uno de los principales temas de la agenda política.

2.3 El Frente Sindical y la crisis política en la Alianza

Después de meses de negociación, el Gobierno había logrado la sanción de la Ley de Reforma Laboral, pero el escándalo por los sobornos ya había hecho mella en la coalición gobernante. La situación en el Senado comprometía a miembros claves del gobierno como Fernando de Santibañez, titular de la SIDE y hombre de confianza del Presidente y Alberto Flamarique, muy allegado al Vicepresidente. En ese contexto se desató una escalada de conflicto que llevó a la máxima expresión las contradicciones y diferencias que la coalición experimentaba desde el principio. La postura del Presidente fue oscilante, primero intentó quitarle relevancia al escándalo y luego se vio obligado a buscar formas para acotarlo. El Vicepresidente, en cambio, fue el mayor impulsor de la investigación y de los pedidos de renuncia, lo que le generó nuevos adversarios (Dikenstein y Gené, 2014). En medio de un escenario caracterizado por enfrentamientos personales entre Chacho Alvarez y De Santibañez, de investigaciones cruzadas entre la Oficina Anticorrupción y el Congreso, el presidente de la Rúa anunció una serie de cambios en el Gabinete. La estrategia era realizar una suerte de re-lanzamiento del gobierno para afirmar su autoridad y al mismo tiempo proteger a ciertos funcionarios involucrados. Así fue que se privilegiaron los lazos con personas de estrecha confianza y se buscó desplazar a las figuras del radicalismo que no pertenecían a su línea. Flamarique, por ejemplo, pasaría a ocupar el cargo de Secretario General de la Presidencia y De Santibañez permanecería en su cargo al frente de la SIDE. Esta movida precipitó en octubre la renuncia del Vicepresidente y una evidente crisis en la Alianza. Aunque también los flamantes

funcionarios presentaron su renuncia, los desequilibrios internos eran imposibles de disimular. En ese contexto asume como ministro de Trabajo Patricia Bullrich, mientras la CGT Oficial reelegía, en agosto, a Daer y el mes siguiente la CTA reelegía a De Gennaro.

La renuncia de Chacho Álvarez no solo tuvo efectos políticos, sino que también causó un fuerte impacto en los mercados. El riesgo país se disparó y la cotización de los bonos cayó, mientras en la opinión pública crecía la desconfianza sobre la capacidad del Presidente para sobrellevar la crisis. La correlación de fuerzas políticas se vio afectada, dejando al FREPASO en una situación muy ambigua. Algunos entendían que la renuncia de su líder era un acto de irresponsabilidad y otros le reclamaban que adoptara una posición más extrema y que abandonara definitivamente la Alianza. El Congreso terminó siendo un actor institucional indispensable para las iniciativas de la presidencia. Al disgregarse la bancada del FREPASO, con la UCR a la defensiva, de la Rúa necesitaba del apoyo fundamental del PJ. Los justicialistas se mostraron dispuestos a colaborar con el Presidente y acordaron aprobar las leyes de emergencia financiera y de lucha contra la evasión, pero pusieron sus reparos respecto a los proyectos de ajuste que implicaran un esfuerzo por parte de las provincias bajo su conducción (Novaro, 2010).

2.4 Del Blindaje a la Ley de Déficit Cero. Acción y reacción sindical

La descomposición de la coalición gubernamental, el aislamiento político del Ejecutivo y la creciente sensación de ingobernabilidad se produjeron al tiempo que las políticas de ajuste mostraban su ineficacia. Para el mes de noviembre se hizo evidente que la Argentina no iba a poder pagar con recursos propios los compromisos asumidos con los organismos de crédito (Pucciarelli y Castellani, 2014). La prensa¹⁵ daba sistemáticamente las mediciones del riesgo país que, al alcanzar los 1000 puntos, encendió las alarmas de un posible desplazamiento de la Argentina del mercado de capitales. Para poder superar esta crítica coyuntura el ministro Machinea impulsó una megaoperación de rescate financiero

¹⁵ Vease “Consideran más riesgosa a la Argentina” en diarios *La Nación* 2/11/2000 o “El riesgo país superó los mil puntos” en *La Nación* 9/11/2000.

con el FMI que se conoció como Blindaje. La estrategia consistía en aumentar las reservas, para poder mantener la convertibilidad y reducir el riesgo país, a través de préstamos por 40.000 millones que serían pedidos al FMI, al Banco Mundial, al Banco interamericano de Desarrollo, al gobierno español y a bancos privados internacionales. A cambio, los organismos internacionales de crédito, pedían equilibrio fiscal, restricciones presupuestarias y ajuste de las administraciones públicas nacionales y provinciales. Pero el blindaje no alcanzó los objetivos deseados y solo logró profundizar la recesión. Para marzo de 2001 la economía estaba al borde del colapso. La pérdida de control sobre la economía, por parte del gobierno, terminó con la renuncia de Machinea y su reemplazo por Ricardo López Murphy, economista de conocida trayectoria radical y ortodoxa (Felder, 2007). Con el fin de garantizar el cumplimiento de los crecientes pagos de la deuda, López Murphy impulsó un programa de ajuste de 2.000 millones de pesos centrados en la educación. Este programa implicaba, por ejemplo, un recorte del presupuesto educativo nacional, eliminaciones de subsidios y el incremento del 15% en el IVA a la TV por cable y a espectáculos culturales y deportivos (*Clarín* 17/3/2001). Si bien el proyecto contó con el apoyo de los acreedores externos, el sector financiero y el FMI, fue resistido fuertemente por el sector sindical, el sector productivo y todas las fuerzas de la oposición. Se produjo, entonces, una sucesión de protestas y acciones de resistencia que profundizaron la crisis política del gobierno. La renuncia del ministro de Educación y del ministro del Interior, como forma de expresión de su oposición a las medidas económicas, pusieron de manifiesto el repliegue de los últimos elementos frepasistas que sobrevivían en la Alianza. Ante la escasa legitimidad política que le quedaba, López Murphy decidió dar un paso al costado, a solo quince días de haber asumido (*La Nación*, 20/3/2001).

La llegada al Ministerio de Economía de Domingo Cavallo marcó una nueva etapa en el gobierno de de la Rúa. La sucesión de intentos fracasados destinados a frenar la debacle económico-financiera, unida a la acumulación de conflictos al interior de la Alianza, generaron una nueva dimensión de la crisis. A la crisis de acumulación de la etapa inicial le sucedió una crisis fiscal que terminó convirtiéndose en crisis financiera (Pucciarelli y

Castellani, 2014). Llegado a ese punto el Gobierno se vio ante la imposibilidad de seguir manteniendo el crédito y debió recurrir a medidas que terminaron generando una crisis político-institucional, que amenazó peligrosamente la estabilidad institucional y la gobernabilidad. Se analizará a continuación esta última etapa, que se inicia con la designación de Cavallo, tratando de dar cuenta del rol que desempeñaron las organizaciones sindicales en este proceso crítico.

El programa económico propuesto por López Murphy había provocado una profundización de la protesta social, una evidente crisis política y un claro vacío de poder. En ese contexto, el gobierno buscó enfrentar el conflicto con una estrategia diferente. Con un presidente fuertemente debilitado comenzaron a ganar espacio las fracciones de la coalición que habían quedado relegadas en las etapas anteriores. Se propuso la formación de un “gobierno de unidad nacional” respaldado por Chacho Álvarez y Alfonsín (Pucciarelli, 2014). Sin embargo, el Presidente decidió imprimirle al proyecto un sesgo diferente. Lejos de reconducir al gobierno a las “fuentes” de la Alianza, confirmó el retorno de Domingo Cavallo al Ministerio de Economía. Esta decisión no fue sorpresiva. De hecho, el nombre del ex ministro menemista sonaba constantemente para diferentes puestos relevantes, incluso para la propia Cartera de Economía (Dikenstein y Gené 2014). La designación de Cavallo contó con un amplio consenso, tal vez porque un gran porcentaje de la población apoyaba el mantenimiento de la Convertibilidad y veía en Cavallo a la persona que mejor podía preservarla. Según cifras de una encuesta de Gallup, cerca del 60% de la población confiaba en Cavallo para salir de la crisis y el 80% creía que no se debía abandonar la convertibilidad (*La Nación*, 30/3/2001). El regreso triunfal del Ministro fue avalado por el Gobierno a través de la concesión de poderes especiales, que recreaban la figura que el “Superministro” había sabido cultivar en la década del 90.

Cavallo lanzó un plan que aparentaba tener rasgos heterodoxos. Es decir, buscaba obtener los mismos resultados, pero por caminos diferentes. La meta seguía siendo mantener la convertibilidad y el pago de la deuda, pero esta vez poniendo el acento en la reactivación económica y en el equilibrio financiero. Para ello era necesario disminuir la

presión de los planes de ajuste fiscal, atenuar el conflicto social y recuperar la iniciativa política negociando las principales medidas con la oposición y las organizaciones sociales (Seoane, 2003). El logro de estos objetivos suponía el apoyo de diversos actores tales como el capital financiero, los organismos de crédito, las calificadoras de riesgo país, etc. Como sostiene Pucciarelli (2014) el plan era tan audaz como inconsistente y reflejaba que detrás del camuflaje de la heterodoxia se escondía un proyecto propio de la tecnocracia liberal.

En mayo de 2001 Cavallo anunció la implementación del Megacanje, mediante el cual el Estado rescataría títulos de deuda a corto plazo y los cambiaría por otros de mayor plazo. Si bien esta transacción implicaba asumir el pago de tasas de interés más elevadas, permitía aliviar la carga de intereses hasta tanto la economía repuntara y mejorara la capacidad de pago. Para poder sostener el Megacanje, fue necesario realizar un nuevo plan de ajuste fiscal, reducción del tamaño del aparato del Estado, mayor liberalización comercial y el compromiso de que el gobierno no intervendría en las decisiones del Banco Central. Esto permitió restablecer las negociaciones con el FMI y desbloquear el flujo de préstamos, que había sido interrumpido por la falta de cumplimiento de las metas fiscales (Felder, 2007). Las expectativas sobre el Megacanje eran verdaderamente altas,¹⁶ se esperaba que llevara a una reducción del riesgo país y que contuviera la fuga de capitales, objetivos que no lograron alcanzarse como se había previsto.

Para el mes de junio el supuesto programa heterodoxo mostraba su agotamiento, obligando al Presidente a sincerar las posiciones. Comenzó a sonar, entonces, un proyecto que recibió el nombre de Concertación Política y Social, que implicaba una suerte de acuerdo entre gobernadores, empresarios y sindicalistas para abordar los problemas sociales como el desempleo, la pobreza y la creciente exclusión social. En ese proyecto cumplió un rol central Eduardo Duhalde, quien, para entonces, buscaba afianzar su posición en el PJ en vista a las futuras elecciones. Esta búsqueda por estrechar lazos con actores

¹⁶ En un artículo publicado por el diario *Ámbito Financiero* del 7/5/2001 se recogía la opinión de los principales referentes de la economía bajo el título "Amplio apoyo de economistas al Megacanje: aleja el default".

como el PJ y el sindicalismo puede ser interpretada como una necesidad, por parte del Gobierno, de reforzar su posición en vistas a un frente de conflicto que se hacía cada vez más complejo. El acercamiento de de la Rúa al PJ no solo se realizó a través de Duhalde, sino que también buscó tener contacto con otra de las figuras fuertes del PJ, Carlos Ruckauf, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Para los referentes del PJ el hecho de sentarse a dialogar con el Gobierno les permitía posicionarse como un actor central de la trama política y oficiar como interlocutores necesarios a la hora de abordar las problemáticas más acuciantes. Sin embargo, esto no implicaba una tregua en las demandas que, sobre todo las provincias, reclamaban al Estado. El Gobierno Central estaba fuertemente endeudado con los Gobernadores, quienes buscaban un acuerdo para lograr que el Estado girara los fondos que ellos necesitaban imperiosamente para pagar los sueldos de los empleados públicos.

Cada vez más, los temas de la agenda versaban sobre los conflictos sociales que se venían produciendo y que se temía que continuaran multiplicándose. Según Rauss (2014) era la primera vez que la preocupación por la crisis social se manifestaba tan claramente en el gobierno, al punto de necesitar una reunión con el PJ para abordar estas cuestiones.

Para ese entonces, el Gobierno se vio obligado a trabajar sobre distintos frentes y uno de ellos fue el del sindicalismo. Se pretendía un acercamiento con sindicatos dispuestos a deponer armas, ilusión que nunca llegó a concretarse debido al contexto imperante. Entonces, con la Ministra de Trabajo como punta de lanza, el Gobierno buscó implementar una estrategia para desplazar del centro de la escena a las organizaciones sindicales y neutralizar las acciones de protesta.

El rol de Patricia Bullrich al frente de la cartera de Trabajo fue, desde el comienzo, de explícita confrontación respecto de las Centrales Obreras. Aprovechando un clima de opinión adverso, buscó deslegitimar las medidas de fuerza embistiendo contra las cúpulas sindicales, acusándolas de anteponer sus intereses personales a las necesidades del país. Por ejemplo, ante la convocatoria a un paro, por parte de la CGT Disidente, la Ministra amenazó con denunciar a los dirigentes ante la OIT, argumentando que el paro era una

iniciativa de las cúpulas, sin apoyo de las bases, que buscaba hacer un uso político de la protesta (*La Nación*, 8/6/2001).

En ocasión de la Cumbre de la OIT que se celebró en Ginebra en junio, la Ministra Bullrich presentó un proyecto con el fin de adecuar la norma que regulaba la actividad de los gremios a los principios de libertad sindical que desde hacía tiempo recomendaba la OIT. Ante la inminente posibilidad de recibir sanciones por parte del Organismo Internacional, el Gobierno conformó una comisión tripartita para avanzar en algunas modificaciones de la Ley de Asociaciones Sindicales (23.551). Ante la funcional aquiescencia de los líderes de la CGT (oficial y opositora), el líder de la CTA denunció que “los cambios en marcha eran solo un maquillaje para complacer a la OIT, pero dejando todo como estaba” (*Clarín*, 11/6/2001). En este punto la CGT (Oficial y Disidente) se mostró más cercana al Gobierno, pero se unió a la CTA en su teatral boicot a la Ministra, cuando decidieron no presenciar su discurso ante la Asamblea (*La Nación*, 15/6/2015).

Otro de los puntos de conflicto fue la puesta en vigencia de la Ley 25.250 de Reforma Laboral en relación con el tema de la ultraactividad. A principios de julio comenzó a ponerse en marcha el cronograma de reuniones de la Dirección de Negociaciones Colectivas del Ministerio de Trabajo, con los gremios y los empresarios, para actualizar los convenios colectivos que no se renovaban, en su mayoría, desde 1975. La estrategia de la CGT de Daer fue pedir que se convocara previamente al Consejo del Salario Mínimo y que se aumentara su piso, mientras que De Gennaro de la CTA propuso un llamado a consulta popular para que se dispusiera un seguro de desempleo para los jefes de familia. En tanto, la CGT de Moyano apoyó el pedido de aumento del salario mínimo, pero buscó diferenciarse al acusar de "inconstitucional" la ley 25.250 por haber sido aprobada por el Senado “con los sobornos que pagó el Gobierno” (*Clarín*, 3/7/2001). Se evidencia que, una vez más, los principales actores del movimiento obrero estaban dispuestos a cuestionar las iniciativas del gobierno que atentaban contra los intereses sectoriales. Cada uno, desde su lugar, rechazó la convocatoria para revisar los convenios y la negociación de paritarias, pero dejando cierto margen de maniobra.

Mientras tanto, los problemas económicos no cedían. Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares, las cifras del desempleo para mayo de 2001 alcanzaron el 16%, revelando la crítica suma de 2.2 millones de desocupados. Si bien el Gobierno mostraba señales de preocupación ante la caída del consumo que provocaba el desplome de los índices de ocupación, el Ministerio de Economía se negaba a disponer de más fondos para planes de empleo (*La Nación*, 28/6/2001). Ante los rumores sobre acciones de desestabilización que comenzaban a sonar con fuerza, el gobierno se vio entonces en la necesidad de dar señales para recuperar alguna cuota de confianza y se embarcó en el proyecto que aceleraría el desenlace final. Había llegado el momento de los sacrificios mayores. En cadena nacional, el presidente de la Rúa anunciaba en julio un plan de austeridad y de reforma del Estado que se llamó Ley de Déficit Cero. Este programa establecía que todas las erogaciones del estado, excepto el pago de intereses de la deuda, quedaban subordinados a la disponibilidad de recursos. Esto implicaba una nueva reducción de gastos a través del recorte de salarios de los empleados públicos y las jubilaciones.

Como era de esperar, a los pocos días de realizado el anuncio las voces de las organizaciones obreras comenzaron a resonar. En simultáneo, las tres centrales se expresaron en tonos diferentes pero mostraron una estrategia similar. Parecía que ante la adversidad las posiciones comenzaban a acercarse. Al principio, el común denominador fue la condena a los recortes, pero manteniendo una posición de cautela. Una vez más, nadie quería aparecer ante la opinión pública como un obstaculizador a los intentos del Gobierno de sortear la crisis, pero tampoco aparecer frente a los trabajadores como cómplices del ajuste. Proliferaban, entonces, los discursos convocando a medidas de fuerza, pero sin precisar acciones.

La opción de romper la tregua se presentó luego de la decisión del Gobierno de reforzar las atribuciones de Cavallo, en detrimento de figuras del propio partido y del envío al Parlamento para su aprobación del Programa de Ajuste. Al verse directamente afectados, los gremios estatales convocaron a una huelga y movilización a Plaza de Mayo, que contó

con una amplísima adhesión. Esto obligó a la CGT a salir de la posición de expectativa y pasar a la acción. Se decidió convocar a un paro para el 18 de julio, que marcó un punto de inflexión en esta última etapa. Si bien se analizará en detalle en el próximo capítulo, es importante señalar las connotaciones políticas de esta medida de fuerza. Después de la ruptura de la unidad de la CGT, que se había producido en marzo, las posibilidades de acciones conjuntas entre la línea oficial y la disidente parecían muy lejanas. Sin embargo, ante la embestida económica de la línea cavallista del Gobierno, ambos líderes decidieron convocar a un frente común de rechazo. Para ello se recurrió al tradicional recurso del paro por veinticuatro horas pero, esta vez, sin movilización, que además contó con la adhesión de los gremios de la CTA. La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. La Ministra de Trabajo criticó duramente la postura de los sindicalistas y los instó a bajarse sus sueldos en lugar de hacer un paro y donar una hora de su trabajo a los jubilados, sector más afectado por el ajuste (*La Nación*, 17/7/2001). Una vez más, la estrategia era desprestigiar a la dirigencia sindical con el objetivo de restarle impacto a la medida. Tanto Daer como Moyano salieron a responderle a Bullrich, abonando el escenario de confrontación con declaraciones de similar tono dirigidas al Presidente, a Cavallo y, por supuesto, a la Ministra.¹⁷

El ciclo de movilización que se inaugura con el paro del 18 de julio marcó un cambio cualitativo en el espectro de las acciones de resistencia contra el ajuste, porque dio inicio a una oleada de protestas con características particulares. Comenzó a articularse allí un movimiento que englobaba a múltiples actores, que iban desde sindicatos, organizaciones de desocupados, movimientos estudiantiles y la Federación Agraria, hasta algunos partidos políticos (Piva, 2013; Pucciarelli, 2014; Klachko, 2007).

A partir de aquí la movilización y la resistencia potenciarán a los desocupados como actor protagónico. Tomando como principal repertorio de acción colectiva a los piquetes,

¹⁷ Moyano le respondió a Bullrich que la idea de donar una hora de trabajo a los jubilados “era un disparate”, y señaló que el problema era que el gobierno estaba en manos de “un trastornado y un boludo”. Rodolfo Daer apuntó que “en la vida se puede ser liberal, neoliberal, estatista, socialista, pero bajar las jubilaciones es un acto de cretinismo”. Víctor De Gennaro informó que su sueldo era de 1.350 pesos y retó a Bullrich y a Cavallo a que revelaran el monto del propio y donaran la diferencia (*Página 12*, 18/7/2001).

diversos movimientos fueron paulatinamente ocupando el centro de la escena. Luego de tres años de recesión, la desocupación alcanzó niveles tales que llevó a la mayoría de los habitantes a vivir en condiciones de pobreza. El aumento del desempleo y la persistencia y profundización de las políticas que ayudaron a generarlo, contribuyeron a que proliferaran los focos de conflicto. Comenzó así a arraigarse la percepción de que, en ese contexto, ni los actores políticos tradicionales, ni los actores sindicales contaban con los recursos necesarios para generar alternativas viables para mitigar la crisis. Este clima fue propicio para el surgimiento de movimientos sociales diversos, algunos de los cuales comenzaron a interpelar al actor sindical. El sindicalismo como institución y su dirigencia tradicional fueron puestos en tela de juicio. Es que, a partir de la extensión de formas precarias de contratación y la falta de trabajo, las elites sindicales no pudieron utilizar sus recursos tradicionales de representación y se vieron impotentes a la hora de articular las demandas de esos sectores.

Se configuraba así un nuevo frente de resistencia social, cuya articulación, si bien incluía en su seno a diferentes gremios, buscaba trascender la lógica estrictamente sindical. El plan de lucha que se pone en marcha a partir del 24 de julio¹⁸ tenía un objetivo claro: organizar la resistencia civil contra el ajuste y esa lucha privilegiaba como espacio de acción la calle y los cortes de ruta. Desde el Gobierno se buscó deslegitimar las acciones de protesta, así como se venía haciendo sistemáticamente con las acciones convocadas por el sindicalismo. Una vez más, fue la ministra Bullrich quien cargó la retórica con asociaciones entre “protesta” y “violencia” y “movilización” con “delito” (Pucciarelli, 2014).

¹⁸ El 24 de julio se realizó la 1ª Asamblea Nacional de Organizaciones Populares, Territoriales y de Desocupados impulsada por la Federación Tierra y Vivienda de la CTA, el Movimiento de Desocupados de la CCC y otras organizaciones, en la que participaron más de 2 mil personas, en la Iglesia del Sagrado Corazón, en San Justo (Provincia de Buenos Aires). La Asamblea estableció un plan de lucha con cortes de ruta progresivos y escalonados en tres semanas en las 50 ciudades más importantes del país, exigiendo la derogación del decreto de ajuste fiscal, garantías de que los planes Trabajar no serían recortados, y la libertad y desprocesamiento de todos los detenidos sociales.

2.5 De las elecciones legislativas a la renuncia de de la Rúa

En el mes de octubre y en un clima creciente de agitación social se realizaron las elecciones legislativas nacionales para diputados y senadores y, en muchas provincias, también las elecciones distritales. Los resultados de la elección pusieron en evidencia la crisis de legitimidad que atravesaba el sistema político en su conjunto. La Alianza obtuvo un magro 16,9% de los votos y el PJ alcanzó el 26,6%. La derrota en las urnas fue un nuevo golpe para el debilitado gobierno, que perdió en esa oportunidad cerca de 5 millones de votos. Aunque su caudal electoral se vio disminuido, respecto de la elección de 1997, el peronismo fue el gran triunfador. Ganó la elección de senadores en 15 de los 24 distritos, retuvo la mayoría en la Cámara de Senadores y se convirtió en la primera fuerza en la Cámara de Diputados. En la provincia de Buenos Aires, el PJ triunfó rotundamente con la candidatura a senador de Eduardo Duhalde, cuya campaña se caracterizó por un discurso de clara diferenciación respecto de la política económica y social de la Alianza y del gobierno de Menem (Vilas, 2001). El liderazgo de Duhalde parecía consolidarse con vistas a las presidenciales y, en tal sentido, recibió el explícito apoyo de la CGT (*Clarín*, 17/10/2001).

Sin embargo, el elemento más distintivo de la elección fue el del voto en blanco, que alcanzó el 9,4%, y el voto impugnado, que alcanzó el 12,5%. Por su parte, las abstenciones rondaron el 24% (Novaro, 2010). En una primera aproximación, simplificada, se podría decir que el llamado “voto bronca” del 2001 pone en evidencia una crisis de legitimidad de la clase política y de las instituciones democráticas. Como si, a través del voto bronca, el ciudadano manifestara su desconfianza y falta de credibilidad en el sistema y expresara su convicción de que las elecciones “no sirven para nada”. Ahora bien, si logramos trascender esta primera visión podemos interpretar el voto bronca como la expresión de rechazo no a la política sino a una forma particular de política. Un alto porcentaje del electorado utilizó su voto como forma de expresión de su descontento, que si bien adquiere connotaciones diferentes según cada elector, se puede resumir en una clara impugnación de la gestión del Gobierno y del bloque hegemónico que representaba. Como sostiene Carlos Vilas (2001), “El ‘voto bronca’ da testimonio de la legitimación del sistema institucional incluso para

quienes propinaron una bofetada electoral a través de las múltiples y muy creativas manifestaciones de ese tipo de sufragio. El ausentismo sugiere, en principio, repudio al sistema electoral, descreimiento en su eficacia. El 'voto bronca' sugiere en cambio aceptación del sistema electoral, reconocimiento de un mínimo de eficacia: si no para escoger, sí para denunciar”.

Después de las elecciones, la delicada situación política del Gobierno se volvió insostenible. La crisis económica se hacía cada vez más profunda. La caída de la actividad económica llegó al 8,7% interanual en noviembre, las reservas de divisas cayeron en US\$9.600 millones (38,9% del total) en los meses de octubre y noviembre (datos del BCRA) y retornó el déficit fiscal por casi 700 millones de pesos en octubre (Salvia, 2014). Se inició así el último capítulo de una historia cuyo final ya estaba marcado.

Pocos días después de la elecciones se anunció la salida de Patricia Bullrich¹⁹ del Ministerio de Trabajo. Varios medios de prensa interpretaron esta decisión como un gesto para limar asperezas con los gremios, que desde el inicio habían estado en pie de guerra con la Ministra (*Clarín*, 29/10/2001). Lo que no podía vislumbrar el Presidente era que, a esas alturas, la designación de un nuevo Ministro ya nada podía cambiar. El nuevo Ministro, José Dumon, se cuidó de mostrarse dispuesto al diálogo tanto con la CGT (oficial y opositora) como con la CTA. Para entonces el bloque del PJ daba señales de unidad ante la crítica situación de las provincias en relación con el pago de salarios. En ese intento, trataron también de acercar posiciones con el sindicalismo y mantuvieron reuniones con los dirigentes de la CGT y de la CTA para disuadirlos de focalizar sus acciones de protesta contra el Gobierno Nacional y no contra las provincias (*La Nación*, 8/11/2001).

Ante la grave situación política que atravesaba el Gobierno, Alfonsín y Duhalde realizaron un intento de conformar una coalición de “unidad nacional” pero de la Rúa optó por encerrarse en el círculo más cercano a Cavallo. Las presiones para devaluar resonaban cada vez con más fuerza y el Presidente prefirió refugiarse en el grupo que decía tener el

¹⁹ La renuncia a la cartera de Trabajo no significó la salida de Bullrich del gabinete. El presidente de la Rúa la designó para ocupar el flamante Ministerio de Seguridad Social y Agencia Social, cuya función principal consistiría en el manejo de los planes sociales.

antídoto. En el mes de noviembre, ante el incumplimiento de las metas acordadas, el FMI decidió suspender el crédito a la Argentina. En este contexto la Argentina realizó un último intento por mantener el régimen de convertibilidad lanzando una reestructuración ordenada de su deuda que incluía una quita moderada. Pero ante la salida masiva de depósitos del sistema financiero y el descenso de las reservas, el gobierno instauró una restricción al retiro de depósitos, vulgarmente conocida como *corralito*, para evitar la quiebra del sistema bancario (Nemiña, 2012). Ante una medida que impactaba directamente sobre la libre disponibilidad de los salarios, el sindicalismo en pleno decidió convocar a un paro con movilización al que adhirieron las dos CGT y la CTA. Al mismo tiempo que el sindicalismo recurría a sus armas tradicionales y, a partir de ellas, buscaba doblegar las decisiones del Gobierno, se aceleraba un proceso de movilización social que desde hacía tiempo se expresaba. Pocos días después de anunciarse el corralito se asistió a la explosión de un conjunto de piquetes y manifestaciones protagonizadas por grupos de desocupados asentados, sobre todo, en el conurbano bonaerense, pero también de sectores de la clase media directamente afectados por las nuevas medidas.

Además, como en 1989 y 1990, se asistió a los saqueos de comercios y supermercados que el presidente de la Rúa intentó detener decretando el estado de sitio. En ese contexto estalló una rebelión de grupos que asistieron a Plaza de Mayo los días 19 y 20 de diciembre y fueron reprimidos por el Gobierno, con un saldo de 39 muertos. Ante la debacle de su Gobierno y ante la imposibilidad de contener el descontento social, de la Rúa presentó su renuncia (Novaro, 2010). Se iniciaba así la etapa de cesación de pagos de la deuda pública, la derogación de la Convertibilidad y la devaluación que llevarían a un proceso de violento reacomodamiento de todos los actores: los políticos, los económicos y, también, los sindicales.

Capítulo 3

Conflictividad y protesta laboral, desde la asunción de de la Rúa hasta diciembre de 2001

Toda vez que se hace referencia al Gobierno de la Alianza aparece inmediatamente la imagen del conflicto y las protestas sociales. A nadie se le escapa que, a partir del año 1999, Argentina ingresó en una etapa de auge de las luchas sociales. Diversos analistas²⁰ han realizados grandes aportes al identificar los ciclos que a lo largo de la historia marcaron los momentos de expansión y retracción de la protesta. La etapa que se inicia con el Gobierno de la Alianza pone en evidencia un momento en el cual la protesta social es producto de fenómenos convergentes que le otorgan características especiales. Según Scribano y Schuster (2001) el ciclo de protesta que vivió la Argentina a partir de la llegada de de la Rúa al poder fue el más importante desde 1983, no solo por la cantidad de protestas, sino por un conjunto de novedades que permiten hablar de una nueva etapa de las protestas en el país. Esto es así porque, por primera vez, la protesta se expande de manera considerable a nivel territorial y porque involucra a una cantidad de sujetos que no habían participado de ciclos anteriores, como por ejemplo los sectores ligados a la desocupación, el trabajo precario, las clases medias afectadas por el ajuste, etcétera. Ahora bien, en ese contexto se produce también la vuelta del sindicalismo como actor protagónico de la protesta. Ese protagonismo se entremezcla con una red que involucra tanto a los desocupados como a los empleados públicos, los docentes y los trabajadores de empresas privatizadas. Trataremos de desentrañar aquí las particularidades de la protesta laboral, teniendo en cuenta su relación con los actores que tuvieron un rol relevante en ese proceso.

Como se ha señalado repetidamente, el enfoque que se propone aquí es cualitativo. Sin embargo, puede ser útil comenzar con algunas referencias a la cantidad de paros generales organizados por las Centrales Sindicales. Durante el Gobierno de la Alianza

²⁰ Iñigo Carrera, N. (2002) y Piva (2009).

(1999-2001) se realizaron un total de 9 huelgas generales. Si lo comparamos con los dos gobiernos precedentes vemos que este número es sumamente importante. Durante el Gobierno de Alfonsín (1983-1989) hubo 13 paros generales, es decir, poco más de dos por año, y durante el Gobierno de Menem (1989-1999), hubo 9 huelgas generales, es decir, poco menos de 1 por año (Iñigo Carrera, 2002). Que la Alianza haya tenido que enfrentar 4,5 paros por año pone en evidencia que así como la protesta social estaba en ascenso, también lo estaba la protesta laboral.

Identificaremos, a lo largo del período estudiado, diferentes momentos que permitirán organizar mejor el análisis.

3.1 De Corrientes a la crisis en el Senado

Algunos analistas se atrevieron a identificar en el conflicto de la provincia de Corrientes la prefiguración de la crisis del 2001. Más allá de ver presagios en los acontecimientos, se puede tomar este proceso de movilización para analizar elementos distintivos de una etapa particular. Cuando de la Rúa asumió el 10 de diciembre, el conflicto en Corrientes contaba con larga data. Desde los 90 la provincia había sufrido una profunda crisis institucional, marcada por la alternancia entre intervenciones federales y administraciones fuertemente cuestionadas. A esto se le sumó un profundo déficit fiscal que terminó generando la virtual bancarrota del gobierno que dejó de pagar los sueldos de los empleados estatales, los cuales conformaban un alto porcentaje de los trabajadores ocupados en la provincia. Los repertorios utilizados para llevar adelante la protesta se combinaron en una compleja trama de relaciones. Se desplegaron estrategias tradicionales como la huelga (especialmente de docentes, trabajadores de la salud y estatales) con los cortes de puentes y rutas, la toma de la plaza que fue bautizada como “plaza del aguante”, la instalación de carpas en pleno centro de la ciudad y el despliegue de una “chamameceada” para atraer la atención de los medios de comunicación. Los participantes eran muy heterogéneos. Se observaba una fuerte presencia de los gremios docentes, estatales y de la salud, pero también grupos de personas que se sumaban de manera

menos orgánica, como estudiantes, jubilados y desocupados. Luego de varios meses de corte en el Puente General Belgrano y con una situación cada vez más tensa, el Gobierno decide intervenir con una acción represiva llevada adelante el 18 de diciembre que terminó con la vida de dos manifestantes (*La Nación*, 18/12/1999). El accionar de las Centrales Obreras se mostró impotente frente a los hechos y terminó limitándose al carácter declarativo. La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) anunció un paro nacional en solidaridad con los trabajadores de Corrientes y su titular, Víctor de Gennaro, reclamó "el fin de la represión para los empleados de esa provincia" y la liberación de los manifestantes detenidos durante los enfrentamientos. Por su parte, la CGT reclamó "la inmediata intervención" de Corrientes al "repudiar la barbarie de la represión" y anunció "el estado de alerta y movilización" (*La Nación*, 18/12/1999). Lo anterior pone en evidencia de qué manera las estructuras de representación política experimentaban transformaciones considerables al tiempo que obligaban a ensayar nuevos mecanismos para contener una situación que amenazaba con extenderse a otras provincias. El caso de Corrientes es la muestra de una situación que se repetirá una y otra vez en el período de análisis: el entrecruzamiento entre un conjunto de protestas laborales con protestas sociales, donde los mecanismos para la construcción de la identidad eran múltiples y difusos. Si por momentos se imponían los vínculos de solidaridad, en otros casos aparecían intereses contrapuestos y las identidades entraban en colisión. Ejemplo de ello puede ser la entrada en escena de un grupo de camioneros que, ante la imposibilidad de utilizar el puente, decidió cortar el tránsito de la ruta nacional 12, con el argumento de que si ellos no podían cruzar el puente tampoco dejarían a otros salir de la capital. El grupo de camioneros reproduce un repertorio bien conocido, pero al mismo tiempo pone en juego su propia identidad al interpelar a un actor indefinido para dar solución a su reclamo de libre circulación. La protesta de los camioneros no es estrictamente laboral, ya que se produce en un círculo de impotencia donde sus demandas se elevan a un actor que no puede darles respuesta. La búsqueda de solución por parte del Gobierno se articuló a través del despliegue de la Gendarmería y la rápida decisión de intervención federal de los tres poderes provinciales. Mientras tanto, en

la Ciudad de Buenos Aires, unos 40 manifestantes de partidos de izquierda (Partido Comunista, Movimiento Socialista de Trabajadores e Izquierda Unida) realizaron un escrache ante la Casa de Corrientes para solidarizarse con los trabajadores correntinos y repudiar la represión de la Gendarmería. En síntesis, el caso de Corrientes sirve para preguntarse sobre una red de acciones de protestas que involucra a actores diversos como sindicatos, movimientos sociales y partidos políticos, cada uno de ellos produciendo y reproduciendo repertorios propios y ajenos y articulando demandas múltiples y hasta contradictorias, pero que describen un proceso de acción colectiva que se expresa como síntoma de una conflictividad latente.

La primera convocatoria a una huelga general se hizo en el contexto de los debates para la sanción de la Ley de Reforma Laboral. La CGT atravesaba entonces una etapa de conciliación en su seno y decidió recurrir a su repertorio más tradicional y convocó para el 24 de febrero a un paro general con movilización, el mismo día que se había fijado el debate en la Cámara Baja. Se sostiene que la puesta en marcha de la Reforma Laboral por parte del Gobierno contribuyó a exacerbar la protesta sindical. Este primer paro general fue concebido como un paro contra el gobierno y su contenido estaba explícitamente dirigido contra la sanción de una ley que se interpretaba como un intento de quitarles poder a las organizaciones sindicales y permitir el avance de la flexibilización y precarización laboral. Si bien con matices diferentes, la convocatoria fue unificada y contó con el apoyo de la línea de Daer y la de Moyano. Sin embargo, con el devenir de los acontecimientos los caminos se irían separando hasta llegar a la ruptura.

En declaraciones a la prensa, Moyano afirmó que “en la movilización a Plaza de Mayo se plebiscitará el proyecto de reforma laboral” (*La Nación*, 20/2/2000). Esta estrategia retórica pone en evidencia el intento de otorgar a la movilización un carácter inclusivo, ya que apela a la doble lógica de ciudadano (en el sentido democrático) y trabajador como agente legitimador o, como en este caso, deslegitimador de una política. El intento de plebiscitar la reforma a través de la convocatoria a un paro general se encuadra en la búsqueda de desacreditar los dichos de los funcionarios que para esas fechas citaban de

manera recurrente encuestas que posicionaban a los sindicalistas como los actores con peor imagen para la ciudadanía. En este sentido, es interesante analizar el editorial del diario *La Nación*²¹ que se publicó dos días antes del paro y que se titulaba “El paro general, un arma anacrónica”. Además de calificar al paro como una reliquia de la vieja guardia sindical y como “acción irracional poco acorde con los parámetros del mundo evolucionado”, se acusaba a la dirigencia sindical de utilizar el paro con fines políticos. Sostiene que “(el paro general) está inspirado en motivaciones netamente políticas —no gremiales— y destinado a torcerles el brazo a los miembros del Poder Legislativo, legítimos representantes de la voluntad popular, con objeto de obligarlos a legislar de determinada manera y constituye un alzamiento contra la Constitución y un intento de reemplazar a las instituciones de la República”. Este editorial pone en evidencia la centralidad del tema de la huelga general, como repertorio característico de la protesta laboral. Más allá del evidente fin de deslegitimar la medida y a sus convocantes, podemos desentrañar en estas palabras una particular lógica de relacionamiento entre lo que se plantea como lo político y lo gremial. Se pone en cuestión el fin político de la demanda, implicando que “político” significa “al servicio de los intereses personales de los dirigentes”. Pero al mismo tiempo, se apela a la representación política de los miembros del Parlamento como valor máximo de la Democracia y de las instituciones. Se busca desacreditar tanto el medio como el fin, la forma y el contenido, en una arena estrictamente política, donde se asume que los actores interpelados, en este caso los trabajadores, quedan relegados al segundo plano, apareciendo como meros convidados de piedra en un conflicto que pareciera dirimirse en un terreno que les es ajeno. Sin embargo, la movilización que irá cobrando fuerza a lo largo de los meses posteriores pondrá en evidencia cuán central será el rol de las acciones de protesta en el devenir de los acontecimientos.

La estrategia de la dirigencia oficial de la CGT fue desde el principio combinar anuncios combativos pero manteniendo la negociación. Así fue que la línea de Daer terminó levantando el paro general una vez que llegó a un acuerdo con el Gobierno. Esto trajo como

²¹ Extraído de <http://www.lanacion.com.ar/6303-el-paro-general-un-arma-anacronica>

consecuencia la ruptura con la línea de Moyano, quien mantuvo su posición respecto del paro, abriendo un doble frente de conflicto: contra el Gobierno y contra la dirigencia de la CGT Oficial.

Por su parte la CTA había decidido adherir al paro general pero desplegando consignas y repertorios diferenciados. Desde el inicio, la CTA manifestó su voluntad de adherirse al paro pero a través de una movilización al Congreso y no a la Plaza de Mayo como proponía la CGT. Se buscó apelar al simbolismo de “un abrazo al Congreso” y esto es importante, ya que aparece en sintonía con las identidades y repertorios propios de la Central. En declaraciones a la prensa, De Gennaro sostuvo que la CTA marchaba al Congreso porque “es el lugar del debate” y para que los diputados “sientan la opinión de los trabajadores” (*Clarín*, 21/02/2000).

Las Centrales Sindicales no fueron las únicas que organizaron protestas contra la Reforma Laboral. Diversos partidos de izquierda y movimientos estudiantiles expresaron su oposición en dos movilizaciones que fueron reprimidas por la policía y que motivó una tercera contra la represión policial (Iñigo Carrera, 2002). Si bien esto no tiene que ver estrictamente con el tema de esta investigación, es importante señalarlo para poner en contexto las acciones propias de las Centrales Sindicales en relación con el espectro de protestas que se organizaban en relación con la Reforma Laboral.

La impotencia del Gobierno para contener las protestas no solo se hizo evidente en el caso de los partidos de izquierda. En el mes de abril, el Sindicato de Camioneros organizó una movilización y una olla popular con el objetivo de impedir en el Congreso el tratamiento de la Ley. Se observa aquí cómo Moyano echaba mano de su capacidad de movilizar a su gremio, con fines al servicio de su conducción en la novel Central Disidente. Se produjo una dura represión policial contra los manifestantes y la jornada terminó con la sanción de la Ley en Senadores, allanando el camino para que se convirtiera en ley por Diputados. En ese contexto, la CGT Disidente decidió convocar a su primer paro nacional²²

²² Se hace referencia al primer paro convocado por la CGT Disidente, luego de su ruptura con la cúpula de la CGT Oficial.

contra el Gobierno. El paro realizado el 5 de mayo contó con el apoyo de la CTA, pero la CGT Oficial decidió no participar. Si bien se mantuvieron las consignas contra la reforma, el paro tuvo un cariz diferente al anterior. Para la CTA, las reivindicaciones se centraron, sobre todo, en cuestiones propias de la situación de los trabajadores. Se pedía la convocatoria al Consejo del Salario (para fijar un aumento del salario mínimo, vital y móvil), la recomposición de los salarios básicos de los convenios colectivos, la eliminación total del IVA a los bienes que integran la canasta básica, el otorgamiento de un subsidio para un millón de jefes de hogar, el aumento de las jubilaciones mínimas y una asignación universal por hijo de \$60. La CGT Disidente apeló al repertorio del paro sin movilización, mientras que la CTA buscó diferenciarse convocando a la movilización. Proliferaron los cortes de rutas en diferentes partes del país y se registraron algunos intentos de saqueos a supermercados. Además hubo diversas manifestaciones, actos, escraches a funcionarios y ollas populares. Algunas de estas acciones terminaron con corridas y choques con la policía. Esta diversidad de repertorios se explica por la presencia de una multiplicidad de organizaciones que apoyaron explícitamente la medida y que aportaron sus propias lógicas de acción; entre las más importantes aparecían diversos partidos de izquierda, el Movimiento de Agrupaciones Peronistas y el Movimiento Nacional de la Tercera Sección Electoral (Lanús) (Iñigo Carrera, 2002).

Totalmente autonomizada de la cúpula de la CGT, la figura de Moyano fue acumulando cada vez más protagonismo. En el marco de su "plan de lucha" propuso una acción que vale la pena ser analizada. Se organizó una movilización en repudio a la Misión del FMI que por esos días tenía planeado reunirse con el Gobierno. En esa oportunidad la convocatoria revistió ciertas particularidades. En primer lugar, se presentaba como una acción multisectorial e invitaba a participar "a todos los sectores de la sociedad y a organizaciones ecologistas, sin identificaciones político-partidarias o sindicales". En segundo lugar, hacía un llamamiento a asistir a la Plaza de Mayo sin identificaciones, "solo con banderas argentinas". El acto que se realizó el 31 de mayo estuvo cargado de

contenido. Contó con una asistencia muy heterogénea²³ que abarcaba sindicalistas, dirigentes y militantes del PJ, dirigentes y militantes de diversos partidos del oficialismo y la oposición, federaciones universitarias y organismos de Derechos Humanos. Cabe preguntarse: ¿por qué una movilización convocada por una Central Sindical, sumamente desprestigiada y que días antes había contado con un apoyo relativo en su paro general, podía aglutinar una importante cantidad de personas con características tan diferentes? Es innegable que la apelación a oponerse al FMI, identificado como uno de los responsables de todos los males, fue clave en ese sentido. ¿Hasta qué punto la Central Sindical aparecía entonces como una alternativa para aglutinar el descontento de sectores tan diversos? Podría decirse que la intención de Moyano era buscar la conformación de un frente social que bajo su liderazgo se presentara como expresión política de la oposición, poniendo en evidencia un espacio que dejaron vacío los dirigentes partidarios. Se sostiene que, a pesar de ofrecer elementos interesantes para el análisis de los nuevos repertorios de protesta, la movilización contra el FMI fue solo un episodio en el cual la voluntad de expresar el malestar primó por un efímero momento, dando paso luego a las contradicciones estructurales y a los intereses sectoriales. El pedido de Moyano de asistir a la movilización solo con banderas argentinas pone en evidencia una voluntad de enviar un mensaje nuevo a un interlocutor que se asume diferente. Sin embargo, a la hora de sentar posiciones, los discursos no pudieron desprenderse de los mecanismos aprendidos y apareció lo nuevo mezclado con lo propio. Cuando Moyano afirma "vamos a hacer cacerolazos, apagones, vamos a pegar donde les duele, vamos a organizar con las PyMEs, con el agro" demuestra que busca trascender la vieja retórica de defensa de los intereses corporativos e ir más allá, incluyendo nuevas formas de acción al redefinir a los viejos enemigos como aliados

²³ La edición del diario *Clarín* del día siguiente afirmaba: "La heterogénea multitud la conformaban militantes del peronismo bonaerense, con Chiche Duhalde y varios intendentes del conurbano a la cabeza; la CTA de Víctor De Gennaro; diputados cavallistas y de la Alianza, como Elisa Carrió, Alfredo Bravo y Alicia Castro; partidos de izquierda; la FUA, con los universitarios radicales de Franja Morada incluidos; organismos de derechos humanos; y mucha gente "suelta", empleados públicos, bancarios y oficinistas de saco y corbata." En el acto estuvieron presentes también hombres como Aldo Rico y Luis Patti, Hebe de Bonafini, Moisés Ikonicoff, Fernando Galmarini y Carlos "el Perro" Santillán. Basta mencionar algunos para observar lo amplio del espectro de los participantes.

potenciales. Pero también afirma: "vamos a llamar a una desobediencia fiscal para que el esfuerzo de los argentinos no se lo lleve la deuda externa" y convoca a un nuevo paro general, a poco más de un mes del anterior.

Ese paro general se realizó el 9 de junio de 2000 y contó con la adhesión de las dos CGT y de la CTA, pero cada una de ellas buscó presentar acciones y objetivos sutilmente diferenciados. Mientras la CGT Oficial convocó a una huelga general sin movilizaciones ni cortes, la CGT Disidente convocó al paro con movilización y la CTA propuso incluir al paro general dentro de un plan de lucha que abarcaba además movilizaciones, cortes de ruta, recolección de firmas y marchas a lo largo del país. Las consignas que se presentaban eran sobre todo contra el ajuste, pero también contra la desregulación de las Obras Sociales, consigna especialmente instalada desde la CGT Oficial. El paro contó con un fuerte apoyo de los gremios de docentes, estatales y transporte y se observaron a lo largo de todo el país manifestaciones, cortes de rutas y algunos disturbios, como en el caso de la provincia de Neuquén. Luego del paro, ambas CGT, Oficial y Disidente, buscaron bajar el tono de confrontación y manifestaron su voluntad de participar del diálogo social que por esos días intentaba convocar el Gobierno e hicieron un estratégico llamamiento a la OIT para que supervisara el proceso.

Para el mes de julio, desde la CGT Disidente, y con apoyo de la CGT Oficial, se convocó a una movilización sin paro de actividades al Congreso "en contra de la deuda externa". Es interesante hacer algunas reflexiones al respecto ya que en esta ocasión la Central recurrió a un repertorio tradicional para sostener un reclamo de índole bastante novedosa. El reclamo buscaba lograr la conformación de una comisión bicameral en el Congreso, que investigara la situación del endeudamiento externo argentino, bajo el argumento de que parte de la deuda era ilegítima y de que el Gobierno intentaba pagarla "con la sangre, el sufrimiento y la vida de los argentinos" (*Clarín*, 19/7/2000). En pos de este objetivo se comprometió la acción de los diputados de extracción sindical Alicia Castro (Alianza) y Saúl Ubaldini (PJ), quienes iban a ser los encargados de hacer la solicitud correspondiente en el Parlamento. Se observa cómo al mecanismo formal se le suma la

acción de movilización con una retórica que trasciende lo estrictamente laboral. Esto deja a las claras la intención de lograr que los reclamos sindicales logren una mayor integración dentro del espectro de la protesta evitando el tan indeseado aislamiento.

Por su parte, la CTA desplegó a partir del 26 de julio una estrategia que puso en evidencia su vocación de incorporar repertorios novedosos al organizar la llamada “Marcha Grande por el Trabajo”. En esa oportunidad organizó una caminata que salió de Rosario y que, luego de 14 días ininterrumpidos, llegó a Buenos Aires para reclamar la convocatoria a una consulta popular con el fin de lograr un seguro de desempleo de 380 pesos y una asignación universal de 60 pesos para los hijos menores de 18 años. Durante su recorrido logró juntar 400.000 firmas, por lo que demostró que la centralidad de la acción estaba puesta en el trabajo. Se interpeló al Gobierno como responsable de la agudización de la desocupación pero, al mismo tiempo, se buscó crear conciencia acerca de que el desempleo no era solo un problema de los desempleados, sino de toda la sociedad, en sintonía con la búsqueda de la CGT de que los reclamos sindicales no terminaran quedando aislados del conjunto de la sociedad. La CTA desplegó un repertorio novedoso, como la caminata de dirigentes gremiales y la recolección de firmas, pero apeló también a las estrategias aprendidas para conseguir el impacto necesario. Tal es así que, para el día del cierre, los docentes de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y los trabajadores estatales de ATE realizaron una huelga por 24 horas en apoyo a la Marcha Grande, contribuyendo a poblar el acto junto con un grupo de diputados nacionales de la Alianza UCR-Frepaso, Madres de Plaza de Mayo, una delegación de la CGT Disidente, la CCC, la Mesa Coordinadora de Organizaciones de Jubilados y Pensionados y partidos de izquierda, entre otros. La acción de la CTA no se limitó a la protesta, sino que incluyó una propuesta para el financiamiento del seguro de desempleo y la asignación universal por hijo. Plagado de información y datos económicos circuló un documento²⁴ en el cual había trabajado un grupo de técnicos de la Central, con

²⁴ Según el diario *Página 12* del 9 de agosto de 2000 la CTA proponía financiar los seguros con 9700 millones de pesos (“el 10 por ciento de lo que gasta el Estado”, según dijo Víctor De Gennaro) a

verdaderas propuestas para lograr los recursos necesarios para financiar la iniciativa. En este aspecto la CTA marcaba una diferencia respecto de sus colegas de la CGT, cuyos reclamos aparecían más como una expresión de deseos a la que el gobierno sistemáticamente tildaba de “pedidos irresponsables” que desconocían la realidad económica. De esta forma, la CTA no solo elevaba una demanda, sino que proponía una manera de satisfacer esas demandas.

3.2 De la búsqueda de alcanzar un pacto social al aumento de la confrontación

Mientras tanto, y desde comienzos del mes de agosto, comenzó el proceso de escalada de la crisis por el tema de los sobornos en el Senado. En ese contexto, se lanzó desde el Gobierno una iniciativa de acercamiento a las Centrales para reabrir el diálogo social que fracasó al poco tiempo de comenzar. El 6 de septiembre la CGT Disidente organizó una movilización a Plaza de Mayo para reclamar por la anulación de la Ley de Reforma Laboral y contra la "inconstitucionalidad de la rebaja salarial" a los empleados públicos (*La Nación*, 6/9/2000).

Durante septiembre y octubre, la CGT Disidente y la CTA convocaron a diferentes movilizaciones cuyos ejes fueron los reclamos contra la reducción del 12% a empleados de diferentes provincias²⁵ y para lograr el pago de los sueldos adeudados a los trabajadores de la provincia de Jujuy. Por parte de la CGT Disidente, los repertorios utilizados fueron la movilización y, en algunos casos, el paro sectorial, mientras que la CTA recurrió también a la recolección de firmas para elaborar petitorios, caminatas y tomas de edificios públicos como ocurrió en Jujuy con la ocupación del edificio del Consejo de Educación.

través de 500 millones de pesos, que se obtendrían al dejar de subsidiar los peajes, los ferrocarriles y los operadores fluviales de las empresas privatizadas; 1500 millones, restituyendo los aportes patronales a los bancos, hipermercados y empresas privatizadas; 5700 millones, eliminando exenciones en los impuestos a las Ganancias; 1000 millones, gravando los consumos no esenciales; 1000 millones, reasignando recursos destinados a la implementación de políticas sociales.

²⁵ Neuquén, Córdoba, San Juan, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Santa Cruz, Corrientes, Misiones, Mendoza y Río Negro.

El clima de tensión fue en aumento y tuvo un nuevo hito en el mes de noviembre cuando se produjo la muerte del trabajador Aníbal Verón durante una intervención policial para desalojar un piquete en la ciudad de Tartagal. Estos hechos desembocaron en la convocatoria a un nuevo paro general de 36 horas para los días 23 y 24 de noviembre al cual adhirieron la CGT Disidente y la CTA. La CGT Oficial se adhirió al paro solo para el día 24 y convocó a una protesta y movilización para el 19 de diciembre en contra de la iniciativa de Reforma Previsional que buscaba, entre otras cosas, eliminar la Prestación Básica Universal y elevar la edad jubilatoria de 60 a 65 años de las mujeres. El repertorio utilizado fue el de una marcha de diferentes gremios que recorrió la Avenida De Mayo (empleados de comercio, de alimentación, de sanidad, telefónicos, gastronómicos, etcétera) y que culminó con un acto en la Plaza de Mayo.

Este paro nacional fue el cuarto que se organizó durante el Gobierno de de la Rúa y fue convocado como "paro activo", lo cual reviste sus particularidades. La noción de paro activo no es estrictamente novedosa, pero es importante analizarla en función de su contexto. Dado que se trataba de un paro prolongado, los organizadores entendieron que la mejor estrategia era convocar a un cese de actividades de los gremios pero con actos, marchas y movilizaciones. Se buscaba dar la imagen de compromiso con la acción y refutar a las voces que justificaban la adhesión a paros anteriores a la falta de interés de los trabajadores. Se buscó estrechar vínculos con otras organizaciones, como la Corriente Clasista y Combativa (CCC, de Carlos "El Perro" Santillán), la Federación Agraria, las Asociaciones de Pequeñas y Medianas Empresas (Apymes), entidades de derechos humanos y legisladores. Dentro de las acciones previstas se incluyó una convocatoria para realizar "apagones y cacerolazos", que paradójicamente constituyeron una de las formas de protesta de la Alianza, antes de llegar al poder, contra el gobierno de Carlos Menem.

El paro reprodujo las mismas consignas y los mismos repertorios de los paros anteriores y, como era habitual, luego de la acción de fuerza se produjeron los intentos de diálogo. En este caso, la novedad reviste en que, luego de la llegada de Patricia Bullrich al Ministerio de Trabajo, las Centrales Sindicales exigieron al Gobierno otro interlocutor para

poder avanzar en las negociaciones. Además, a partir de ese momento comenzó a observarse una clara disputa entre Daer y Moyano para erigirse como el verdadero artífice e intérprete de la protesta contra el Gobierno.

En el marco de las celebraciones navideñas, la CGT Disidente llevó adelante una acción que podría ser calificada como una protesta novedosa. La iniciativa, que fue llamada "Navidad Solidaria", trataba de concentrar en la Plaza de Mayo a "todos quienes no tengan un pan para comer en las fiestas" (*La Nación*, 23/12/2000).

El año 2001 comenzó para el sindicalismo con una fuerte actividad. Si bien cada una de las Centrales desplegó sus propias estrategias, existió un común denominador: combinar las medidas de fuerza con iniciativas para lograr una fuerte adhesión de la ciudadanía. La CTA continuó con el proyecto de Consulta Popular²⁶ cuyo objetivo era otorgar a los votantes un recurso para manifestarse en contra de ciertas medidas adoptadas por el Gobierno o bien en aquellos casos en que no se cumpliera con las promesas realizadas en campaña. La CGT Disidente también recurrió a la iniciativa ciudadana al presentar un proyecto propio de reforma laboral con el aval de un millón de firmas, mientras la CGT Oficial se abocó a la recolección de firmas para presentar un proyecto al Congreso para que convirtiera en ley un subsidio de 500 pesos para los desocupados y 500 pesos como piso para el salario mínimo, vital y móvil. Estas iniciativas pueden interpretarse como una búsqueda por parte del sindicalismo de revestirse de institucionalidad, pero sin por ello abandonar las prácticas habituales. Un nuevo paro general con movilización fue convocado finalmente para el 20 de marzo por la CGT Disidente y la CTA luego de que el flamante ministro de Economía Ricardo López Murphy anunciara un nuevo plan de ajuste. Ni la renuncia del propio Ministro los disuadió para la suspensión del paro sino que, por el contrario, exacerbó la movilización y las protestas. Por su parte la CGT Oficial prefirió no adherir a la medida y mantenerse expectante mientras asumía Domingo Cavallo en la cartera de Economía y prometía anular los ajustes de su predecesor.

²⁶ La iniciativa buscaba que se pudiera someter la aprobación de un proyecto a la opinión de la ciudadanía. Para los casos en que la consulta fuera vinculante y recibiera el voto afirmativo de los votantes, se convertiría en ley y su promulgación sería inmediata.

Los primeros días de abril estuvieron marcados por la confluencia de acciones entre las dos CGT y la CTA, esta vez en protesta contra el ALCA. Desde el 5 de abril se reunieron en Buenos Aires los ministros de economía del continente para definir el texto del acuerdo sobre el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). En esa oportunidad se realizaron diferentes protestas en repudio de la reunión. Entre ellas se llevó a cabo una concentración en Plaza de Mayo organizada por la CGT Disidente, que contó con la presencia de referentes sindicales de Brasil, Paraguay y Uruguay y un conjunto de movilizaciones en todo el país que fueron organizadas por el Comité de apoyo contra el ALCA, del cual formaban parte la CTA y organismos de derechos humanos, partidos de izquierda, representantes de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS), que realizaron un acto frente al Congreso de la Nación y una marcha y escrache frente al Hotel Sheraton donde se desarrollaba el IV Foro Empresarial para las Américas.

3.3 De Cavallo al paro general del 13 de diciembre de 2001

Una nueva medida de la CGT Disidente se realizó el día 31 de mayo. En esa oportunidad se convocó a una movilización a la Plaza de Mayo en la cual Hugo Moyano instó a realizar un boicot contra los capitales extranjeros, especialmente los españoles que se sindicaban como responsables de la crisis de Aerolíneas Argentinas. Con un discurso altamente confrontativo, Moyano dejó atrás la etapa de diálogo y moderación, actitud que puede observarse en el llamamiento a realizar “un cabildo abierto, como el que organizó el peronismo para echar a López Rega, para echar a este otro brujo que nos ha endeudado y empobrecido” (*Clarín*, 1/6/2001). A la movilización le siguió una nueva huelga general el día 8 de junio que fue convocada por la CGT Disidente y que recibió la adhesión de la CTA. La CGT Oficial optó por buscar el diálogo con el Gobierno y decidió no adherir a la medida. A pesar de no haberse convocado a la movilización se realizaron ollas populares, cortes de ruta y escraches.

El 19 de julio se realizó una nueva huelga general por 24 horas, sin movilización, convocada por la CGT Oficial, la CGT Disidente y la CTA, después de que el gobierno

ratificara la rebaja salarial de empleados públicos y jubilados, y el 8 de agosto se declaró otra huelga general convocada solo por la CTA, de la cual participaron sobre todo empleados estatales de ATE y docentes de CTERA (Iñigo Carrera, 2002). Otro acto fue convocado por las dos CGT para el 29 de agosto y comenzó a reinar a partir de allí un clima de conciliación entre Daer y Moyano con el fin de unificar fuerzas frente al duro contexto que impuso la sanción de la Ley de Déficit Cero. Paralelamente a las acciones de las Centrales, se desenvolvían numerosas acciones de protesta social protagonizadas por grupos de desocupados. Como ya se ha señalado en el capítulo 2, proliferaban los cortes de rutas y las ollas populares protagonizadas por desocupados de diferentes puntos del país, pequeños productores, militantes de partidos de izquierda y organizaciones sindicales de base. Este tipo de acciones contaban con el explícito apoyo de la CTA que buscaba articular a los gremios no representados por las dos CGT. El 21 de septiembre culminó con un acto en Plaza de Mayo, la “Marcha contra la pobreza” que, organizada por la CTA, recorrió diferentes puntos del país para reclamar un seguro de desempleo.

El 1 de diciembre del 2001 el ministro de Economía Domingo Cavallo anunció un paquete de medidas cuyo eje fue el establecimiento del corralito (por el cual el gobierno limitaba el uso libre de los depósitos bancarios, incluso de los sueldos, poniendo como límite de extracción \$250 por semana). Esto desencadenó la profundización de las luchas contra el Gobierno.

El 12 de diciembre la CAME (Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias) resolvió llevar a cabo un apagón de protesta, bocinazos y cacerolazos. Esta vez los pequeños y medianos comerciantes, junto a asociaciones civiles de consumidores, desplegaron en todo el país acciones para poner en evidencia el perjuicio que las recientes medidas económicas les ocasionaban. Durante la noche, en muchas ciudades del país, los comerciantes apagaron las luces, oscurecieron los carteles luminosos en vidrieras, cines y teatros y descolgaron los teléfonos durante 10 minutos. A estas medidas se les sumaron numerosos vecinos, principalmente de clase media. Si bien es cierto que las clases medias comenzaron a ganar protagonismo en las distintas acciones de protesta, una multiplicidad

de análisis han tendido a poner el acento en el hecho de que el corralito significó una suerte de reacción de las clases medias afectadas que comenzaron a manifestarse contra la medida, dejando de lado el rol del movimiento obrero organizado. Se sostiene aquí que, no obstante lo anterior, el sindicalismo cumplió un rol central a la hora de organizar la protesta contra las recientes medidas económicas, basta mencionar la convocatoria al paro general del 13 de diciembre. Las tres Centrales Sindicales declararon la huelga general con consignas tendientes a pedir la renuncia de Cavallo y la libre disponibilidad de los salarios. Las movilizaciones comenzaron a hacerse sentir desde el día anterior y se expresaron a lo largo de todo el país. El acatamiento al paro fue masivo. A pesar de las diferencias, se estimó que la medida contó con un 80% de adhesión (*La Nación*, 14/12/2001). Las acciones de movilización convocadas por la CGT Disidente y la CTA no contaron con el apoyo de la CGT Oficial, lo que puso en evidencia una vez más la fragmentación del movimiento.

Las principales acciones que se realizaron en aquellas jornadas fueron las siguientes. En Mendoza, un grupo de personas irrumpió en un supermercado y robó mercadería. En Pergamino, provincia de Buenos Aires, manifestantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que participaban de la protesta convocada por la CGT disidente, ingresó en la Municipalidad y provocó daños hasta que fueron desalojados por la Gendarmería Nacional. En la Ciudad de Buenos Aires, tres taxis fueron incendiados. Además, en un cantero, fueron halladas cuatro bombas molotov envueltas en un bolso abandonado. En la ciudad de La Plata, una bomba molotov explotó en la madrugada frente a una sucursal del Banco Nación y provocó la rotura de vidrios. Otra bomba detonó en la ciudad de Mar del Plata, en una sucursal del Banco Francés del barrio Constitución (*La Nación* y *Página 12*, 14/12/2001). Desocupados cortaron rutas y calles en Tucumán, Jujuy y la Ciudad de Buenos Aires, y pequeños patronos agropecuarios lo hicieron en Río Negro. Asalariados estatales y desocupados se manifestaron, apedrearon e intentaron incendiar edificios públicos, bancos, empresas extranjeras y un diario en Neuquén, dando lugar a varias horas de lucha callejera con la policía. Desde esa noche comenzaron a registrarse

saqueos a supermercados en Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Río Negro, Buenos Aires y Capital Federal (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2003).

3.4 De la protesta laboral a la conflictividad social

La huelga general del 13 de diciembre fue el puntapié inicial de la fase final de la crisis. Mal haríamos en circunscribir esa protesta bajo la etiqueta de “protesta laboral” ya que los hechos descriptos más arriba ponen en evidencia que, si bien la huelga sirvió de contexto para un conjunto de repertorios de protesta laboral, terminó siendo trascendida por expresiones que la superaron ampliamente. Comenzaron a observarse síntomas de cambios en la centralidad de las acciones sindicales. La contundencia del paro de actividades es innegable, pero la asistencia a los actos convocados por la CGT Disidente y la CTA fueron más bien modestas.

La prensa comenzaba a dar cuenta de estos cambios. Por ejemplo, el diario *Clarín* titulaba, en su edición del 14 de diciembre, “Clase media, la nota del paro”. En “Últimas cartas del Gobierno para evitar el colapso”, nota fechada el 16 de diciembre, se afirmaba que “Moyano hizo una flaca concentración en el Congreso (...), pero brotaron en distintos lugares del país protestas espontáneas por la decadencia social, que arrancaron con diez o veinte personas y terminaron congregando a cientos de ellas”. Y en esas horas decisivas se preguntaba el autor de la nota: “¿Cómo es, entonces, que no estalla el polvorín?”. A lo que respondía que la causa era que el malestar popular no había encontrado un vehículo confiable ni en “las oxidadas organizaciones gremiales” ni en las variantes no tradicionales, en referencia a la “experiencia piquetera”. Los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre dejaron en claro que el polvorín no iba a tardar en estallar y que, de una forma u otra, la protesta social encontraría un canal de expresión, que no involucraba de manera protagónica a las Centrales Sindicales. Como señalan Pucciarelli y Castellani (2014), la protesta se transformó en rebelión provocando la disolución del poder político institucional.

Los días siguientes al paro general estuvieron plagados de protestas sociales²⁷ y el clima de tensión se percibía cada vez más. Entre el 14 y el 17 de diciembre el FRENAP²⁸ (Frente Nacional contra la Pobreza), liderado por dirigentes de la CTA, realizó una consulta popular para conocer la opinión de la ciudadanía respecto de la creación de un seguro de desempleo. Votaron alrededor de 3 millones de personas, las cuales se manifestaron a favor de la propuesta poniendo en evidencia la centralidad del tema del desempleo en amplios sectores de la sociedad (*Página 12*, 18/12/2001).

El 18 de diciembre, industriales y trabajadores del calzado protestaron conjuntamente frente al edificio de la Cancillería en reclamo de mayor protección arancelaria para esta rama de la producción ante la "invasión de importaciones brasileñas". En la manifestación participaron militantes del sindicato del sector y el líder de la CGT, Rodolfo Daer, sumando unas dos mil personas que transportaban árboles de Navidad contruidos con zapatos y llevaban carteles con leyendas. Como parte de la protesta, arrojaron zapatos, zuecos, botas y calzado de mujer al edificio de la Cancillería (Schuster, 2002). Se destaca aquí este acto ya que involucra un repertorio novedoso propuesto por la CGT Oficial, la cual, como se ha señalado, aparece más propensa a reproducir los repertorios tradicionales de protesta laboral.

Desde la CGT Oficial se presentó además un reclamo a los presidentes de las dos Cámaras del Congreso y a los jefes de las bancadas peronistas para que se diera "estricto cumplimiento del principio de intangibilidad de sueldos y salarios de todos los trabajadores y la implementación por ley de un seguro nacional de desempleo" (*La Prensa*, 19/12/2001).

¿Cuál fue entonces la posición de los líderes sindicales ante la proliferación de los saqueos? Daer declaró: "la gente se moviliza porque tiene hambre" (*BAE*, 19/12/2001) y

²⁷ El 18 de diciembre de 2001 un grupo de 60 personas irrumpió en un minimercado de la cadena Día en la localidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, para llevarse alimentos. En San Miguel, provincia de Buenos Aires, unas 500 personas saquearon varios comercios.

²⁸ Formaban parte del FRENAP, además de los dirigentes de la CTA, dirigentes de APYME (Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios), de la Federación Agraria Argentina, del ARI, de Abuelas de Plaza de Mayo, de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, del MEDH (Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos), del SERPAJ (Servicio Paz y Justicia), del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), además de numerosos líderes sociales y religiosos.

Hugo Moyano afirmó que los saqueos "eran previsibles, pero el gobierno no escuchó lo que veníamos advirtiendo desde hace tiempo" y que la salida a esa situación "es el cambio urgente del modelo económico", pero dudó de que el Gobierno "lo pueda llevar adelante" (*Clarín*, 19/12/2001).

Más allá de las cuestiones declarativas, los hechos salientes de esos días siguieron siendo los saqueos. Durante la mañana del 19 de diciembre se realizó una reunión que había sido convocada por las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Con un fuerte carácter de concertación social participaron de la misma el propio Presidente de la Nación, representantes del gobierno nacional, organizaciones no gubernamentales (ONG), legisladores, empresarios y los líderes de las dos CGT. Se reunieron en la sede de Cáritas para analizar la situación social, pero el tono de la reunión estuvo marcado por fuertes críticas al Presidente, además de agresiones físicas que recibió al ingresar a la sede del encuentro.

Mientras esto ocurría, los saqueos a comercios y supermercados se multiplicaron y se hicieron sentir en diferentes partes del país, y arrojaron un saldo de siete personas muertas, decenas de heridos y más de 500 detenidos. Iñigo Carrera y Cotarelo (2003) señalan que las acciones callejeras de esos días no se limitaron a saqueos: hubo ocupación pacífica de edificios públicos (el 14, en La Plata, docentes tomaron el Banco de la Provincia de Buenos Aires), ataque a sedes gubernamentales con lucha callejera con la policía (el 19 en la municipalidad de Córdoba y en la legislatura de La Plata) y cortes de ruta que se extendieron durante días en todo el país (el 19 estaban cortadas todas las rutas de Jujuy, Entre Ríos y Chaco y el sur de la provincia de Tucumán). En la tarde del 19 de diciembre, el presidente de la Rúa declaró el estado de sitio por 30 días y pronunció un discurso en cadena nacional que versó sobre cuatro ejes temáticos: el reconocimiento oficial de que el orden público había sido definitivamente alterado, la virtual criminalización de cualquiera que participara en saqueos y manifestaciones, la responsabilización a toda la clase política por los acontecimientos y, por último, el llamado a algún tipo de cogobierno que, en función

de la responsabilidad compartida y por la profundidad de la crisis, debía ser concertado a la brevedad (Schuster, 2002). Ordenó, además, el acuartelamiento de las Fuerzas Armadas, quienes le expresaron que no estaban dispuestas a intervenir para reprimir la sublevación a menos que mediara una ley del Congreso Nacional (Godio, 2002). Contrariamente a los objetivos perseguidos por el Presidente, el mensaje exacerbó los ánimos, que se expresaron a través de los ruidos de las cacerolas y una multitud de personas que salieron de sus casas. En las ciudades de Buenos Aires, La Plata y Rosario, miles de personas organizaron columnas que, desde los diferentes barrios, partieron hacia la Plaza de Mayo, a la Plaza del Congreso y al Monumento a la Bandera. La policía trató de controlar a los manifestantes arrojando gases lacrimógenos y varias personas terminaron detenidas. Esa misma noche se conoció la noticia de la renuncia de todo el gabinete, incluida la del Ministro Cavallo. Rápidamente, la CTA convocó un paro para el día siguiente, 20 de diciembre.

Durante toda la jornada se produjeron saqueos en Rosario, Junín, Capital Federal, Gran Buenos Aires, Corrientes, Salta, Paraná, Comodoro Rivadavia; manifestaciones en Chaco, La Plata y Mar del Plata; lucha callejera en Córdoba, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia, Mendoza, Neuquén, Tucumán, Rosario, Paraná y Gran Buenos Aires (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2003). Sin embargo, el centro de la acción estuvo en la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de los anuncios de la noche anterior, que habían desmovilizado a sectores importantes, muchas de las personas que se habían congregado en la Plaza permanecían en una suerte de vigilia. Esa mañana, la policía recibió la orden de desalojar a los manifestantes, frente a lo que algunos grupos reaccionaron arrojando piedras, palos y adoquines contra los agentes policiales y contra algunos edificios públicos o bancos. Los tachos de basura y los bancos de la plaza fueron incendiados y con ellos se montaron barricadas. Estos enfrentamientos urbanos se extendieron hasta la noche.

A lo largo del día, las Centrales Sindicales declararon la huelga general. La CTA lo había hecho desde el día anterior y hasta el 21 de diciembre. La CGT Oficial declaró la huelga a partir de las 18 por 36 horas y hasta que se reuniera la Asamblea Legislativa, y la

CGT Disidente, a partir de las 0 horas del día 21 por tiempo indeterminado, hasta que se produjera la renuncia de de la Rúa.

Mientras algunos manifestantes cantaban en la plaza²⁹ “A dónde está, que no se ve, esa gloriosa CGT. Que se vaya, que se vaya...” (*Clarín*, 21/12/2001). Los líderes de las Centrales hacían declaraciones a la prensa pidiendo la renuncia del Presidente. Daer señalaba: “decidimos realizar un paro de 36 horas para lograr la preservación plena de la paz social, hoy gravemente dañada; en repudio de la represión policial injustificada que ha provocado gran cantidad de heridos y muertos y para garantizar la resolución de la gravísima crisis política en el marco de la Constitución Nacional” (*Página 12*, 21/12/2001). Por su parte, Moyano declaraba: “Era previsible que esto ocurriera. Muchos de los que me criticaron por golpista cuando pedí que de la Rúa diera un paso al costado hoy me dan la razón. El Presidente no tiene autoridad y debería adoptar una actitud patriótica para que esta anarquía no se agudice y desemboque en hechos más graves” (*La Nación*, 20/12/2001). Las Centrales fueron subiendo el tono de sus declaraciones y el común denominador fue responsabilizar al Gobierno por la situación social.

Con un saldo de muertos y numerosos heridos y la Ciudad de Buenos Aires convertida en un campo de batalla entre manifestantes y la policía, la noche del 20 de diciembre Fernando de la Rúa presentó su renuncia y abandonó la casa de Gobierno.

El “ciclo de protesta” (Tarrow, 1994) que desemboca en los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre debe ser entendido como un entramado de protestas y de movilización que no resiste una reducción a la unidad. Salta a la vista la centralidad de tres dimensiones o ejes de conflicto: a) los saqueos; b) la movilización de los sectores medios que se expresaron en los cacerolazos ante la confiscación de los ahorros; y c) las movilizaciones de desocupados y piqueteros (Schuster, 2002). Si bien implican lógicas diferentes de movilización, los saqueos, los cacerolazos y los piquetes no fueron solo expresiones

²⁹ Para un mayor detalle sobre las consignas de los manifestantes en esas jornadas se recomienda ver Bonnet, A. (2002). Que se vayan todos. Crisis, insurrección y caída de la convertibilidad, en *Cuadernos del Sur*, 33, pp. 39-70.

producidas en simultáneo, sino que, en cierto punto, terminaron articulándose para dar forma a algo totalmente nuevo. No es la intención de esta investigación realizar un análisis pormenorizado sobre los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre ya que existen diversos trabajos que dan cuenta de ello.³⁰ Lo que se busca dilucidar aquí es cuál fue el rol de las Centrales Sindicales en ese contexto.

Si entendemos, como lo hacen la mayoría de los análisis, que la Crisis del 2001 es aquella que tiene lugar los días 19 y 20 diciembre, es natural centrar la mirada en los movimientos sociales que protagonizaron esas jornadas y que, a través de múltiples acciones, expresaron su descontento, totalmente desentendidas y autonomizadas de los actores sindicales. Esos actores sindicales quedaron absolutamente relegados, al menos como actores colectivos, ante la emergencia de expresiones que contrastaban sustancialmente con sus lógicas históricas plagadas de contenidos corporativos y jerárquicos.

Ahora bien, si entendemos que la Crisis del 2001 es aquella que se inicia con la renuncia de Chacho Alvarez y que estalla a principios de diciembre con el corralito, el rol de las Centrales Sindicales adquiere otra dimensión. Lejos de ser un “actor de reparto”, impotente ante los acontecimientos, aparece como uno de los actores con verdadera capacidad de articular la protesta, a través de una serie de repertorios tradicionales, pero también con nuevos repertorios aprendidos en las luchas de los nuevos tiempos. En ese proceso, y en continua relación dialéctica con los movimientos de desocupados, fueron redefiniendo mecanismos tendientes a evitar el aislamiento respecto de sectores que comenzaban a definir nuevas identidades que cada vez tenían menos que ver con la identidad obrera. Sin embargo, en este devenir, las Centrales Obreras no pudieron o no quisieron mantenerse en el centro de la escena. Tal vez en su afán de no quedar

³⁰ Por ejemplo, “Génesis y desarrollo de la insurrección espontánea de diciembre de 2001 en Argentina” de Iñigo Carrera y Cotarelo (2006); “La protesta social en la Argentina durante diciembre de 2001”, documento elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), actualizado al 1º de marzo de 2002 y presentado el 8 de marzo de 2001, en una audiencia sobre la situación general de derechos humanos en Argentina, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y “La zona gris. Violencia colectiva y política” Auyero, Javier (2007).

involucradas en acciones que ellas mismas no podían controlar, tal vez para resguardar su integridad como actor sociopolítico, o tal vez porque entendieron que el mensaje de descontento iba dirigido también a la dirigencia sindical.

Cabe preguntarse entonces: ¿fueron las organizaciones sindicales superadas por una protesta que ellas mismas contribuyeron a exacerbar? ¿Las sucesivas protestas laborales organizadas por las Centrales sirvieron de impulso para que segmentos no identificados con la representación sindical salieran a protestar cuando se vieron afectados directamente por las medidas económicas? O ¿las mismas organizaciones sindicales al ver que esas expresiones de protesta no podían encuadrarse en sus lógicas de acción decidieron replegarse? ¿Fue una decisión deliberada esperar a que pasara lo peor del temporal para preservar sus intereses institucionales?

Para dar cuenta de estos interrogantes podemos recurrir a la noción de “estructura de oportunidades” (Tarrow, 1994) y analizar las circunstancias que operaron a favor de la puesta en acción de los movimientos sociales y en detrimento de la acción colectiva de los actores sindicales.

Tarrow señala que “el poder de los movimientos se pone de manifiesto cuando los ciudadanos corrientes unen sus fuerzas para enfrentarse a las elites, a las autoridades y a sus antagonistas sociales” (1994:17). Aunque en todas las sociedades existen motivos de conflicto y razones para protestar, la acción colectiva contenciosa solo tiene lugar cuando se estructuran las oportunidades políticas necesarias para que el costo de la acción colectiva se reduzca y los agentes sociales se decidan a intervenir. La acción colectiva será entonces una forma de conseguir o mejorar la situación de ese actor dentro de una determinada distribución de poder. Pero la gente no solo se suma a los movimientos sociales a partir de las oportunidades que se le presentan sino que, además, la acción colectiva genera a su vez nuevas oportunidades.

En Argentina, la crisis interna de la Alianza gobernante y su incapacidad para hacer frente a la crisis estructural del modelo económico de acumulación ofrecieron las oportunidades políticas para que las Centrales Sindicales profundizaran su acción colectiva

contenciosa. Así fue que, con matices diferentes, tanto la CGT Oficial como la CGT Disidente y la CTA buscaron aparecer como la única alternativa capaz de expresar el creciente malestar social. Sin embargo, encontraron reticencias en los sectores que no se identificaban ni con sus estructuras ni con sus liderazgos.

Los movimientos atraen a la gente a la acción colectiva por medio de los repertorios. Generalmente se trata de repertorios de enfrentamiento conocidos, pero también existen mecanismos innovadores. En la base de los repertorios, se encuentran las redes sociales y los símbolos culturales a través de los cuales se estructuran las relaciones sociales (Tarrow, 1994). En el caso de Argentina, muchos de los agentes sociales que buscaban expresar su descontento se plegaron a las acciones colectivas convocadas por las Centrales, como ocurrió en la movilización contra la Misión del FMI, la Marcha Grande convocada por la CTA o los paros generales de la última etapa del Gobierno. Esto ofreció aprendizajes en la acción que luego sirvieron para potenciar acciones autonomizadas.

Existía una brecha que separaba a las estructuras institucionalizadas de las Centrales de las otras formas de expresión más del tipo movimientista. A pesar de que las Centrales buscaron incorporar repertorios novedosos, no lograron mitigar la fuerza de los símbolos culturales que, especialmente en el caso de la CGT, generaban desconfianza de amplios sectores con voluntad de movilizarse.

Cuando el Gobierno de de la Rúa llegó a su etapa terminal, es decir, cuando el Presidente quedó totalmente aislado y la confiscación de los depósitos fue anunciada, esos actores colectivos que desde hacía tiempo estaban potencialmente listos para pasar a la acción, encontraron su momento, su oportunidad. En la vereda opuesta, las Centrales Sindicales vieron cómo su estructura de oportunidades se difuminaba.

Según Tarrow, para analizar la estructura de oportunidades se deben tener en cuenta las características del sistema político y las posiciones y estrategias efectivas que los actores adoptan en dicho marco. Las oportunidades para la acción colectiva dependerán entonces de la apertura/clausura del sistema político, de la estabilidad/inestabilidad de las

alianzas políticas, de la presencia/ausencia de potenciales aliados influyentes y de la cohesión/división de las élites dominantes.

El Gobierno de la Alianza venía dando claras señales de descomposición interna desde la renuncia del Vicepresidente. Además, los intentos del Gobierno de conformar un pacto de gobernabilidad con el PJ, el sindicalismo y la Iglesia habían fracasado sistemáticamente. Si a esto se le suma la pérdida de los apoyos empresarios e internacionales luego del fracaso del programa de Cavallo entendemos cuáles fueron las oportunidades que operaron a favor de la puesta en acción de los movimientos. Paralelamente, estos factores fueron los que operaron a favor de la retirada de las Centrales Sindicales en la última etapa de la crisis.

Si el sindicalismo hubiera redoblado la apuesta movilizadora en ese contexto, hubiera sido fácilmente acusados de desestabilizador y, por consecuencia, de antidemocrático. En un país con una frondosa historia de golpes de Estado, el costo político de involucrarse directamente hubiera sido considerablemente alto. Además, una vez puesta en marcha la escalada de los saqueos, aparecía la violencia como protagonista. En un escenario tan inestable, mostrarse como el actor que contribuía a la disolución de los lazos sociales hubiera sido sumamente costoso. Además, lo que primaba en esas horas era la incertidumbre, razón suficiente para mantener la calma y no aventurarse a tomar decisiones.

Fue así que las Centrales Sindicales con sus numerosas y sistemáticas acciones de protesta contribuyeron a generar las oportunidades políticas para la puesta en movimiento de otros actores colectivos. El repliegue de la CGT y la CTA en la coyuntura del 19 y 20 diciembre no es un indicador de que el movimiento obrero organizado haya dejado de ser un actor relevante de la acción colectiva. Por el contrario, pone en evidencia la racionalidad de la acción y su deliberado accionar en pos de preservar sus intereses institucionales.

Capítulo 4

Análisis de datos

4.1 Las protestas laborales

Durante el Gobierno de de la Rúa las Centrales Sindicales tuvieron un rol muy activo en relación con la convocatoria a protestas laborales. Luego de haber realizado el relevamiento empírico se obtuvo un registro de 32 protestas convocadas por las Centrales.³¹ De las 32 medidas realizadas,³² la CGT Oficial convocó o adhirió a 10; la CGT Disidente, a 20; y la CTA, a 24, lo que pone en evidencia la mayor actividad por parte de las Centrales Opositoras, que llegan a duplicar la cantidad de protestas respecto de la CGT Oficial.

Durante los 25 meses³³ en los que se extendió el Gobierno de de la Rúa las medidas de fuerza se distribuyeron de manera constante. Mientras la CGT Oficial realizó un promedio de 0,4 protestas por mes, la CGT Disidente³⁴ realizó un promedio de 0,8 protestas por mes y la CTA, un promedio de 0,96. A partir de la observación, no se ha registrado ningún momento en el cual la cantidad de protestas haya aumentado o disminuido sensiblemente. Se registran excepcionalmente algunos meses sin protestas,³⁵ pero la constante es que hubo al menos una por mes, a excepción de diciembre de 2001, en donde se registran tres protestas importantes, cuya especificidad fue analizada en el capítulo anterior, a las cuales adhieren las dos CGT y la CTA, sin que esto implique un desvío sustancial respecto de la tendencia.

³¹ No se incluye la convocatoria al paro general del 20 de diciembre, día de la renuncia presidencial por tratarse de una protesta con características muy particulares, tal como se describe en el capítulo 3.

³² Los criterios conceptuales y de selección de casos han sido presentados en la Introducción teórico-metodológica.

³³ Se considera desde el 10 de diciembre de 1999 hasta el 20 de diciembre de 2001.

³⁴ La CGT Disidente se configura como Central alternativa en febrero del año 2000, por lo que su accionar durante los meses de diciembre de 1999 y enero de 2000 estuvo dentro de la CGT Oficial.

³⁵ Marzo del 2000 y abril del 2001.

Para poder dar cuenta de los repertorios utilizados en cada protesta se agruparon las acciones en las categorías que se muestran en el Cuadro N°1, y se detalla, además, el tipo de repertorio utilizado por cada Central.³⁶

Cuadro N° 1.
Cantidad de repertorios de protesta laboral
utilizados por cada Central Sindical
durante el Gobierno de de la Rúa (1999-2001)

	CGT Oficial	CGT Disidente	CTA
Abrazo / Cadena Humana			1
Apagones			1
Asamblea		1	
Boicot		1	
Cacerolazos			1
Caminata			3
Consulta popular			1
Convocatoria multisectorial y/o plurisocial	1	8	7
Cortes			8
Escraches		2	1
Movilización	6	16	17
Muestra artística	1		
Olla popular		2	2
Paro general / Paro / Cese de actividades	4	9	11
Recolección de firmas / Petitorio		1	4
Toma o irrupción en edificio público		1	2

Respaldando las impresiones a priori aparece el hecho de que el repertorio más utilizado por las tres Centrales ha sido la movilización, seguida del paro general. Se han señalado en capítulos anteriores los factores históricos, político-institucionales y legales que pueden explicarlo. Aparece como particularidad el hecho de que tanto para la CGT Disidente como para la CTA el repertorio más empleado en tercer lugar haya sido lo que se ha identificado aquí como "convocatoria multisectorial y/o plurisocial". Se hace referencia a protestas en las cuales los dirigentes convocaron, por ejemplo, a Organismos de Derechos

³⁶ Se han contado cada uno de los repertorios a los cuales las Centrales convocan en cada protesta. Es habitual que en una protesta se apele a más de un repertorio.

Humanos, a Organizaciones de Desocupados, a Movimientos de Jubilados, a Partidos Políticos, a Asociaciones de PyMES, a Organizaciones que luchan por temas de vivienda, etcétera. Este tipo de repertorio implica un llamamiento a la participación en la protesta de una pluralidad de actores que trascienden la condición de trabajador y, por tanto, la identidad funcional o de clase, la afiliación obrero-sindical y la identidad peronista. La CGT Disidente y la CTA apelaron a este tipo de convocatoria en aproximadamente 1 de cada 3 protestas. Si bien por su propia génesis y configuración este dato no sería llamativo para la CTA, sí podría serlo para la CGT Disidente. Se sostiene aquí que la búsqueda de la CGT Disidente de apelar retóricamente a sectores no obreros tiene más que ver con una estrategia de ampliar su base de sustentación, con el fin de legitimarse en el rol de oposición, que con un verdadero cambio en su anclaje identitario. Esto no quita que, en un contexto donde la construcción simbólica del sujeto "trabajador" estaba en crisis respecto a etapas anteriores, los líderes de la Central hayan comprendido la importancia de incorporar nuevos lenguajes. Lo destacable es que siempre aparecen articulados y re-significados a partir de los aprendizajes adquiridos en las luchas estrictamente obreras y peronistas.

En el caso de la CGT (Oficial y Disidente) no se registran convocatorias oficiales a realizar cortes de calles o rutas. Esto no quiere decir que en el contexto de las protestas convocadas por ellas no se hayan registrado estos repertorios. En el lenguaje de sus líderes no aparece una apelación directa al corte, aunque cuando se analizan las crónicas periodísticas aparecen inmediatamente las descripciones de los piquetes, de los ataques al transporte público para impedir la circulación o la quema de neumáticos para bloquear los accesos a los centros urbanos. Estas prácticas han sido aprendidas y reproducidas a lo largo de las históricas luchas obreras. Pareciera ser que este tipo de acciones, muchas de ellas pacíficas y muchas violentas, son aceptadas solo tácitamente, a la vez que son alentadas desde las cúpulas y articuladas desde las organizaciones de base, pero no incluidas en los mensajes y llamamientos públicos.

En el caso de la CTA la convocatoria al corte de ruta tiene una connotación diferente. Desde su origen, la CTA ha intentado abarcar en sentido amplio al mundo del

trabajo, dándole el mismo status al trabajador ocupado, el desempleado, el subocupado, el precarizado o el jubilado. La Central fue configurándose a partir de la inclusión de organizaciones de diverso tipo que aportaron sus propias experiencias y trayectorias de lucha. Por tal motivo, la inclusión del corte de ruta en los repertorios de la Central aparece naturalizado e institucionalizado. El corte de ruta puede entenderse como tributario de la experiencia y los aprendizajes propios de los movimientos sociales, que se re-significan a partir de su encuadramiento dentro de la Central. Esta medida no sería exactamente un repertorio novedoso para la CTA, pero su novedad radica en el hecho de que ha sido apropiado por la Central como forma de diferenciación de la CGT, especialmente en la década del 90. Al analizar los datos del período 1999-2001 esta idea se refuerza, ya que ni la CGT Oficial ni la Disidente han apelado al corte de ruta de manera oficial en ninguna de sus convocatorias, mientras que la CTA lo ha hecho de manera recurrente. En 1 de cada 3 protestas se apeló al corte de calles o de rutas.

4.2 Los Repertorios Tradicionales y los Repertorios Novedosos

Con los datos obtenidos en el mapeo de las protestas laborales se realizó un análisis de los repertorios utilizados por cada Central clasificándolos en cada caso como "tradicionales" o "novedosos". A partir de los modelos construidos y presentados en la Introducción se obtuvieron los siguientes resultados.

4.2.1 La CGT Oficial

La CGT Oficial utilizó fundamentalmente los repertorios tradicionales del paro y la movilización. Solo en el paro del 19 de julio del 2001, que fue convocado conjuntamente por las tres Centrales, incluyó la apelación a organizaciones no obreras. En esa oportunidad adhirieron el bloque de diputados del PJ y algunos partidos de izquierda, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Federación Agraria Argentina. Al tratarse de

una convocatoria a la que adhieren las distintas Centrales es habitual que se incorporen repertorios más propios de otras Centrales.

Distinto fue el caso de la movilización del 18 de diciembre del 2001. En esa oportunidad la convocatoria fue estrictamente de la CGT Oficial y no contó con la adhesión de las otras Centrales. Aquí la novedad se presenta porque la movilización se hizo frente a la Cancillería y se utilizó un repertorio novedoso como la muestra artística.

No obstante lo anterior, la tendencia en la CGT Oficial es reproducir los repertorios tradicionales y solo en casos excepcionales apelar a algún repertorio novedoso, como se observa en el Cuadro N°2.

Cuadro N°2
Protestas laborales convocadas por la CGT Oficial
agrupadas por tipo de repertorio
durante el Gobierno de de la Rúa (1999-2001)

Fecha de la protesta	Repertorio tradicional	Repertorio novedoso
12/01/2000	Movilización	
09/06/2000	Paro	
17/08/2000	Movilización	
24/11/2000	Paro	
19/12/2000	Movilización	
04/05/2001	Movilización	
19/07/2001	Paro	Convocatoria multisectorial y/o plurisocial
29/08/2001	Movilización	
13/12/2001	Paro	
18/12/2001	Movilización	Muestra artística

4.2.2 La CGT Disidente

La CGT Disidente no solo registra una mayor cantidad de protestas que la CGT Oficial, sino que se observa, además, la apelación a una mayor diversidad de repertorios, pero siempre como acciones complementarias a los repertorios tradicionales, tal como se observa en el Cuadro N°3.

Cuadro N°3
Protestas laborales convocadas por la CGT Disidente
agrupadas por tipo de repertorio
durante el Gobierno de de la Rúa (1999-2001)

Fecha de la protesta	Repertorio tradicional	Repertorio novedoso
24/02/2000	Paro y movilización	
19/04/2000	Movilización	Olla popular e intento de impedimento a sesión legislativa
26/04/2000	Movilización	Convocatoria multisectorial y/o plurisocial
05/05/2000	Paro	Escraches y convocatoria multisectorial y/o plurisocial
31/05/2000	Movilización	Convocatoria multisectorial y/o plurisocial
09/06/2000	Paro y movilización	
26/07/2000	Movilización	Convocatoria multisectorial y/o plurisocial
17/08/2000	Movilización	
11/10/2000	Paro y movilización	
23 y 24/11/2000	Paro y movilización	Convocatoria multisectorial y/o plurisocial
24/12/2000		Olla popular
20 y 21/03/2001	Paro y movilización	Convocatoria multisectorial y/o plurisocial
5 y 6/4/2001	Movilización	Escraches
31/05/2001	Movilización y boicot	
08/06/2001	Paro	
21/06/2001	Movilización	
19/07/2001	Paro	Convocatoria multisectorial y/o plurisocial
29/08/2001	Movilización	
20/11/2001	Movilización	
13/12/2001	Paro y movilización	Asamblea, petitorio y Convocatoria multisectorial y/o plurisocial

Los datos tienden a sustentar las impresiones a priori ya que se observa en la CGT Disidente la incorporación de repertorios novedosos de manera recurrente, como por ejemplo, las convocatorias multisectoriales, los escraches a funcionarios públicos o a representantes de Organismos Internacionales, la protesta del 19 de abril del 2000 (que se proponía evitar que los legisladores sesionaran y aprobaran la Ley de Reforma Laboral) o

las Ollas Populares, especialmente organizadas para desocupados o jubilados, como la de la Navidad del año 2000.

Es pertinente una breve referencia al paro general del 13 de diciembre del 2001 en donde aparece como novedoso el repertorio de la "Asamblea". Si nos dejáramos llevar por una mirada retrospectiva y cargada de los significados construidos con posterioridad, se podría señalar esto como un hallazgo. Sin embargo, puesto en contexto, no es otra cosa que un intento más para obtener apoyos y cargar de contenido atractivo las estrategias retóricas. Por esas horas Moyano buscaba diferenciarse de Daer y hacía un llamamiento a una "huelga activa que incluya asambleas en rutas (con cortes), en barrios y colegios para despertar la protesta en la gente" (*La Nación*, 7/12/2001).

Si bien los repertorios novedosos aparecen, esto no debería precipitar conclusiones de cambios profundos. La tendencia fue acercar posiciones con la otra Central Opositora (la CTA) y a diferenciarse de la CGT Oficial y en ese afán es que aparecen los nuevos repertorios. Se aprecia una voluntad de aprendizaje, pero manteniendo y reforzando las prácticas tradicionales.

4.2.3 La CTA

La CTA fue la Central que más cantidad de protestas laborales registró y la que utilizó más repertorios novedosos, tal como se muestra en el Cuadro N° 4. Se observa una mayor cantidad de protestas en las que se convoca a cortes de ruta, escraches, tomas de edificios públicos, abrazos o cadenas humanas y ollas populares (repertorios novedosos).

Existe un formato de protesta laboral que reviste una gran novedad, ya que solo la CTA lo incorporó a sus repertorios: las caminatas o marchas que recorren distintos puntos del país recolectando firmas para avalar la presentación de un petitorio o proyecto de ley. Estas acciones son novedosas ya que no solo presentan una demanda, sino que además buscan generar una propuesta, lo que Armelino (2004) ha calificado como "Protesta-Propuesta". Como se ha descrito en el capítulo 3, las acciones más relevantes en este sentido han sido la Marcha Grande por el Trabajo de julio del 2000 y la Marcha contra la

Pobreza de septiembre del 2001. En síntesis, la CTA ha sido la central que más repertorios novedosos ha utilizado y la que los ha utilizado de manera más recurrente, como se observa en el Cuadro N°4.

Cuadro N°4
Protestas laborales convocadas por la CTA
agrupadas por tipo de repertorio
durante el Gobierno de de la Rúa (1999-2001)

Fecha de la protesta	Repertorio tradicional	Repertorio novedoso
19/12/1999	Paro	
12/01/2000	Movilización	
24/02/2000	Paro y movilización	Abrazo
26/04/2000	Movilización	Convocatoria multisectorial y/o plurisocial
05/05/2000	Paro y movilización	Cortes, escraches y ollas populares
09/06/2000	Paro y movilización	Cortes y recolección de firmas
26/07/2000		Caminata y recolección de firmas
17/08/2000	Movilización	
16/09/2000		Caminata y recolección de firmas
21/09/2000	Movilización	Toma de edificio público
11/10/2000	Paro y movilización	
23 y 24/11/2000	Paro y movilización	Cortes, apagones, cacerolazos y convocatoria multisectorial y/o plurisocial
15/01/2001		Recolección de firmas
21/02/2001	Movilización	Convocatoria multisectorial y/o plurisocial
20 y 21/03/2001	Paro y movilización	Convocatoria multisectorial y/o plurisocial
5 y 6/4/2001	Movilización	Cortes
08/06/2001	Paro y movilización	Cortes y ollas populares
21/06/2001	Movilización	
19/07/2001	Paro	Convocatoria multisectorial y/o plurisocial
7 y 08/08/2001	Paro y movilización	Cortes y convocatoria multisectorial y/o plurisocial
21/09/2001	Movilización	Caminata
24/10/2001	Movilización	Cortes
13/12/2001	Paro y movilización	Cortes, toma de edificios públicos y convocatoria multisectorial y/o plurisocial
14/12/2001		Consulta popular

Al analizar los repertorios utilizados por cada Central se obtuvieron resultados que permiten respaldar la hipótesis de que la CGT Oficial fue la menos propensa a utilizar repertorios novedosos, seguida de la CGT Disidente, y que la CTA utilizó casi la misma cantidad de repertorios tradicionales que novedosos, como se muestra en el Cuadro N°5.

Cuadro N°5
Cantidad de repertorios "tradicionales" y "novedosos"
utilizados en las protestas laborales convocadas por cada Central
durante el Gobierno de de la Rúa (1999-2001)

	CGT Oficial		CGT Disidente		CTA	
Repertorios tradicionales	10	77 %	28	68%	30	48%
Repertorios novedosos	3	23%	13	32%	32	52%
TOTAL	13	100%	41	100%	62	100%

4.3 Las demandas y los repertorios

Para poder realizar un análisis profundo de los cambios en los repertorios de la protesta laboral es necesario tener en cuenta las demandas que esos repertorios buscan expresar. Para ello se realizó un relevamiento de los reclamos o reivindicaciones planteados en cada una de las 32 protestas realizadas entre 1999 y 2001. Se agruparon las demandas en las siguientes categorías: Reclamos salariales, Demandas contra las políticas económicas del Gobierno, Demandas contra las reformas políticas que afectan a las Organizaciones Sindicales y los recursos que estas manejan, Repudio a la represión de las Fuerzas de Seguridad contra manifestantes y Acciones de protesta contra misiones de Organismos Internacionales.

Luego de realizar el relevamiento de las Centrales en conjunto se observó que, en primer lugar, aparecen las protestas contra la política económica del Gobierno, las cuales

incluyen los reclamos contra los diferentes planes económicos de ajuste. En segundo lugar, aparecen las demandas vinculadas a cuestiones relacionadas al mundo del trabajo o a la falta de trabajo, como por ejemplo contra la reducción de empleados o despidos en empresas públicas o privadas, las demandas contra el atraso en el pago de salarios, los reclamos contra las rebajas de salarios a empleados públicos o jubilados y las demandas contra el pago de salarios con bonos. Además, en esta categoría se incluyeron los reclamos para conseguir el seguro de desempleo y capacitación o la Asignación Universal por Hijo. En tercer lugar, aparecen las demandas relacionadas con las reformas que tienen una incidencia directa sobre los intereses corporativos de los sindicatos, tales como la Ley de Reforma Laboral, el proyecto para desregular las Obras Sociales o el de Reforma Previsional. Luego, aparecen las demandas contra los Organismos Internacionales como el FMI o el ALCA y, finalmente, las demandas en repudio a la represión policial.

Al analizar las demandas de cada Central aparecen algunas particularidades, como por ejemplo que, en el caso de la CGT Disidente, los reclamos por temas laborales ocupan el cuarto lugar, estando presentes solo en el 15% de las protestas convocadas por esta Central. Por su parte, la CTA incluyó reclamos de este tipo en el 31% de sus protestas y la CGT Oficial en el 30%.

La CGT Disidente registra un mayor número de demandas que las otras Centrales en cuestiones que tienen que ver con reclamos políticos (22%), seguida de la CGT Oficial (20%). En el caso de la CGT Disidente esto se debe a que desde allí se motorizaron la mayor parte de las protestas contra la Reforma Laboral y en el caso de la CGT Oficial se debe a sus iniciativas en relación con la desregulación de las Obras Sociales y el proyecto de reforma de la Ley Previsional.

En síntesis, la mayor parte de los reclamos de las Centrales Sindicales tienen que ver con temas que podríamos catalogar como "políticos". Es decir, no se realizan las protestas tanto por cuestiones salariales sino explícitamente por reclamos que buscan cuestionar las decisiones del Gobierno en materia económica, política y social. Decisiones

que no solo afectan las condiciones de vida y de trabajo de sus bases, sino también los intereses corporativos de las Organizaciones Sindicales.

Hay una clara tendencia a utilizar las herramientas propias de las luchas del mundo del trabajo para manifestar su oposición al Gobierno y, con ese objetivo, buscar la incorporación de nuevos repertorios. En un contexto político y económico crítico, las Centrales Sindicales echaron mano a todos los recursos disponibles para afirmar no solo su rol institucional en defensa de los intereses profesionales de los trabajadores, sino que también buscaron reforzar el rol político que creían que estaban llamadas a cumplir. Pero justamente, al cambiar las estructuras económicas y políticas, ese afán terminó siendo trascendido por un movimiento que arrasó no solo con esas aspiraciones sino con las mismas bases que las sustentaban. La movilización social que termina con la presidencia de de la Rúa fue la expresión de esos cambios.

Capítulo 5

Conclusiones

5.1 El gobierno de la Alianza, el sindicalismo y la Crisis del 2001

La presente tesis ha tenido como propósito general explorar el fenómeno del sindicalismo argentino en el contexto de decadencia y crisis del modelo neoliberal. Para ello se ha procurado describir el rol de las Organizaciones Sindicales durante el Gobierno de de la Rúa y su proyección durante la Crisis del 2001. La hipótesis de trabajo a partir de la que se indagó es la convicción de que en ese período se produjo la novedad de que la movilización social ya no era articulada de manera central a través de los canales tradicionales de mediación sindical, resultando de la investigación que, a pesar de esta particularidad, el actor sindical desempeñó un rol central en la activación de dicha movilización, aunque luego, al no poder articularla dentro de sus estructuras y objetivos, tendió a privilegiar sus intereses corporativos.

Por lo anterior se sostiene que el Gobierno de de la Rúa significó para el sindicalismo argentino un punto de inflexión entre dos etapas claramente diferenciadas y opuestas: la década del 90, donde el sindicalismo pierde capacidades y centralidad política, y la era post-convertibilidad, donde el sindicalismo comienza una etapa de revitalización. El período que comprende la presidencia de de la Rúa y la Crisis del 2001 es el momento en el que se produce la gestación de ese proceso de transformación.

La etapa 1999-2001 ofreció al sindicalismo importantes desafíos, que lo llevaron a desplegar mecanismos de adaptación y a ensayar nuevas estrategias para alcanzar sus objetivos. La llegada al poder del presidente de la Rúa presentó un nuevo escenario para el sindicalismo, que debió revisar su posición frente a un interlocutor no peronista y frente a un PJ sumamente desarticulado. Si en la primera etapa se intentó conformar un frente unificado, el proyecto de Reforma Laboral terminó precipitando la división de la CGT. El sindicalismo disidente concibió la oposición contra la Reforma como la oportunidad para constituirse en el único actor capaz de amalgamar a la oposición, ante un PJ con liderazgos

dispersos. Los resultados no fueron los esperados, ya que esta puja terminó poniendo en evidencia la propia incapacidad para mantener la unidad. Mientras la cúpula de la CGT Oficial privilegiaba la negociación desde arriba, las Centrales Opositoras (la CGT Disidente y la CTA) privilegiaron la movilización desde abajo. En una primera instancia el gobierno buscó acercarse al sindicalismo para negociar su repliegue, pero al fracasar en ese intento apeló a la estrategia de la confrontación abierta. Aprovechando un clima de opinión adverso, buscó deslegitimar las medidas de fuerza embistiendo contra las cúpulas sindicales, acusándolas de anteponer sus intereses personales a las necesidades del país y abonando, de esa manera, la crisis de legitimidad que la sociedad experimentaba respecto a las instituciones.

Mientras tanto, y ante la incapacidad del Gobierno para contener su crisis interna, el sindicalismo buscó desplegar todos los recursos a su alcance para reforzar su rol en el escenario político. El fracaso de los planes económicos y la sucesión de renunciadas de funcionarios prepararon el terreno para que las Centrales Sindicales profundizaran sus acciones de protesta. Cada sector del sindicalismo buscaba desplegar su estrategia en vista de sus propios objetivos. Sistemáticamente, las Centrales Sindicales buscaron dar claras señales de oposición a las iniciativas del gobierno que atentaban contra los intereses de los trabajadores, pero cada una, desde su lugar, lo hizo de manera sutilmente diferenciada. Un denominador común entre ellas fue que, ante la amenaza de caer en el abismo, ninguna quería aparecer ante la opinión pública como obstaculizadora de los intentos del Gobierno de sortear la crisis, pero tampoco aparecer frente a los trabajadores como cómplices del ajuste. Ahí es donde se evidencia un discurso fuertemente combativo que, sin embargo, dejaba siempre la puerta abierta para la negociación. Esto se observa de manera más concreta en los líderes de la CGT Oficialista, pero en ciertas circunstancias también en la CGT Disidente.

Al paso que la crisis política y económica se profundizaba, las protestas laborales se hacían sentir con más fuerza, lo que permite afirmar que el sindicalismo como actor político se vigorizaba y dejaba atrás la etapa de repliegue propia de la década neoliberal. Ahora

bien, mientras el sindicalismo experimentaba ese proceso, se producía la ampliación de una red de protestas sociales que involucraban a una multiplicidad de actores y demandas que, por su naturaleza, no eran estrictamente sindicales y excedían sus canales de organización. Lo propio de esta etapa fue el entrecruzamiento entre un conjunto de protestas laborales con protestas sociales, donde los mecanismos para la construcción de la identidad eran múltiples y difusos. Si por momentos se imponían los vínculos de solidaridad, en otros casos aparecían intereses contrapuestos y las identidades entraban en colisión. En esa red de protestas se involucraban actores diversos como sindicatos, movimientos sociales y partidos políticos, cada uno de ellos produciendo y reproduciendo repertorios propios y ajenos, y articulando demandas múltiples y hasta contradictorias, pero que describen el proceso de una acción colectiva expresada como síntoma de una profunda conflictividad.

5.2 Cambios en los repertorios de la protesta laboral durante el Gobierno de la Alianza

Una forma de conocer el rol de un determinado actor en un contexto particular es mediante el análisis de sus formas de acción. Por eso, en esta investigación se han planteado como objetivos específicos describir los cambios a nivel de los repertorios de la protesta laboral convocada y organizada por las Centrales Sindicales en el período de análisis y comparar los repertorios propios de cada una de las Centrales Sindicales con los “repertorios tradicionales” de la protesta laboral del sindicalismo argentino. La guía para realizar estas indagaciones ha sido la hipótesis de que, en el contexto del Gobierno de de la Rúa y de la Crisis del 2001, las Centrales Sindicales incorporaron nuevos repertorios de protesta laboral que son tributarios de los procesos de movilización encarnados por los Nuevos Movimientos Sociales y que los cambios en los repertorios de la protesta laboral han sido más profundos en las Centrales Sindicales no oficiales (CTA y CGT Disidente), mientras que la CGT Oficial ha tendido a reproducir en mayor medida los repertorios asociados a las formas tradicionales.

Luego del relevamiento empírico podemos concluir que los repertorios de protesta, desplegados por las Centrales Sindicales durante el Gobierno de de la Rúa presentan

matices diferentes respecto de los repertorios del sindicalismo peronista tradicional. Pero, en su esencia, no implican una negación de estos, sino todo lo contrario. Al incorporar nuevas formas de protesta lo que se busca es reforzar las anteriores. Se observa la incorporación de repertorios novedosos tanto en la CGT Oficial, en la CGT Disidente y en la CTA. Los datos permiten respaldar la hipótesis de que la CGT Oficial fue la menos propensa a utilizar repertorios novedosos, seguida de la CGT Disidente y que la CTA utilizó casi la misma cantidad de repertorios tradicionales y novedosos. La CGT Oficial tendió a reproducir los repertorios tradicionales y solo en casos excepcionales apeló a algún repertorio novedoso. La CGT Disidente no solo registra una mayor cantidad de protestas que la CGT Oficial, sino que se observa, además, la apelación a una mayor diversidad de repertorios, pero siempre como acciones complementarias a los repertorios tradicionales.

En un contexto de multiplicación de las protestas sociales, las protestas laborales revisten un cariz diferente y, a partir de los datos, obligan a repensar su conceptualización. Se ha dicho que la protesta laboral es una manifestación de carácter público que busca hacer visible ante la población y/o el gobierno un reclamo o una situación percibida como un problema sobre temas relacionados con el trabajo (salario, empleo, condiciones laborales, marco regulatorio). Sin embargo, el análisis de las protestas convocadas por el sindicalismo argentino en el período de análisis evidencian la necesidad de ampliar la idea de protesta laboral para darle un carácter más inclusivo. En un mundo en el cual la centralidad del trabajo y la identidad construida a partir de él han sido desplazadas, la protesta laboral tiende a ser cada vez menos clasista y con características más complejas. Una buena parte de lo que llamaríamos protestas laborales es, en realidad, mucho más que eso. La evidencia demuestra que las Centrales Sindicales organizaron más protestas vinculadas a temas que podríamos catalogar como "políticos" que medidas relacionadas a temas estrictamente laborales. Aparecen de manera cada vez más frecuente reclamos que buscan cuestionar las decisiones del Gobierno en materia económica, política y social, que no solo afectan las condiciones de vida y de trabajo de sus bases, sino también los intereses políticos y corporativos de las Organizaciones Sindicales. Es habitual el uso de repertorios

que implican un llamamiento a la participación en la protesta de una pluralidad de actores que trascienden la condición de trabajador y, por lo tanto, la identidad funcional o de clase, la afiliación obrero-sindical y la identidad peronista. Hay una clara tendencia a utilizar las herramientas propias de las luchas del mundo del trabajo para manifestar su oposición al Gobierno y en ese objetivo se busca incorporar los nuevos repertorios y ampliar las bases de sustentación, pero siempre articulados y re-significados a partir de los aprendizajes adquiridos en las luchas estrictamente obreras y peronistas.

El sindicalismo, en tanto actor tradicional, al echar mano a recursos de acción que se salen de sus repertorios tradicionales, está poniendo en evidencia un síntoma. En ese contexto las Centrales Sindicales buscaron, por un lado, afirmar su rol de defensa de los intereses profesionales de los trabajadores y, en simultáneo, reforzar el rol político que creían estar llamadas a cumplir. Pero justamente al cambiar las estructuras económicas y políticas ese afán terminó siendo trascendido por un movimiento que arrasó no solo con esas aspiraciones sino con las mismas bases que la sustentaban. La movilización social que termina con la presidencia de de la Rúa fue la expresión de esos cambios.

El sindicalismo buscó recuperar el protagonismo perdido en la década anterior y encontró una buena oportunidad mientras la era de la convertibilidad iba directo a su ocaso. Así fue que combinó sus herramientas tradicionales de acción y de lucha con los aprendizajes de aquellos colectivos que tendían a quedar excluidos de su representación. Evidentemente estos mecanismos operaron de manera diferente en la Central Oficialista y las Centrales Disidentes. A estas últimas, las experiencias de lucha de la etapa anterior les permitieron incorporar, de manera más orgánica, nuevas demandas y repertorios de protesta. Al paro y a la movilización se les sumaron acciones como los apagones, los cacerolazos, los escraches a funcionarios públicos, las muestras artísticas y las caminatas que recorrieron el país recolectando firmas para presentar proyectos que mejoraran las condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos, etcétera.

Con el Gobierno de la Alianza comenzó un ciclo de movilización que tiene como características novedosas que la protesta se expande de manera considerable a nivel

territorial y que involucra a una cantidad de sujetos que no habían participado de ciclos anteriores, como, por ejemplo, los sectores ligados a la desocupación, el trabajo precario, las clases medias afectadas por el ajuste. En ese contexto comenzó a arraigarse la percepción de que ni los actores políticos tradicionales, ni los actores sindicales contaban con los recursos necesarios para generar alternativas viables para mitigar la crisis. El sindicalismo como institución y su dirigencia tradicional fueron puestos en tela de juicio. Las elites sindicales tuvieron dificultades para revalidar sus recursos tradicionales de representación y muchas veces se vieron impotentes a la hora de articular las demandas de esos sectores. Se configuró un nuevo frente de resistencia social cuya articulación, si bien incluía en su seno a diferentes gremios, buscaba trascender la lógica estrictamente sindical.

Las organizaciones sindicales cumplieron un rol central en la génesis del proceso que culmina con la renuncia de de la Rúa. El ciclo de protesta laboral que protagonizaron las Centrales Sindicales contribuyó a la exacerbación de una protesta de segmentos sociales no identificados con la representación obrera. Es decir, las protestas laborales sirvieron de catalizador de movimientos sociales que se profundizaron como consecuencia de la debacle económica. Si bien muchos de los que buscaban expresar su descontento se plegaron a las acciones colectivas convocadas por las Centrales, existía una brecha entre las estructuras anquilosadas del sindicalismo y las expresiones del tipo movimientista. A pesar de que las Centrales buscaron incorporar demandas y repertorios novedosos, no lograron mitigar la fuerza de los símbolos culturales que, especialmente en el caso de la CGT, generaban desconfianza de amplios sectores con voluntad de movilizarse. Las Centrales Sindicales, al ver que esas expresiones de protesta no podían encuadrarse en sus lógicas de acción, decidieron replegarse con el fin de preservar sus intereses institucionales.

El repliegue de la CGT y la CTA en la coyuntura del 19 y 20 de diciembre no es un indicador de que el movimiento obrero organizado haya dejado de ser un actor relevante de la acción colectiva. Por el contrario, pone en evidencia la racionalidad de la acción y su deliberado accionar en pos de preservar sus intereses institucionales.

Bibliografía

- Armellino, M. (2004). Algunos aspectos de la acción colectiva y la protesta en la CTA y el MTA, en *Informe de Coyuntura Laboral Lavboratorio*, Año 6 N° 15. Universidad de Buenos Aires pp. 5-11.
- Auyero, J. (2002). *La protesta. Retratos de la beligerancia popular en la Argentina democrática*. Buenos Aires: Libros del Rojas.
- Barattini, M. (2009). El trabajo precario en la era de la globalización. ¿Es posible la organización? en *Polis*, 8 (24), pp. 17-37. Santiago.
- Bisio, R. y Mendizábal, N. (2003). Visiones y propuestas de los jóvenes cuadros sindicales sobre el rol de los sindicatos en la Argentina, en *Documentos de Trabajo*, N°5, abril 2003. Instituto de Investigación en Ciencias Sociales. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad del Salvador.
- Calderón, F. y Jelin, E. (1987). *Clases y movimientos sociales en América Latina: perspectivas y realidades*. Buenos Aires: CEDES.
- Castel, R. (1997). *La metamorfosis de la cuestión social*. Buenos Aires: Paidós.
- Castellani, A. y Gaggero, A. (2011). Estado y Grupos Económicos en la Argentina de los 90, en *Los años de Menem*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Castells, M. (1997). *La sociedad red*. Madrid: Alianza.
- Contartese, D. y Criado, R. (2003). *Argentina 2001-2002: los sindicatos ante las crisis*. 6º Congreso ASET, Buenos Aires.
- Dikenstein, V. y Gené, M. (2014). De la creación de la Alianza a su vertiginosa implosión. Reconfiguraciones de los elencos políticos en tiempos de crisis, en *Los años de la Alianza. La crisis del Orden Neoliberal*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Doyon, L. (1984). La organización del movimiento sindical peronista 1946-1955, en *Desarrollo económico*, pp. 203-234.
- (2009). La formación del sindicalismo peronista, en AA.VV., *Argentina: la construcción de un país*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Etchemendy, S. (2011). El sindicalismo argentino en la era posliberal, en *La política en tiempos de los Kirchner*. Buenos Aires: EUDEBA.
- Etchemendy, S. y Collier, R. (2008). Golpeados pero de pie: resurgimiento sindical y neocorporativismo segmentado en Argentina (2003-2007), en *Posdata*, N°13, pp. 145-192.
- Etchemendy, S. y Palermo, V. (1998). Conflicto y concertación. Gobierno, congreso y organizaciones de interés en la reforma laboral del primer gobierno de Menem (1989-1995), en *Desarrollo Económico*, N° 148, Vol. 37, pp. 559-590.
- Farinetti, M. (1999). ¿Qué queda del "movimiento obrero"? Las formas del reclamo laboral en la nueva democracia argentina, en *Trabajo y Sociedad. Indagaciones sobre el empleo, la cultura y las prácticas políticas en sociedades segmentadas*, N° 1, vol. I, junio-septiembre 1999, Santiago del Estero, Argentina.

Felder, R. (2007). Auge y crisis de las reformas neoliberales y transformación del Estado en la Argentina, en Fernández, A. (ed.) *Estado y sindicatos en perspectiva latinoamericana*. Buenos Aires: Prometeo.

Fernández Milmanda, M. B. (2008). El sindicalismo frente a la crisis de 2001. El caso de la CGT disidente. V *Jornadas de Sociología de la UNLP*. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Sociología, La Plata.

Fernández, A. (1985). *Las prácticas sociales del sindicalismo, 1976-1982*. Buenos Aires: CEAL.

----- (1996). Flexibilización laboral y Sindicatos. Un estudio de casos, en *Estudios Sociales*, Año VI, N°10. Santa Fe, pp. 209-219.

----- (1997). *Flexibilización Laboral y Crisis del Sindicalismo*, Buenos Aires: Espacio.

----- (1998). *Crisis y Decadencia del Sindicalismo Argentino*. Buenos Aires: Ed. de América Latina.

----- (2002). *Sindicatos, crisis y después*. Buenos Aires: Beibel.

----- (2010). El sindicalismo argentino frente al Bicentenario: una reseña histórica, en *Revista de Trabajo*, Año 6, N°8, enero-Julio, pp. 83-103.

Ferrero, J. P. (2005). La emergencia de nuevas formas de sindicalismo y relaciones laborales. Hacia una matriz teórica, en Fernández, A. (comp.), *Estado y Relaciones laborales. Transformaciones y perspectivas*. Buenos Aires: Prometeo.

Ferrero, J. P. y Gurrera, M. S. (2007). *El sindicalismo de movimiento social. Algunas reflexiones en torno al concepto*, en Fernández A. (comp.), *Estado y sindicatos en perspectiva latinoamericana*. Buenos Aires: Prometeo.

García Delgado, D. (1994). *Estado & Sociedad. La nueva relación a partir del cambio estructural*. Buenos Aires: Tesis.

Gerchunoff, P. y Torre, J. C. (1996). La política de liberalización económica en la administración de Menem, en *Desarrollo Económico*, N°143.

Glaser, B. y Strauss, L. (1967). *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. Nueva York: Aldine Transaction.

Godio, J. (2002). *En la crisis está la solución*. Buenos Aires: Biblos.

Gómez, M. (2009). Un modelo de análisis para entender las transformaciones del sindicalismo durante los 90 en la Argentina, en *Revista del Programa de Investigaciones sobre Conflicto Social*, ISSN 1852-2262.

Gordillo, M. (2010). *Piquetes y cacerola. El argentinazo de 2001*. Buenos Aires: Sudamericana.

Halperin Donghi, T. (1994). *La larga agonía de la Argentina peronista*, Buenos Aires: Ariel.

Hernández Sampieri, R. et al (2003). *Metodología de la Investigación Social. El proceso de investigación y los enfoques cuantitativo y cualitativo: hacia un modelo integral*. México: Mc Graw-Hill.

Iñigo Carrera, N. (2002). Las huelgas generales, Argentina 1983-2001: un ejercicio de periodización, en *PIMSA, Documentos y Publicaciones 2001*. Buenos Aires.

Iñigo Carrera, N. y Cotarelo, M. C. (2003). Argentina, diciembre de 2001: hito en el proceso de luchas populares, en Seoane, J. *Movimientos sociales y conflictos en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO-Programa OSAL. 2003.

Jones, D., Manzelli, H. y Pecheny, M. (2007). La teoría fundamentada: su aplicación en una investigación sobre vida cotidiana, en Kornblit, A. L. (coord.) *Metodologías cualitativas en Ciencias Sociales. Modelos y procedimientos de análisis*. Buenos Aires: Biblos.

Klachko, P. (2007). Las formas de organización emergentes del ciclo de la rebelión popular de los 90 en la Argentina, en *PIMSA. Documentos y Comunicaciones 2007*, pp. 155-198.

Lenguita P. (2011). Revitalización desde las bases del sindicalismo argentino, en *Nueva Sociedad*. Buenos Aires: Friedrich Ebert. N° 232. pp.137-149.

Manzano, V. (2004). Movimientos sociales y protesta social desde una perspectiva antropológica, en Neufeld, M. R. (comp.) *Antropología Social y Política. Desigualdad y Acción Colectiva*. Oficina de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Marzo de 2004. pp. 45-60.

Martucelli, D. y Svampa, M. (1997) *La Plaza Vacía*. Buenos Aires: Losada.

Mendizaval, N. (2007). *Los componentes del diseño flexible en la investigación cualitativa*, en Vasilachis de Gialdino, N. (coord.) *Estrategias de Investigación Cualitativa*. Buenos Aires: Gedisa.

Merklen, D. (2005). *Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática argentina, 1983-2003*. Buenos Aires: Gorla.

Merino, G. (2012). El Movimiento Obrero Organizado, la crisis de 2001 y el gobierno de Duhalde. El caso de la CGT disidente, en *Revista Socio Histórica*, N° 30, pp. 77-109. Universidad Nacional de La Plata.

Murillo, M. V. (1997). La adaptación del sindicalismo argentino a las reformas de mercado en la primera presidencia de Menem, en *Desarrollo Económico*, Vol. 37, N° 147, octubre-diciembre, 1997, pp. 419-446.

Nemiña, P. (2012). Del blindaje a la intransigencia: Comportamiento del FMI durante la crisis económica argentina (2000-2001), en *Ciclos Historia económica y Social*. 2012, vol. 20, N° 40.

Novaro, M. (2010). *Historia de la Argentina. 1955-2010*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Novick, M. (2001). Nuevas reglas de juego en la Argentina, competitividad y actores sindicales, en de la Garza, E. (comp.), *Los sindicatos frente a los procesos de transición política*. Buenos Aires: CLACSO. pp. 25-46.

Orlansky, D. (1997). Reforma del Estado, restructuración laboral y reconversión sindical. Argentina 1989-1995, en *Estudios Sociológicos*, Vol. 15, N° 45, septiembre-diciembre, 1997, pp. 623-638.

Palomino, H. (2005a). Los sindicatos y los movimientos sociales emergentes del colapso neoliberal Argentina, en De la Garza, E. (comp.), *Sindicatos y Nuevos Movimientos Sociales en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO.

Palomino, H. (2005b). Los cambios en el mundo del trabajo y los dilemas sindicales. 1975-2003, en Suriano, J., *Nueva Historia Argentina*. Buenos Aires: Sudamericana.

Pereyra, S. (2008). *¿La lucha es una sola?* Buenos Aires: Biblioteca Nacional-UNGS.

----- (2013). El 2001 como acontecimiento y como proceso. Desestructuración social y crítica de la política, en Pereyra, S.; Vommaro, G. y Perez, G. *La grieta. Política, economía y cultura después de 2001*. Buenos Aires: Biblos.

Pereyra, S., Vommaro, G y Perez, G. (2013). *La grieta. Política, economía y cultura después de 2001*. Buenos Aires: Biblos.

Pérez, G. (2008). Genealogía del quilombo: aproximaciones profanas a algunos significados del 2001, en Pereyra, S., Pérez, G. y Schuster, F.L. (comps.) *La huella piquetera*. La Plata: Al Margen.

----- (2010) El malestar en el concepto. Ejes de un debate teórico acerca de los movimientos sociales en Latinoamérica, en Massetti, A., Villanueva, E. y Gómez, M. (comps.) *Movilizaciones, protestas e identidades colectivas en la Argentina del Bicentenario*. Buenos Aires: Nueva Trilce.

Piovani, J. I. (2007). La entrevista en profundidad, en Marradi, A., Archenti, N. y Piovani, J. I. *Metodología de la Ciencias Sociales*. Buenos Aires: Emecé.

Piva, A. (2009). Vecinos, Piqueteros y sindicatos disidentes. La dinámica del conflicto social entre 1989 y 2001, en *Argentina en Pedazos*. Buenos Aires: Peña Lillo-Continente.

Pucciarelli, A. (2014). Crisis sobre crisis: La ley de Déficit Cero, en *Los años de la Alianza. La crisis del Orden Neoliberal*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Pucciarelli, A. y Castellani, A. (2014). Los años de la Alianza: transformación de la crisis de acumulación en crisis orgánica, en *Los años de la Alianza*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Ramirez, A. y Viguera, A. (2005). La protesta social en la Argentina entre los setenta y los noventa. Actores, repertorios y horizontes, en *Matériaux pour l'histoire de notre temps*, N° 77. París.

Rauss, D. (2014). El partido justicialista en el gobierno de la Alianza, en *Los años de la Alianza. La crisis del Orden Neoliberal*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Salvia, S. (2011). El país en riesgo. Crisis financiera y gestión neoliberal en Argentina (1999-2001), en *Revista del Centro de Estudios Avanzados*, N° 26, pp. 111-124.

----- (2014). La caída de la Alianza. Neoliberalismo, conflicto social y crisis política en Argentina, en *Colombia Internacional*. Bogotá: Lugar.

Sautu, R. (2005). *Todo es teoría. Objetivos y Métodos de Investigación*. Buenos Aires: Lumiere.

Schuster, F.; Perez, G.; Pereyra, S. (2002). *La trama de la crisis: Modos y formas de protesta social a partir de los acontecimientos de diciembre de 2001*. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino Germani.

Schuster, F. (2006). Transformaciones de la protesta social en Argentina 1989-2003. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Disponible en: <http://www.1iGG.fsoc.uba.ar/Publicaciones/DT/DT48.pdf>

Scribano, A. y Schuster, F. (2001). Protesta social en la Argentina de 2001: entre la normalidad y la ruptura, en *Observatorio Social de América Latina* N° 5. Buenos Aires: CLACSO.

Senén González, S. y Bosoer, F. (1999). *El sindicalismo en tiempos de Menem*. Buenos Aires: Corregidor.

Seoane, M. (2003). *El saqueo de la Argentina*. Buenos Aires: Sudamericana.

Spyropoulos, G. (1991). *Sindicalismo y sociedad*. Buenos Aires: Humánitas.

Svampa, M (2008). *Cambio de época. Movimientos sociales y poder político*, Buenos Aires: Siglo XXI.

Svampa, M. (2013). Tras las lecturas y la huella de diciembre de 2001, en Pereyra, S.; Vommaro, G. y Pérez, G. *La grieta. Política, economía y cultura después de 2001*. Buenos Aires: Biblos.

------(2007). Los avatares del sindicalismo argentino, en *Le Monde Diplomatique*, año VII, N° 91.

Tarrow, S. (1994). *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza Universidad.

Tilly, C. (2000). Acción colectiva, en *Apuntes de Investigación del CECYP*, 4(6), pp. 9-32.

------(1978). *From Mobilization to Revolution*. Nueva York: McGraw-Hill Publishing Company.

Torre, J. C. (1989). *Los sindicatos en el gobierno 1973-1976*. Buenos Aires: CEAL.

----- (1997). *Las dimensiones políticas e institucionales de las reformas estructurales en América Latina*. Naciones Unidas, Comisión económica para América Latina y el Caribe. Santiago de Chile.

Torre, J. C. y Gerchunoff, P. (1999). La economía política de las reformas institucionales en Argentina. Los casos de la política de privatización de ENTEL, la Reforma de la Seguridad Social y la Reforma Laboral, en *Documentos de Trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo. Documento de Trabajo R-349*.

Trajtemberg, D.; Senén González, C. y Medwid, B. (2010). Los determinantes de la negociación colectiva en la Argentina. Debates teóricos y evidencias empíricas, en *Serie Trabajo, Ocupación y Empleo*, N° 9: Una mirada a sectores económicos desde las relaciones laborales y la innovación.

Viguera, A. (2009). Movimientos Sociales y Lucha de Clase, en *Conflicto Social*, año 2, N°1.

Vilas, C. (2001). Como con bronca y junando....Las elecciones del 14 de octubre 2001, en *Realidad Económica*, N° 183. Buenos Aires, octubre de 2001. Disponible en <http://www.iade.org.ar/modules/noticias/print.php?storyid=689>